C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISION DE PRESUPUESTOS

PRESIDENTE: Don Jaime García Añoveros

Sesión número 2

celebrada el miércoles, 14 de diciembre de 1977

SUMARIO

Se abre la sesión a las doce y cinco minutos de la mañana.

Asiste el señor Ministro de Agricultura (Martínez de Genique).

Presupuestos Generales del Estado para 1978. El señor Presidente, al explicar algunos detalles relacionados con el desarrollo de los debates anuncia que la Mesa del Congreso ha acordado que este proyecto de ley se tramite por el procedimiento de urgencia, aunque la Mesa de la Comisión confía en que no será necesario aplicar dicho procedimiento por la autodisciplina que los propios Diputados se impondrán en sus intervenciones. Asimismo, informa el señor Presidente de la asistencia de algunos Ministros para informar en su momento a la Comisión sobre temas relacionados con sus respectivos Departamentos y, después de

extenderse en diversos extremos sobre los procedimientos a seguir en la discusión de los Presupuestos, cede la palabra al señor Ministro de Agricultura para que informe a los señores Diputados sobre temas relativos a su Departamento.

El señor Ministro de Agricultura (Martínez de Genique) expone en líneas generales el planteamiento que se ha seguido en la elaboración del Presupuesto correspondiente a su Departamento y hace referencia a cada una de las enmiendas que los distintos Grupos Parlamentarios han formulado a este capítulo de los Presupuestos.

Se suspende la sesión para que los portavoces de los Grupos Parlamentarios que deseen intervenir en relación con la exposición del señor Ministro de Agricultura formulen por escrito a la Mesa sus peticiones.

Se reanuda la sesión.—Intervienen los señores Lluch Martín (Grupo Socialistas de Ca-

taluña), Barón Crespo (Grupo Socialistas del Congreso), Tamames Gómez (Grupo Comunista), Bustelo García del Real (Grupo Socialistas del Congreso) y Presidente, quien lee la última pregunta, formulada también por el Grupo Socialistas del Congreso.—Seguidamente el señor Ministro de Agricultura (Martínez de Genique) contesta a cada una de las intervenciones de los señores Diputados.—El señor Tamames Gómez solicita una aclaración, que le es dada por el señor Ministro de Agricultura.—Por último, el señor Presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, IRYDA (Gil Alberdi), a requerimiento del señor Ministro de Agricultura, amplía la información solicitada por el señor Tamames Gómez.

Se suspende la sesión a las trece y cuarenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.

Asiste el señor Ministro de Cultura (Cabanillas Gallas).

El señor Presidente anuncia que el señor Ministro de Cultura va a intervenir seguidamente a efectos informativos en relación con las distintas enmiendas que han sido presentadas respecto a la correspondiente Sección de Presupuestos y a continuación contestará a las preguntas que le formulen los miembros de la Comisión.

A continuación el señor Ministro de Cultura (Cabanillas Gallas) se refiere a la estructura general del Presupuesto de su Departamento y analiza sucesivamente la composición y cuantía de las diferentes partidas en que el mismo está dividido, explicando detalladamente las altas y bajas que se han introducido.

El señor Presidente suspende unos minutos la sesión con el fin de que los portavoces de los Grupos entreguen a la Mesa las preguntas que desean formular al señor Ministro.

Se reanuda la sesión.—Intervienen los señores Barón Crespo y Pons Irizabal (Grupo Socialistas del Congreso), Bono Martínez (Grupo Comunista), Lluch Martín (Grupo Socialistas de Cataluña) y Trías Fargas (Minoría Catalana).—El señor Ministro de Cultura (Cabanillas Gallas) contesta seguidamente y con todo detalle a las preguntas y observaciones formuladas por los señores

Diputados que han intervenido.—En el turno de réplica intervienen nuevamente los señores Pons Irizabal, Barón Crespo, Trías Fargas y Lluch Martín.—Contestación del señor Ministro de Cultura.

Se suspende la sesión, ausentándose del salón el señor Ministro de Cultura.

Se reanuda la sesión.—El señor Barón Crespo plantea una cuestión de orden, que es recogida por el señor Presidente, quien anuncia que se entra en el debate del articulado del proyecto de ley.

Artículo 1.º—El señor Barrera Costa defiende su enmienda.—Intervienen los señores López-Bravo y de Castro y Rovira Tarazona.—Se somete a votación la enmienda del señor Barrera Costa, que es rechazada por 19 votos en contra, ninguno a favor y 14 abstenciones.—Explicación del voto por los señores Solana Madariaga (don Francisco Javier), Trías Fargas y Bono Martínez.—Se somete a votación el texto que propone la Ponencia, que es aprobado por 32 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones.—Observación del señor De Lapuerta y Quintero, que es aclarada por el señor Presidente.

Artículos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º—Son aprobados sin discusión.

Artículo 8.º—Se aprueba sin discusión, por 32 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones.—Explican su voto los señores De Vicente Martín, Sánchez Ayuso, Bono Martínez y Meilán Gil.

Artículos 9.º, 10 y 11.—Se aprueban sin discusión.

Artículo 12.—El señor Rovira Tarazona hace algunas observaciones en nombre de la Ponencia.—Seguidamente se aprueba sin discusión.

Artículo 13.—Se aprueba sin discusión la nueva redacción propuesta por la Ponencia.

Artículo 14.—El señor De Vicente Martín defiende la enmienda del Grupo Socialistas del Congreso.—Contestación del señor Rovira Tarazona, por la Ponencia.—Aclaración del señor De Vicente Martín, que es recogida por el señor Rovira Tarazona.—Se somete a votación la enmienda, que es rechazada por 19 votos en contra y 15 a favor, sin abstenciones.—Se somete a votación el texto que propone la Ponencia, que

es aprobado por 19 votos a favor y ninguno en contra, con 14 abstenciones.

Artículos 15 al 24.—Se aprueban sin discusión.

Artículo 25, nuevo.—El señor Presidente da lectura al texto que propone la Ponencia aceptando el espíritu de la enmienda formulada por el Grupo Socialistas de Cataluña.—El señor Martín Toval hace algunas aclaraciones a este texto.—Observación del señor Sodupe Corcuera, que es recogida por el señor Presidente, y seguidamente se aprueba sin discusión el texto propuesto en definitiva para este artículo nuevo.

Artículo 26.—Se aprueba sin discusión.

Disposición adicional primera.—El señor Barón Crespo pide votación para las Disposiciones adicionales por las razones que expone.—A petición del señor Trias Fargas, el señor Presidente pide al señor Secretario que dé lectura al texto que se propone para esta Disposición adicional.—Así lo hace el señor Secretario (Núñez Pérez).—Se somete a votación este texto, que es aprobado por 19 votos a favor y ninguno en contra, con 15 abstenciones.—Observación del señor Rovira Tarazona, que es recogida por el señor Presidente.—El señor Barón Crespo explica su voto.

Disposición adicional segunda.—Se somete a votación el texto que se propone y es aprobado por 18 votos a favor y 14 en contra, con dos abstenciones.—Los señores De Vicente Martín y Sánchez Ayuso explican su voto.

El señor Presidente declara debatido y votado todo el articulado del proyecto de ley.—El señor Barón Crespo pide explicaciones en relación con una enmienda que no le ha sido admitida, explicación que le es dada por el señor Presidente.—El señor Barón Crespo pide conste en acta su protesta.—Se pasa al examen y aprobación de las respectivas Secciones de los Presupuestos, por el orden que señala el señor Presidente.—Disconformidad por parte del señor Barón Crespo por el orden de discusión que propone el señor Presidente.—En vista de ello el señor Presidente pide un cambio de impresiones con los representantes de los Grupos Parlamentarios, como consecuencia del

cual se rechaza el orden que había propuesto el señor Presidente.

Sección una.—Se aprueba sin discusión.

Sección dos.—Se somete a votación, cuyo resultado es 16 votos a favor y 16 en contra, en vista de lo cual se repite la votación, de acuerdo con el artículo 79 del Reglamento. Queda aprobada por 18 votos a favor y 16 en contra, sin abstenciones.

Secciones tres, cuatro y cinco.—Se aprueban sin discusión.—Los señores Barón Crespo y De Lapuerta y Quintero piden que se voten las mociones que han sido formuladas. El señor Presidente anuncia que todas las mociones se votarán al final.

Secciones seis y siete.—Se aprueban sin discusión.—No existen las Secciones ocho, nueve y diez.

Sección once.—A petición del señor Barón Crespo se somete a votación el contenido de esta Sección, que es aprobado por 21 votos a favor y 13 en contra, sin abstenciones.

Secciones doce, trece, catorce y quince.—Se aprueban sin discusión.

El señor Presidente anuncia que se continuará mañana con el examen de la Sección dieciséis, después de la intervención del señor Ministro de Educación y Ciencia.

Se levanta la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.

Se abre la sesión a las doce y cinco minutos de la mañana.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1978

El señor PRESIDENTE: Quiero dar una explicación a los señores Diputados por las contradicciones que se han producido respecto a la citación para esta sesión. Un error en los servicios administrativos motivaron que se citase a una hora, habiendo de rectificarse después, por lo que no ha podido dar comienzo la sesión hasta esta hora.

Antes de que proceda a rendir su informe el señor Ministro de Agricultura, quiero darles cuenta de algunos aspectos relacionados con el desarrollo de los debates. La Mesa del

Congreso ha acordado que este proyecto de ley se tramite por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, no es intención de la Mesa utilizar dicho procedimiento, sino que confía más bien en la autolimitación de los señores Diputados.

Los señores miembros de la Ponencia que han informado diversos proyectos de ley sobre créditos extraordinarios y suplementos de crédito tienen ya el dictamen dispuesto para la firma. Está en la oficina de la Comisión; así que pueden pasar a firmarlo, cuanto antes mejor, para su ulterior tramitación en esta Comisión.

Tienen igualmente a su disposición el informe enviado por Radiotelevisión Española: unas carpetas en relación con datos que se solicitaron por la Ponencia sobre determinados aspectos relacionados con los dos créditos extraordinarios para Radiotelevisión Española. Tendrán a su disposición fotocopias del informe en relación con el proyecto de ley sobre crédito extraordinario para los medios de comunicación del Estado.

La Ponencia acordó solicitar la presencia de tres Ministros, en última instancia, en esta Comisión para informar en relación con las enmiendas subsistentes a las correspondientes Secciones. Se trata del Ministro de Agricultura, del Ministro de Cultura y del Ministro de Educación.

El Ministro de Agricultura informará a continuación. Está ya presente. Había sido citado para las doce y ahora comenzará su informe.

Según se convino con los portavoces, el Ministro que informa tendrá un plazo de media hora, como máximo, para explicar las enmiendas existentes. A continuación, suspendiéndose unos momentos la sesión, se presentarán por escrito las indicaciones de los Grupos Parlamentarios sobre los temas que quieran consultar relativos siempre a las enmiendas presentadas con anterioridad y estas preguntas podrán exponerse verbalmente, si así lo desean, durante cinco minutos por cada Grupo Parlamentario. Al final de estas intervenciones contestará el Ministro.

El plan de trabajo de la Comisión —según estudió ayer la Mesa en su reunión, dada la conveniencia de ir de prisa en lo posible, siempre compatible con el debate sereno en cuan-

to sea necesario— es trabajar sin interrupción mañana y tarde, a partir de hoy, durante todo el tiempo, hasta que se termine de dictaminar el proyecto de ley. Tenemos otros temas en el orden del día, pero se supone que serán de tramitación rápida. Si los señores Diputados —porque algunos de ellos así lo han indicado— estiman conveniente que haya sesión por la noche, con objeto de terminar antes, si la mayoría lo acordara así y se ponen de acuerdo a través de los representantes de cada Grupo, nos lo comunican a la Mesa por la tarde y se decidirá lo que proceda.

Vamos a llamar al Ministro de Agricultura, que está presente en la Cámara, para que proceda a la información. *(Pausa.)*

Señores Diputados, se encuentra con nosotros el Ministro de Agricultura, a quien doy la bienvenida en nombre de la Comisión. Quiero indicarles que ha venido acompañado por el Presidente del IRYDA, del SENPA, del ICONA y del Oficial Mayor del Ministerio, por si alguna de las cuestiones que se suscitan fueran de la competencia de ellos.

De la forma indicada, tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Martínez de Genique): Señores Diputados, previamente a las distintas observaciones que se han hecho al Presupuesto del Departamento, quisiera, en unos breves minutos, hacer un planteamiento general de cuáles han sido las líneas que se han seguido en la elaboración del Presupuesto. Solamente unos minutos que creo enmarcarán claramente las dificultades con que el Departamento se ha encontrado para dotar alguna partida.

Como ustedes saben, la actual coyuntura económica ha limitado las posibilidades presupuestarias del Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, hemos tenido que ajustarnos a unas instrucciones bastante rígidas, aunque totalmente necesarias.

En primer lugar, les haría una exposición de los grandes seis capítulos que el presupuesto del Ministerio de Agricultura se ha repartido y su relación con el año anterior. De estos grandes capítulos, el primero de ellos es el de «Remuneraciones de personal», en el cual hemos pasado de 4.100 a 5.400 millones; es decir, aquí hemos tenido un incremento de

1.500 millones, aproximadamente el 20 por ciento, que es la cantidad máxima que se estableció para el incremento de las remuneraciones de los funcionarios.

El segundo capítulo es el de «Compra de bienes corrientes y de servicios», en el que hemos pasado de 1.252 a 1.465 millones, con un pequeño incremento de 200 millones, aproximadamente un 15 por ciento, que es el máximo que se nos autorizó.

En tercer lugar, el capítulo 4.º, el más importante, que tiene un incremento más notable, como habrán podido observar en el análisis del Presupuesto; hemos pasado de 11.400 a 25.000 millones, es decir, tenemos un incremento de 13.600 millones. Este capítulo es el que se refiere a «Transferencias corrientes», y luego lo detallaré más, porque es el que tiene realmente cierta trascendencia para la evolución del Departamento.

El capítulo 6.º no tiene prácticamente variación, es el de «Operaciones de capital». Pasamos de 2.300 a 2.500 millones, con un incremento pequeño de 200 millones.

En el capítulo 7.º pasamos de 25.200 a 28.200 millones; es decir, un incremento de 3.000 millones.

Y, finalmente, el capítulo 8.º, que no tiene importancia, en el que pasamos de 250 a 1.000 millones; es decir, un incremento de 750 millones.

Como podrán ver los señores Diputados, los incrementos fundamentales del Departamento se refieren al capítulo de «Personal», en 1.500 millones, y al de «Transferencias corrientes y de capital», que es el que voy a exponer un poco más detalladamente.

Estas transferencias, como saben los señores Diputados, no son más que las partidas que se señalan en el Presupuesto del Estado y que se transfieren para la dotación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos. Aunque quizá el crecimiento haya parecido exagerado, queda claramente explicado en la forma siguiente:

Los 13.600 millones de incremento responden a que el Instituto que se denominaba anteriormente de Estudios Agrosociales, y que ahora se denomina IRA (Instituto de Relaciones Agrarias), respecto del cual hay unas observaciones que después trataré de aclarar, tiene un incremento: pasa de 12 a 3.500 mi-

llones; es decir, aquí tenemos prácticamente el incremento de los 3.500 millones de pesetas.

En el FORPPA hemos tenido un incremento de 7.500 millones en la partida que se denomina de «Pérdidas y costos operacionales»; es decir, la partida que va a cubrir las pérdidas que se van produciendo en el organismo a lo largo de una serie de intervenciones. Y hemos tenido también en esta misma partida, referente al FORPPA, un incremento de 1.500 millones en la partida de «Subvenciones del organismo».

Si sumamos estas tres partidas, 1.500 millones, incremento de subvención del FORPPA; 7.500 millones para pérdidas y costos operacionales y 3.500 millones del IRA, nos da prácticamente los 13.600 millones, que es el incremento que realmente ha tenido en su presupuesto el Ministerio de Agricultura este año.

También brevemente, para orientar las líneas que han pretendido potenciar un poco más o que ha sido necesario por una serie de compromisos que, como los señores Diputados saben, van pasando de un ejercicio para otro, las líneas de actuación del Departamento han sido siete fundamentalmente; la primera, de «Orientación y fomento a la producción», donde hemos pasado de 3.100 a 3.500 millones. En esta línea de «Orientación y fomento» tuvimos un incremento del 14 por ciento. «Protección y defensa sanitaria» ha pasado de 1.500 a 1.690 millones, con un incremento del 12 por ciento.

Estoy hablando ya concretamente de lo que son los programas de inversiones (no del programa del Presupuesto total), que son los que marcan la orientación del Departamento, ya que los demás son gastos de personal, gastos normales.

En el primer capítulo, «Orientación y fomento de la producción», pasamos de 3.100 a 3.500 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 14 por ciento. En «Protección y defensa sanitaria» hemos pasado de 1.500 a 1.690 millones, con un incremento del 12 por ciento.

La tercera línea de actuación, que son «Mejoras de la estructura productiva», hemos incrementado un 11 por ciento, pasando de 13.000 a 15.000 millones. Aquí van los gran-

des capítulos del IRYDA, por eso el volumen es de 15.000 millones.

En «Fomento de entidades de transformación y comercialización», hemos conseguido sólo pasar de 1.130 a 1.200 millones, con un incremento imperceptible del 0,67 por ciento.

La quinta línea de actuación, que es «Investigación y capacitación agraria», el incremento es del 14 por ciento. Pasamos de 2.300 a 2.700 millones, y, finalmente, queda el capítulo de «Protección del medio ambiente», en el cual también estamos estabilizados prácticamente, pasando de 4.290 a 4.600 millones, con un incremento del 0,83 por ciento. Luego están las mejoras del medio rural, donde se incluye el capítulo de «Política social agraria y electrificación rural», con un aumento del 36 por ciento, pero nos movemos en magnitudes del orden de 800 millones y pasamos a 1.100 millones.

Con esta presentación inicial, lo que quisiera decir es que el Departamento se ha visto limitado en sus posibilidades de expansión y esto puede dar lugar a que, como han hecho notar los señores Diputados, haya algunas partidas que quedan reducidas en sus posibilidades por dotaciones insuficientes. Esto no es más que una consecuencia de la coyuntura actual en las restricciones presupuestarias con que nos movemos.

A continuación, si los señores Diputados me permiten, voy a pasar a exponer las distintas objeciones y enmiendas que hay al Presupuesto del Organismo. Las he clasificado en cuatro grupos. El primero se refiere a las que se han presentado al Instituto de Relaciones Agrarias, es decir, al IRA. Aquí hay una enmienda, la 68, del Grupo Parlamentario Comunista, en la cual se pide la supresión del crédito en tanto no se reciba suficiente especificación. Hay otra, la 62, también del Grupo Parlamentario Comunista, que propone una reducción de 930 millones. Creo que debe haber un error mecanográfico y que son 630 millones, porque, si no, no coincidiría con la totalidad del Presupuesto.

El mismo Grupo Parlamentario Comunista, en la enmienda 67 propone que estos 630 millones que se reducen al IRA se transfieran a un grupo que se denomina «Subvenciones para gastos de inversiones, instalaciones industriales de las agrupaciones de productores

agrarios». Después hay otra enmienda, del Grupo Socialistas de Cataluña, en la que también se indica la conveniencia de la supresión de la consignación de los 3.500 millones al IRA y su pase al Servicio de Defensa contra Plagas Fitopatológicas.

Yo creo deducir de todas estas observaciones que lo que se está planteando es la necesidad de esta partida presupuestaria para atender a los gastos del Instituto de Relaciones Agrarias. Quiero decir que este Instituto se crea en un Real Decreto del 2 de junio del año 1977, Decreto 1.336. Como consecuencia de este decreto, automáticamente se incorporan al Ministerio de Agricultura 8.416 funcionarios que prestaban sus servicios en las Hermandades Locales, y se incorporan también 725 funcionarios que trabajaban en las Cámaras provinciales. Es decir, que el Ministerio sufre un incremento de nueve mil ciento y pico de funcionarios; un Ministerio que tiene ya del orden de veinticinco mil, se encuentra con más de nueve mil funcionarios que vienen sobre él.

Estos funcionarios venían cobrando sus sueldos con cargo a la Cuota Sindical Agraria, pero ésta queda extinguida, y se señala expresamente la obligación de que los Presupuestos Generales del Estado atenderán al pago de la remuneración de estos funcionarios con cargo a los distintos conceptos que en el mismo se señalan. A efectos de orientación, quiero decir que la Cuota Sindical Agraria, en el año 1977, representó una recaudación de 2.114 millones en el primer semestre y, por tanto, elevado al año es una cifra superior a los 3.290 millones que en estos momentos se proponen.

Las Cámaras Agrarias tienen una serie de funcionarios —creo que esto es importante que lo conozcan los señores Diputados— que vienen derivadas de la propia estructura del Ministerio de Agricultura y del entorno en que se desenvuelven sus actividades. La presencia del Ministerio de Agricultura únicamente en las capitales de provincia hace insuficiente su actuación. Es precisa una presencia local mucho más cerca del agricultor, dado su nivel cultural.

Se han estado utilizando estas Cámaras —y la intención es seguir utilizándolas— como las últimas unidades administrativas del Mi-

nisterio cerca de los agricultores. Esto es lo que justifica el porqué de la permanencia como unidades administrativas de estas Cámaras Agrarias. A modo de ejemplo, diría que estas Cámaras locales y comarcales agrarias vienen elaborando una serie de funciones que yo clasificaría como de gestoría, pero no por ello menos importantes (repito que tengamos en cuenta el entorno cultural en que nos estamos moviendo), donde tienen que confeccionarse las cartillas de agricultor, las declaraciones de seguros de incendio de cosechas, las solicitudes de préstamos para abonos y semillas, las solicitudes cuando existen concesiones a organismos de la Administración, por ejemplo, para piensos. Se realiza una serie de labores de carácter estadístico con estimaciones de cosechas. Se utilizan también estas Cámaras Agrarias para la divulgación de los datos o estadísticas del Ministerio de Agricultura; por ejemplo, normas sobre campañas sanitarias, normas sobre plagas. Se utilizan también para difundir, incluso para rellenar, la documentación necesaria en relación con todos los temas de préstamos agrícolas.

Estas mismas Cámaras Agrarias realizan una serie de trabajos y funciones en cuanto al proyecto de caminos rurales, organización de trabajos comunitarios para la construcción de estos caminos rurales, establecimiento de derramas, etc. Voy a saltar un poco algunas de estas funciones. Tienen una intervención fundamental en todo el tema de recaudación de cuotas de autónomos de la agricultura, de pago de prestaciones de toda clase de ayuda familiar; se utilizan como cauce del Ministerio de Trabajo, hoy Ministerio de Sanidad, formalizando una serie de expedientes a los agricultores sobre asistencia social, jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, nupcialidad, natalidad, y también colaboran tremendamente con los grupos y cooperativas, que les dan un gran volumen de trabajo con toda su documentación.

Las Cámaras Agrarias, en este momento, van a quedar como la unidad local del Ministerio de Agricultura que sirva de intermediario para acercar al agricultor a ese tremendo mundo burocrático de la Administración, que muchas veces le asusta. Creo que es la palabra adecuada.

Esta es la defensa que yo haría del Presupuesto; fundamentalmente, casi la podría centrar diciendo que nos han llegado nueve mil y pico funcionarios, que a estos nueve mil y pico funcionarios hay que pagarles sus sueldos, que la remuneración del personal, según el resumen que se me ha facilitado provincia por provincia y capítulo por capítulo, distinguiendo sueldos y Seguridad Social, suma 3.962 millones, y las diferencias serán cubiertas con algunos otros ingresos o derramas voluntarias que tienen las Cámaras. Prácticamente, la totalidad de la cantidad presupuestada es para poder atender al pago de los sueldos de estos funcionarios que se nos han incorporado.

Los señores Diputados espero que tendrán ocasión de volver a tratar este tema, porque para poder pagar este segundo semestre del año 1977 hemos tenido que acudir a la fórmula de un crédito extraordinario, ya que no teníamos dotación. La prensa de hoy ha recogido, junto con otros temas, que muchos de ellos llevan cinco, seis o siete meses —es la exageración, el caso extraordinario— sin cobrar, porque eso se ha encomendado al Presupuesto del Estado y no se ha procedido a las dotaciones correspondientes.

Juntamente con la defensa haría un comentario sobre los capítulos a los que se ha pretendido transferir la totalidad o parte de esta partida presupuestaria. Se decía que se transfiriese al Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Citopatológica. No es necesario que lo diga; creo que es fácil de comprender que bienvenido sea el incremento de cualquiera de las partidas presupuestadas. De todas formas, el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Citopatológica se vería abrumado si se le dejase semejante cantidad; triplicaríamos los presupuestos de que en el momento actual se dispone, puesto que, realmente, no tiene capacidad de gasto.

Por otra parte, esto representaría que entregáramos al Servicio de Defensa contra Plagas el 60 por ciento del consumo y producción de productos citosanitarios, que el año 1977 se cifra en 7.000 millones de pesetas. Me agradaría mucho poder potenciar este Servicio, darle más dinero, pero nunca en este orden de magnitudes.

En cuanto a la posibilidad de pasar (sigo

en la duda de si son 630 ó 930 millones; es igual) al concepto de «Gastos de subvención e instalaciones industriales de las agrupaciones de productos agrarios», quiero decir que es un capítulo que preocupa mucho al Ministerio de Agricultura, porque estamos intentando realizar una campaña eficaz y efectiva, que vaya más allá de la letra del «Boletín Oficial del Estado», de industrialización agraria. Cualquier posibilidad de incrementar esta partida sería francamente bienvenida, y aquí sí creo que tendríamos capacidad de gasto; pero repito lo mismo, no creo que sea posible minorar las asignaciones señaladas al Instituto de Relaciones Agrarias.

En la prensa, en algún sitio, he leído que parecía se iba a incrementar el Presupuesto del Ministerio de Agricultura en algunos miles de millones. Sugiero, modestamente, a los señores Diputados que éste sería un buen lugar donde podría ir este incremento. Independientemente de que se me solicite alguna ampliación o aclaración, daré estas enmiendas por contestadas.

Voy a pasar al segundo grupo de enmiendas, que son las que se refieren al IRYDA.

Hay una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que en realidad lo que solicita es que se aclaren las partidas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Hay otra del Grupo Parlamentario Comunista que también insiste en que se requiera la suficiente especificación. No me sorprende nada, no conocía la forma en que se había repartido, pero comprendo que entregar un Presupuesto que dice: «Programa», «programa», «programa», sin especificación ninguna, pueda suscitar alguna duda y necesidad de aclaración.

Así, pues, brevemente voy a aclarar a qué se refieren estos programas que figuran con los números 61, 62, 63, 64 y 65/69.

Esta enmienda es la número 69, que, junto con la número 264, son las dos que se refieren al IRYDA. El programa que figura con el artículo 61, por un importe de 550 millones de pesetas, se refiere a la adquisición y distribución de tierras en zonas declaradas de interés nacional. Estamos hablando del IRYDA; en este momento, el IRYDA está actuando fundamentalmente en las zonas de Genil, Cabra, Valdecañas y Almonte-Marismas. Así, pues, esta partida tiene ese destino concreto.

El programa 62, por 164 millones, se refiere a trabajos complementarios de clarificación de tierras y redistribución de la propiedad dentro del tema de concentración parcelaria. Hay que destacar que las obras correspondientes con cargo a las cantidades a que hace referencia este programa deberán ser solicitadas previamente por los interesados y prestando conformidad a su participación en la financiación de las mismas; es decir, son obras complementarias, trabajos complementarios en la esfera de la concentración parcelaria.

El programa 63, que figura por un importe de 13 millones, se refiere a adquisiciones de maquinaria y de ganado por el IRYDA, maquinaria y ganado que es cedido a los colonos de las zonas regables o de fincas de secano expropiadas y que se ceden a estos propietarios, que deberán devolver en un plazo de cinco años. Este es el artículo 63: los 13 millones.

Quedan los 3.522.600.000 pesetas correspondientes al artículo 64. Se trata de uno de los grandes aspectos del IRYDA: la concentración parcelaria. Aquí van todos los proyectos de mejora de infraestructura en las zonas de ordenación de explotaciones, trabajos de caminos, deslindes, desagües, etc.; es decir, los 3.500 millones son para las grandes obras de infraestructura que realiza el IRYDA en materia de concentración parcelaria.

Los artículos 65 y 69 corresponden a la otra vertiente del IRYDA, que es la creación de nuevos regadíos. Estas obras de nuevos regadíos son fundamentalmente una serie de obras de transformación de tierras. Tengo que destacar que, junto con el ICONA, que luego comentaré, son los dos grandes organismos que nos han servido para paliar el paro, para dar ocupación en algunas de las zonas que mayor paro registraban en estos momentos, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Canarias.

Tal es la explicación de estos cinco programas que tan escuetamente figuran en la documentación que se ha repartido a los señores Diputados.

Entre las otras enmiendas está la número 66, que es del Grupo Parlamentario Comunista, y se refiere a una minoración de 250 millones de los capítulos asignados al ICONA

y a una incorporación. Me dicen que está retirada, pero voy a explicarla en un momento.

El señor PRESIDENTE: Señor Tamames, ¿está retirada esa enmienda?

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, en la Ponencia hicimos una declaración expresa retirando esa enmienda que suponía una reducción para el ICONA.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Martínez de Genique): Entonces me la salto, y lo celebro muchísimo.

Ya lo que me quedan son las enmiendas 64 y 65, que se refieren a lo mismo; son dos vertientes de un mismo problema. La número 64 hace referencia a una reducción de 348 millones al Servicio Nacional de Productos Agrarios, SENPA, en el capítulo relativo al programa de regulación de mercados para productos agrarios. Creo que hay una denominación poco adecuada, porque la totalidad son 480 millones y se solicita que sean rebajados a 348. Se refieren a la construcción de la red de almacenamiento de cereales, red de almacenamiento que tiene en estos momentos capacidad aproximadamente para un 20 por ciento de la cosecha total. Se considera que es insuficiente y estamos tratando de potenciarla.

La aclaración que haría a estos 480 millones es la siguiente: parte de ellos corresponden a silos que ya están iniciados, por ejemplo en Barcial del Barco, en el que el año anterior se gastaron 30 millones y a este año corresponden 84; en Marchena, en el que se invirtieron el año pasado 18 y que a este año corresponden 120; en Aliud, que se gastaron 16 el año pasado y que a éste se señalan 40; en Huelva, que se invirtieron 15 y en este año se estiman 60; en Santa Cruz, Belchite, Piedrabuena, silos en que se invirtieron 119 millones y que este año hay que invertir 103. Luego hay unas partidas nuevas para las cuales no hay inversión todavía, que corresponden a la modernización de otros cuatro silos y a la compra de accesorios y equipos de maquinaria por valor de 30 y 10 millones, y al complemento de una serie de locales, oficinas y adquisición de vehículos de 8 y 5 millones. Es decir, aquí hay 30, 10, 8 y 5 millones que no

corresponden a obras iniciadas, sino a obras nuevas. El resto de los 480 millones corresponde a obras que en estos momentos están ya iniciadas.

Y ya para completar la contestación a esta enmienda se pretende que estos 348 millones que se destinarían al SENPA pasasen a la promoción de la agricultura de grupo.

La promoción de agricultura de grupo la lleva el Servicio de Extensión Agraria. El Servicio de Extensión Agraria, cuando yo comenté con él esta enmienda, me dijo que el 20 por ciento de su capacidad de maniobra, de su actuación, está encaminado precisamente a este objetivo, a la promoción de la agricultura de grupo; que el intensificar esta actuación no dependía realmente de estos 348 millones, sino que tendría que aumentar grandemente sus efectivos de personal y que no veía que tuviese capacidad de gasto para poder absorberlas.

Creo que he contestado a todas las enmiendas, pero, de todas formas, yo sí que haría un comentario de carácter general: el Ministerio, en su planificación, ha procurado equilibrar las distintas partidas. Naturalmente, creo que bastantes de los puntos que los señores Diputados han indicado que podrían incrementarse minorando las partidas, efectivamente se pueden incrementar. Yo vería con muchísimo gusto que se incrementasen las mismas. Lo que en este momento ignoro son las posibilidades que ello tiene. De momento no quisiera decir nada más. Si hay alguna cosa que se me haya olvidado, ruego a los señores Diputados que me lo soliciten. De todas formas, quedo a la disposición de todos los señores Diputados para contestar a cuantas preguntas deseen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Durante un plazo breve, de cinco minutos, ruego a los portavoces de los Grupos Parlamentarios que traigan por escrito la nota del tema sobre el que quieren intervenir a continuación, en relación con las explicaciones dadas por el señor Ministro de Agricultura.

Después de una breve interrupción, dijo

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, se han presentado tres solicitudes de palabra

y dos preguntas por escrito. Las tres solicitudes de palabra son del Grupo Socialistas de Cataluña sobre el tema del IRA. Las preguntas son del Grupo Socialista sobre el IRA y del Grupo Comunista sobre el IRA, ASPA y programas del IRYDA.

Por el Grupo Socialistas de Cataluña, ¿quién va a intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Lluch.

El señor LLUCH MARTIN: Señor Ministro, señores Diputados, supongo que a nadie se le escapa que nuestra enmienda al Presupuesto del Instituto de Relaciones Agrarias es una enmienda que está en relación con todos los problemas del campo español y especialmente con la representación democrática de los campesinos. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un Decreto que apareció en el «Boletín Oficial del Estado» nada más y nada menos que el 15 de junio, y que, por lo tanto, había sido fraguado en anterioridad, exactamente el 2 de junio, es decir, en un régimen pre-democrático.

Este Decreto de Cámaras Agrarias es un Real Decreto que nosotros creemos que es inadecuado, que no significa más que la continuación del verticalismo sindicalista en el campo.

Por ejemplo, en estos momentos se continúa pagando con fondos públicos no solamente a los funcionarios, sino también a los Presidentes de las Cámaras Agrarias, forma de obtener unos liberados al servicio de las viejas estructuras verticalistas, que ya quisieran tener para sí los sindicatos democráticos.

Nos parece, por otro lado, que las explicaciones que ha dado el señor Ministro sobre la especificación de los 3.500 millones de pesetas, en el mejor de los casos tiene que ser considerada como una explicación insuficiente, leve, poco detallada o nada detallada. Por lo tanto, nosotros decimos que nos consideramos absolutamente defraudados por la intervención del señor Ministro. Por otro lado, éste es un problema político grave, profundo, puesto que las elecciones sindicales en la ciudad, por lo que hace referencia a los sindicatos obreros, están perfectamente encauzadas, y, en cambio, en el campo están absolutamente por empezar.

Nuestra propuesta de traspasar estos

3.512.600.000 pesetas al Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica evidentemente no tiene el sentido de aumentar las dotaciones a este Servicio, sino, fundamentalmente, de establecer una cuenta-puente mientras no tenga lugar toda una clarificación sobre el Decreto de Cámaras y sobre el Instituto de Relaciones Agrarias, que ya suscitamos en los «Acuerdos de la Moncloa». Como el señor Ministro no ignora, los «Acuerdos de la Moncloa», en lo referente a la agricultura, distan mucho de estar en camino de ser aplicados. Exactamente, en relación con el Decreto de Cámaras Agrarias, se recomienda un Decreto adicional, en consulta con las distintas fuerzas sindicales, que perfeccione el anterior, etc.

Evidentemente, el establecimiento del Instituto de Relaciones Agrarias, como ha recordado ya el propio señor Ministro, y la disposición adicional primera del Decreto de 15 de junio, que se tiene que perfeccionar a través de unas consultas con las fuerzas sindicales, consultas, conversaciones que hasta el momento no han cuajado, no ha llegado a ningún tipo de conclusión.

Por estas razones y, además, por las razones por las que tampoco estamos de acuerdo con el Decreto de Cámaras Agrarias, nosotros no nos damos por satisfechos con la explicación del señor Ministro y, por lo tanto, nos mantenemos en contra de un Decreto que significa muchas cosas, y cosas graves. Por ejemplo, que en las elecciones de las Cámaras Agrarias haya mucha de la gente que realmente ahora está trabajando en el campo que no tenga derecho al voto, como las mujeres, que en una gran proporción desarrollan en el campo tareas productivas, y los hijos de los titulares de explotaciones que normalmente son los que están llevando a cabo las tareas de producción y que pueden ser y han de ser la base para una reforma agraria profunda. A esta gente joven se la mantiene al margen.

En algunos otros artículos, como el 7.º, se introducen intereses extraños o que pueden ser extraños al campo agrario

Por otro lado, el Decreto del Instituto de Relaciones Agrarias, por lo poco que conocemos de él, no contempla situaciones que ahora existen, como los organismos autonómicos, y no me refiero solamente a la Generali-

dad de Cataluña, sino a otros, que están en puertas y también lo ignoran. Por lo tanto, nos parece que la dotación sin explicación para este Instituto de Relaciones Agrarias solamente va a tener un sentido, que va a ser asegurar una masa importante de dinero al servicio de una campaña electoral en la cual este dinero no va a servir precisamente para la defensa de los intereses democráticos de los campesinos.

Por esto nosotros expresamos nuevamente nuestra insatisfacción por la explicación de esta dotación de crédito de una cantidad muy elevada, 3.500 millones de pesetas, que creemos que tiene que ser compatible con el respeto, con la defensa de los intereses de los funcionarios, pero, evidentemente, en una cuestión, en una preocupación global, en un planteamiento global del problema, no buscando soluciones que a la larga van en contra de los intereses que nosotros en este Parlamento defendemos.

Por lo tanto, nosotros insistimos en la defensa del establecimiento de un crédito-puente con el objeto de que en el plazo más breve posible tengan lugar las conversaciones que en los «Acuerdos de la Moncloa» estaban planteadas y que este tema puede ser resuelto antes de la presentación de los Presupuestos al Pleno del Congreso de Diputados, de una manera más correcta, de una manera más democrática, de una manera más adecuada a la situación actual de este país.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Congreso, ¿quién va a intervenir? (Pausa.)

El señor Barón tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso para decir que, desde luego, nos sumamos a la enmienda que ha sido planteada por los Socialistas de Cataluña, y querríamos hacer alguna pregunta al señor Ministro también, porque en relación con este Decreto de 2 de junio se nos plantean grandes interrogantes.

Dicho sea de paso, el 2 de junio se está revelando como una fecha histórica en la vida del país, porque en esta fecha se elaboraron una serie de decretos que realmente nos es-

tán planteando gravísimos problemas en estos momentos. En cierto modo, parece que el 2 de junio se trató de frenar el peso que podía tener la Cámara tras las elecciones del 15 de junio. Lo que nos ha planteado hoy el señor Ministro aquí realmente es una consecuencia de esto. Nos ha planteado el que sin debatirlo y sin conocerlo, como el tema de la AISS, 9.041 funcionarios que no eran del Ministerio de Agricultura pasen al Ministerio. Esto es lo que se plantea, en definitiva. Se nos pide que refrendemos una decisión tomada el 2 de junio a un nivel me parece que no de Decreto-ley, sino simplemente de Real Decreto, que es el rango de la norma que se ha publicado.

Nosotros entendemos que es absolutamente inaceptable, pero, además, entendemos que las manifestaciones del señor Ministro de Agricultura son contradictorias con lo que dice el mismo decreto, porque el decreto dice que las Cámaras (y vuelve a una vieja tradición) son órganos de consulta y colaboración con la Administración sobre temas de interés general; con una representación sindical. Y aquí lo que se nos viene a pedir en el día de hoy es que el Ministerio de Agricultura necesita en cierto modo una correa de transmisión con los agricultores y eso estimamos que es inaceptable, porque si se ha liquidado el Sindicato Vertical entendemos que no hay que hacer ahora una organización estatal que encuadre a todo el campo. En ese sentido, nosotros creemos que hay una insuficiente capacidad, porque la capacidad habrá que demostrarla a través de las elecciones sindicales en las Cámaras y organizaciones representativas de los agricultores, para que no nos encontremos con que los agricultores no tengan capacidad. En este sentido nos parece absolutamente claro que se debe plantear un crédito-puente que resuelva esta situación, y entendemos que las Cámaras no son organismos del Ministerio para convencer o para servir a los agricultores. Son organismos de colaboración que tienen carácter de Corporaciones de Derecho público, no son Delegaciones del Ministerio, en las cuales el contenido político tiene que venir dado por las organizaciones profesionales y no por las consignas que el Ministerio dé.

Nos parece que realmente lo que dice el

decreto puede ser discutible, pero es una filosofía que se puede tomar en consideración. Lo que es absolutamente inaceptable es plantear esto como una rama o delegación del Ministerio. Esto no tiene una lógica, porque si nos fijamos en el mismo decreto (que para nosotros es muy criticable), en la filosofía del decreto no se iba a la estatalización, porque en los artículos 9.º y 10 se habla de los fondos propios de las Cámaras y nosotros creemos que las Cámaras tienen que decidir quiénes deben ser sus funcionarios, porque no acabamos de entender que en el momento en que el Gobierno incluso hace una interpretación tan restrictiva de los «Acuerdos de la Moncloa», como ha ocurrido en el artículo 7.º, apartado 4.º, del decreto sobre política salarial, que casi fuerza a las empresas a despedir al 5 por ciento, aplique un criterio absolutamente contrario a la hora de resolver el problema, no de los funcionarios, sino de un personal procedente de una realidad política, a través de una situación que ha cambiado.

Sobre la base de este decreto entendemos que la exposición del señor Ministro de Agricultura aquí no ha respondido a la filosofía que parece mantener el Gobierno y, además, nos manifestamos absolutamente en desacuerdo, y por eso entendemos que esta enmienda debe prosperar, aceptando simplemente el que exista un crédito-puente para que no se causen situaciones y perjuicios irreparables.

Por último, quiero manifestar también que el Instituto de Relaciones Agrarias no responde, en absoluto, al trabajo que se está haciendo en esta Cámara. Si se va a hacer una Constitución, si es real y absolutamente clave que en el terreno de la agricultura haya una gestión de las autonomías, porque todos sabemos las diferencias que hay entre las agriculturas de España, el crear otro monstruo añadido a la Administración Central de Madrid nos parece nefasto.

Querríamos saber en torno a estos dos criterios básicos cuál es la respuesta del señor Ministro de Agricultura, sobre todo en relación con esta especie de nuevo monstruo estatal que va a servir de correa de transmisión para el Ministerio de Agricultura en todo el país.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Ministro, señor Presidente, señores Diputados, nosotros participamos de muchas de las observaciones, por no decir de todas, que han hecho los representantes del Grupo Socialistas de Cataluña y del Grupo Socialistas del Congreso. Yo me voy a referir a la intervención del señor Ministro en relación con el IRA, las Agrupaciones de Productores Agrarios y al tema de los programas del IRYDA.

Efectivamente, el IRA es una herencia del pasado. Esos 9.000 funcionarios, ya se ha dicho aquí antes, vienen a complicar aún más la situación de un Ministerio de por sí complicado, y, además, en una situación que contrasta con muchos de los aspectos de los propios contratados del Ministerio que yo pienso que estaban en el camino de convertirse en funcionarios, digamos, en una situación no más relevante, pero sí más acuciante, por razón de la propia política del Ministerio.

Luego, el señor Ministro ha expuesto los planteamientos sobre el IRA pensando en este Instituto más bien como una organización estatal, y en las Cámaras también, como última unidad administrativa del Ministerio de Agricultura.

Nosotros estamos absolutamente en contra de esta posición, ya lo hemos dicho muchas veces. El Partido Comunista está en la línea de pensar que hacen falta unas juntas locales campesinas en las que haya representación de los pequeños y medianos explotadores e incluso de los obreros agrícolas, en donde se discutan los problemas de la aplicación y se susciten toda una serie de ideas sobre la política agraria y se acople el cumplimiento de las diversas políticas agrarias, puesto que estamos también de acuerdo en la idea de que en España hay muchas agriculturas en cada área concreta.

De la intervención del señor Ministro se desprende un poco la sensación de que estas Cámaras van a seguir siendo organismos burocráticos en donde se da poca relevancia a la presencia electiva, presencia electiva que, efectivamente, está planteada en el «Pacto de la Moncloa» para mejorar, por no decir cam-

biar totalmente, el sistema del decreto de junio. Además, a propósito del «Pacto de la Moncloa» y el desarrollo del programa agrario allí contenido, querríamos aprovechar la ocasión para poner de relieve que se está retrasando innecesariamente. Quizá nosotros incurrimos en el error en el «Pacto de la Moncloa» de no poner fechas a todos los planteamientos hechos allí, pero lo cierto es que cuando los representantes de la Organización de Agricultores y Ganaderos hace unas semanas se dirigieron, para conseguir entrevistarse con el Presidente del Gobierno o con persona que él designase en la Moncloa, en vez de ser recibidos como honestos ciudadanos representativos de una clase importante de nuestra economía fueron llevados a una Comisaría, donde pasaron bastantes horas de aquel día y del día siguiente, lo cual es una muestra de que no hay un espíritu suficientemente profundizado de que esa renovación de la agricultura española es necesaria y de que hay que guardar las formas, las nuevas formas democráticas, y que no se puede, en una situación como en la que estamos, retirar durante bastantes horas a 25 ciudadanos que representan a muchos centenares de miles de agricultores, aunque no haya habido todavía esas elecciones, porque no hay aún cauce legal para hacerlas, pero las demostraciones agrarias de los últimos meses parece que demuestran que las Uniones de Agricultores y Ganaderos y las organizaciones similares tienen una cierta fuerza. Por eso nosotros planteamos la retirada de esos fondos para el Instituto de Relaciones Agrarias y su paso a actividades que estén vinculadas directamente a la mejora del sistema productivo y a la democratización de todo el sistema de representación de la agricultura.

Eso nos relaciona con el segundo punto de la intervención de nuestro Grupo Parlamentario, Agrupaciones de Productores Agrarios. Nos parece que el hecho de que no se asignen cantidades más importantes a estas entidades demuestra que el Ministerio de Agricultura está haciendo igual que sucedía en los años 50 con la Ley de Fincas manifiestamente mejorable.

Estas entidades tienen una operación de relaciones públicas para demostrar que hay un interés por las Agrupaciones, por las explo-

taciones en común, etc., y otras actividades, pero sin dedicarles la atención ni los fondos necesarios para ello. Y eso es muy importante, porque el pretender resolver los problemas de la agricultura a base de retirar intermediarios que hoy existen, espontáneos, con una larga tradición, que se llevan, naturalmente, una parte grande del precio final de los productos, para sustituirles simplemente por intermediarios estatales, intensamente burocratizados, como pueden ser en parte los MERCOS, o los mercados centrales, etc., nos parece una operación cuando menos discutible. Por ello, a nosotros nos parece también que se deben potenciar las organizaciones de base, porque sólo con Agrupaciones de Productores Agrarios y otras entidades formadas por agricultores que tengan una mejor organización, que sepan resolver mejor sus propios problemas, empezaremos a tener una agricultura en que los protagonistas sean los agricultores y en que desaparezcan los sistemas de tutelas de tantas entidades heredadas del pasado y cuyo desmantelamiento convendría plantearse.

Por último, en relación con los programas del IRYDA, agradecemos mucho la explicación dada por el señor Ministro, pero entendemos que no es la forma de resolver los problemas de la agricultura de grupo el confiárselos a una entidad, a un Servicio del Ministerio, Servicio por lo demás muy prestigioso, uno de los más populares del país, el Servicio de Extensión Agraria, pero que tiene otras funciones que son funciones de asistencia, de divulgación de los conocimientos científicos, agronómicos, etc., pero no, precisamente, el fortalecimiento de las iniciativas de los agricultores para las explotaciones en común, etc.

Por consiguiente, vamos a mantener nuestra propuesta de que haya una desviación importante de recursos para el fomento de la agricultura de grupo.

Y ya para terminar, después de estas tres observaciones, simplemente una pregunta al señor Ministro, que no está totalmente relacionada con nuestras enmiendas, pero que sí se relaciona con sus palabras sobre los programas del IRYDA. Yo le preguntaría al señor Ministro (recordando un poco aquellas críticas que hacía el Banco Mundial en 1962

sobre el excesivo número de programas de puesta en regadío con plazos de realización muy largos) cuántas hectáreas, en términos aproximados, están actualmente en curso de transformación de regadío y qué previsiones tiene el Ministerio para hacer que los gastos de inversión de puesta en regadío se realicen de la forma más racional posible en el futuro. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Existen dos preguntas por escrito del Grupo Socialista. No han sido leídas. ¿Las quiere leer el Grupo Socialista, o basta con que el señor Ministro las conteste?

El señor BARON CRESPO: Siempre es mejor que la Comisión conozca las preguntas.

El señor BUSTELO GARCIA DEL REAL: Con su venia, señor Presidente, quería ampliar un poco la pregunta que hacemos y que hemos depositado en la Mesa. Es una pregunta tal vez de índole muy general, tal vez teórica, pero breve, dirigida al señor Ministro. Se refiere a que el Departamento de Agricultura no ha aumentado este año demasiado su Presupuesto. En realidad, en términos relativos, lo ha disminuido. Ha pasado del 4,60 del año pasado a un 4,40 por ciento, pero en términos absolutos. Como nos ha indicado el señor Ministro, ha aumentado en 13.500 millones, sobre todo el apartado del capítulo 4.º: «Transferencias corrientes».

Teniendo en cuenta que un Ministerio de Agricultura, entre sus muchas funciones, tiene fundamentalmente dos, que son, por un lado, ayudar a la producción y al consumo agropecuario, y, por otro, mejorar y reestructurar todo el campo español, lo que queríamos preguntar al señor Ministro es por qué ese aumento se ha cifrado en el capítulo de «Transferencias corrientes», que es precisamente esa función de mejorar, sí, pero mejorar algo que ya existe y no la de intentar cambiarlo.

En relación con esto, queremos saber si el señor Ministro considera satisfactoria esa proporción de los gastos de su Departamento entre estos dos capítulos generales, es decir, entre ayuda a la producción y otros gastos más de fondo como pueden ser los de rees-

tructuración, investigación, programación, etcétera. Esta preocupación nos viene motivada por esto que pensamos nosotros, con cierta razón, que se viene diciendo en España desde hace mucho tiempo, y es que la agricultura no ataca los problemas de fondo del campo español, o por lo menos no los ataca suficientemente.

El señor PRESIDENTE: La otra pregunta del Grupo Socialista dice lo siguiente: «En la Memoria Presupuestaria se habla, como objetivo fundamental, de las ayudas para mantener la renta de los agricultores por un importe de 9.000 millones de pesetas, más 7.500 millones de pesetas para cubrir las pérdidas por las intervenciones autorizadas. Sin embargo, en su intervención ha hablado de 1.500 millones para ayudas, lo cual coincide con el Presupuesto de la Sección. ¿Cómo lo explica?».

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Martínez de Genique): Señores Diputados, yo creo que lo que me están planteando es que explique todo un programa de política agraria, lo cual es un poco complicado, pero voy a intentar concretarme a alguna de las preguntas.

El Ministerio de Agricultura, al realizar el Presupuesto, tiene que ajustarse necesariamente a la legalidad vigente en el momento en que el Presupuesto se elabora.

Y en relación con el tema del IRA, que es el primero que se debate, el Decreto de 2 de junio, que es, efectivamente, el punto base, es un decreto que se dicta en uso de las autorizaciones del Real Decreto-ley número 31/1977, de 2 de junio. Es, pues, un decreto elaborado en función de una autorización de un Decreto-ley. Este Decreto-ley señala que para el pago a estos funcionarios se atenderán las subvenciones que para su normal funcionamiento puedan establecerse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a sus funciones, señala que serán órganos consultivos de la Administración, órganos de colaboración con la Administración, que podrán desarrollar funciones, servicios y gestiones delegadas en colaboración y en participación con ciertos servicios de la Administración.

Tengo que decir —y no es que quiera escurrir el bulto— que yo no participé en la redacción de ese Decreto-ley, pero me da la sensación de que en ese momento lo que se pretendía era administrativizar estas Cámaras Agrarias y despolitizarlas —creo que ésa debió ser la intención— y convertirlas en unos órganos de colaboración y consulta que sirviesen tanto de correa de transmisión hacia abajo como de correa de transmisión hacia arriba.

También he de manifestar que en el «Pacto de la Moncloa» se incorporó este tema de las Cámaras Agrarias y es un tema que está todavía sin resolver. Ayer mismo cité a los grupos, a las organizaciones profesionales agrarias, para iniciar las consultas, para desarrollar este tema de las Cámaras Agrarias, en reuniones que se iniciarán mañana jueves a las cinco de la tarde. Es decir, que estamos en el camino de desarrollar este decreto complementario del que he mencionado sobre las Cámaras Agrarias, nunca será el Ministro obstáculo para que se le dé el contenido democrático que se considere oportuno. Conjuntamente, también tendremos que desarrollar las normas necesarias para poder ir a unas elecciones que den un cierto contenido a las personas que van a dirigir estas Cámaras Agrarias.

O sea, que, en este sentido, quiero resaltar que el Presupuesto del Ministerio se tiene que ajustar a una legalidad vigente en el momento en que se realiza.

Respecto al desarrollo de los «Pactos de la Moncloa» y modificación de este decreto en su caso, estamos en ello, ya que mañana mismo se va a iniciar la reunión con los representantes de las Agrupaciones Agrarias. Por último, he de señalar que el Ministerio trató de crear unas Comisiones económico-administrativas que controlasen la totalidad de la utilización de estos fondos de que podían disponer las Cámaras. Estas Comisiones están funcionando a nivel provincial y a nivel central, con lo cual se ha querido dar una característica más.

No es que discrepe mucho de las cosas que se han dicho aquí, de que quizá la función que pudieran desempeñar estas Cámaras no sea estrictamente de tipo administrativo, pero ha habido que cubrir un momento en

que corriamos el riesgo de que una serie de servicios que el agricultor recibía a través de estas Cámaras (indudablemente integradas en un sistema de sindicalismo vertical) desapareciesen, y nos encontrásemos con una verdadera situación de desolación del agricultor, que no hubiera sabido a quién acudir, y ha habido que mantenerlas en su estructura.

En cuanto a que el informe ha sido poco detallado, lo siento. Yo pudiera haber dado un informe muchísimo más detallado de los miles de millones que se destinan a este Organismo. Tenía aquí los Presupuestos por provincias y por partidas; pero creí que no era necesario. Las remuneraciones de personal cubren 3.900 millones; las compras de bienes corrientes y servicios, 500 millones; intereses, 59 millones; transferencias, 140 millones, e imprevistos, 60 millones. Lo que puedo asegurar es que la totalidad de estas cantidades a lo que fundamentalmente van destinadas es al pago de los sueldos, al pago de la Seguridad Social, al pago de los trienios, etc.

Evidentemente, el decreto que incorporó el IRA al Ministerio de Agricultura, en una de sus últimas disposiciones decía que los funcionarios de esta Administración pasaban automáticamente a ser funcionarios del IRA, en escalas a extinguir; que el IRA se integraba en el Ministerio de Agricultura, y que estos funcionarios prestarían sus servicios como funcionarios de carrera.

En fin, esto podría haberse hecho de otra forma, pero es la situación con la que nos hemos encontrado en este momento.

Creo que después de estas conversaciones que se tengan estos días sucesivos (mañana, pasado mañana, los que sean necesarios), con este decreto, que responde a un momento predemocrático, conseguiremos hacer una estructura totalmente democrática. Posteriormente, una vez celebradas las elecciones, si las personas que lleven la gerencia, la dirección de las Cámaras Agrarias o de las Cámaras Locales, desean que se haga una nueva estructura, que las funciones sean distintas, será el momento oportuno para cambiarlas totalmente si se considera necesario. Lo que yo entiendo peligroso para el propio campo es que hubiésemos desmantelado totalmente estas Cámaras, que hubiésemos dejado a los agricultores sin tutela por ninguna parte, y

de alguna forma por la Administración, cuando realmente a esto era a lo que estaban acostumbradas.

En relación con la agricultura de grupo, o de las Agrupaciones Agrarias, es un tema que preocupa mucho al Ministerio de Agricultura, y estamos tratando de fomentarlo por todos los caminos. Quizá sean insuficientes las dotaciones. Yo no tengo en este momento las previsiones iniciales que se hicieron en el Presupuesto del Ministerio, pero no me sorprendería que figurasen en algunas de las partidas cantidades superiores. Ya indiqué que nos hemos visto obligados a restringirlos, y por eso quizá falten algunas mayores cantidades. Pero sí quiero que quede aquí constancia clara de que una de las obsesiones del Ministerio de Agricultura es la agricultura de grupo y las Asociaciones Agrarias, porque estamos convencidos de que en el momento actual es el único camino eficaz con que contamos para conseguir que gran parte de la renta de los agricultores, que se pierde por unos caminos extraños hasta llegar al consumidor, revierta sobre el sector agrario. En esto, nuestro apoyo va a ser total y absoluto. Cualquier partida que llegue, bien venida sea.

Respecto a una pregunta que se me ha hecho de cuántas hectáreas hay en curso de regadío, qué previsiones existen, de qué forma se piensa conseguir una mayor eficacia, tengo que decir que las instrucciones que en este momento tiene el IRYDA son terminar todo lo que está iniciado y conseguir que donde se establezcan nuevos regadíos sean unos planes completos, que no sean unos simples planes de puesta en regadío, sino que esté cubierta la industrialización y la comercialización de los productos que se van a elaborar allí, y que se consiga fomentar toda esta agricultura de grupo, todas estas asociaciones del campo. Estas son las instrucciones que tiene el IRYDA. Porque creo que uno de los riesgos y de los defectos que hemos corrido en estos últimos años es poner en regadío unas superficies con más o menos coste, pero como si la agricultura estuviese justificada en el momento en que el producto queda al borde de la finca.

Desde luego, las actuaciones que en este momento se llevan es sobre la línea de que tiene que existir, junto con la puesta en mar-

cha de los regadíos, todo un proceso de comercialización e industrialización, a ser posible a través de cooperativas o de otros grupos de entidades de carácter asociativo de los agricultores, que permita tener claro cuál es el futuro de las producciones de esas zonas.

Hay otras observaciones que me han hecho, entre ellas dos que están un poco relacionadas.

Aparte de lo que expuso de que el incremento más fuerte que tenía el Ministerio de Agricultura era en el capítulo 4.º, precisamente de esos 13.000 millones, tengo ahora que decir que hay otro incremento en el capítulo 7.º, que es el de «Transferencias de capital», que se incrementa en 3.000 millones de pesetas, que es realmente lo que va a inversiones. La explicación es que de los 13.000 millones, 3.000 es la cantidad que precisamente va al IRA, y ya decía que hay también un incremento de 7.500 millones de pesetas que va a pérdidas y costes operacionales del FORPPA; es decir, son pérdidas de años anteriores que por no haber existido previsión de las mismas van a tener ustedes también que examinar los correspondientes créditos extraordinarios por cuantía bastante elevada. Y había, finalmente, un incremento de 1.500 millones sobre los 8.500 millones del año anterior.

Aquí quisiera hacer dos separaciones. El incremento de los 13.000 millones va fundamentalmente al IRA y al FORPPA. Al IRA, para pagar a estos funcionarios, y al FORPPA para hacer frente a la pérdida de las intervenciones que el Organismo puede tener a lo largo del año 1978. La palabra «pérdidas», a mí no me ha gustado nunca, porque da la sensación de que procede de una mala gestión; que donde se pensó que iba a haber un beneficio, o al menos una situación de balanza equilibrada, ha habido pérdidas. Me gusta más la expresión «costes operacionales».

Al FORPPA se le encomiendan una serie de operaciones que ya de por sí se sabe que van a originar una serie de costes. Se estima que para el año que viene estos costes se cubrirán con 7.500 millones de pesetas, que el Ministro de Agricultura cree que es una cifra muy ponderada, ya que los intereses que tenga que pagar el FORPPA por la utilización de los créditos de que dispone con cargo a las

pólizas del Banco de España me temo que me cubran 7.500 millones, con lo que nos van a quedar muy pocas cantidades para poder hacer frente a costes operacionales de otro tipo. En fin, éste es un comentario que, como Ministro de Agricultura, hago.

En cuanto al incremento de 8.500 a 10.000 millones de pesetas, hay una diferencia de 1.500 millones, y aquí creo que entre la Memoria y el Presupuesto hay un error, porque la Memoria habla de 9.000 millones y el Presupuesto tiene 10.000, que naturalmente tomo como cifra buena. Estos 10.000 millones son las partidas normales que el FORPPA utiliza para toda esta serie de subvenciones, unas veces al ganado, otras a los productos hortofrutícolas, otras veces a la leche, a primas a la exportación, Servicio Nacional de Cereales cuando tiene que hacer abastecimiento de piensos, etc.

Yo creo que con esto quedan contestadas estas dos preguntas.

Respecto a si no me parecía oportuno que la partida de 13.000 millones estuviese incorporada en otro capítulo, creo que no es posible, porque está para estas tres partidas. Lo que quisiera es que hubiese sido mayor, pero respeto naturalmente los criterios del Ministerio, que son los que hay que respetar en este momento. Entonces no hay más fórmula que repartir ese incremento en estas tres partidas: 3.500, 7.500 y 1.500 millones.

En cuanto a la observación de esa discrepancia que hay, diré que las partidas del FORPPA son exactamente 17.400 millones para pago de funcionarios, 10.000 para subvenciones y 7.500 para pérdidas y costes operacionales que se produzcan en el ejercicio.

Creo que queda contestada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por su intervención.

El señor TAMAMES GOMEZ: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: El señor Tamames tiene la palabra.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, creo que al señor Ministro quizá se le ha escapado dar la cifra que yo le solicité, es

decir, el total de hectáreas actualmente en curso de transformación para puesta en regadío.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Agricultura tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA (Martínez de Genique): Se me han pasado unos datos para no hablar de memoria; pero pienso que el Presidente del IRYDA podría contestar a este respecto mejor que yo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del IRYDA.

El señor PRESIDENTE DEL IRYDA (Gil-Alberdi y Ruiz de Zárate): Señor Presidente, señor Ministro, señores Diputados, como todos ustedes saben, el IRYDA no es un organismo de coyuntura. Actúa en coyunturas, en determinadas ocasiones, como ha actuado hace poco combatiendo el paro en las ocho provincias andaluzas, en las dos extremeñas y en las dos canarias, así como en las zonas declaradas catastróficas, pero su gran actuación es a plazo medio y plazo largo.

La pregunta del señor Tamames sobre en qué superficie está actuando el Instituto es difícil de contestar. Estamos trabajando ahora en 200.000 hectáreas, que, como ustedes deben de saber, fue un plan bienal que se firmó entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas a finales del año pasado. Para este trabajo del IRYDA y Obras Públicas (porque son obras conjuntas, divididas regionalmente) se exigían unos determinados recursos financieros que no fue posible obtener ni el año 1977 ni el año 1978.

Siguiendo el criterio del Ministerio de Agricultura actual, de dedicar los máximos recursos posibles a terminar ciertas zonas rápidamente, en el año 1977 se van a acabar 25.000 hectáreas de esas 200.000, y el año que viene 33.000 hectáreas. En el resto de las hectáreas también se está trabajando, puesto que hay estudios previos, hay declaraciones de interés nacional, hay trabajos, proyectos hechos e incluso algunos trabajos de obras. Pero el objetivo primordial del Ministerio en este año y en el que viene es acabar unos perímetros concretos, que, insisto, van a sumar 25.000

hectáreas este año y 33.000 el que viene. Si hubiésemos tenido la dotación necesaria en el bienio, de 19.000 millones de pesetas para regadíos, entonces los hubiésemos podido acometer; como no las teníamos, no los hemos podido hacer.

Con eso creo que queda contestada la pregunta del señor Tamames.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del IRYDA.

Si están contestadas todas las preguntas, podemos continuar dentro de unos minutos, después de los indispensables para despedir al señor Ministro.

Después de una breve interrupción, dijo

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, en vista de la hora que es, como queda ya poco tiempo para la hora del almuerzo, continuaremos esta tarde, a las cinco. Quiero indicarles que intervendrá el señor Ministro de Cultura y a continuación comenzaremos el debate sobre el articulado del proyecto de ley.

Se suspende la sesión.

Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el orden establecido por la Mesa, corresponde ahora la intervención, a efectos informativos, del señor Ministro de Cultura, que está ya en la Cámara y que va a entrar en la sala, para proceder al informe. *(El señor Ministro de Cultura entra en la sala.)*

Doy la bienvenida al señor Ministro en nombre de la Comisión. Como ya conocen SS. SS., tiene un plazo indicativo de media hora para informar en relación con las enmiendas subsistentes respecto de la Sección correspondiente del presupuesto de gastos. Después harán SS. SS. las preguntas en la forma que ya conocen y a continuación el señor Ministro podrá contestar a todas las preguntas que se hayan hecho.

El señor Ministro de Cultura tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE CULTURA (Caballitas Gallas): Señoras y señores Diputados, muchas gracias por darme opción a poder exponer algunas líneas de mi Departamento que puedan servir para justificar el contenido de su presupuesto, intentando, además, contestar en un sentido genérico a lo que puede llamarse las líneas de orientación de las enmiendas presentadas.

La estructura del presupuesto de mi Departamento, sobre diecinueve mil y pico millones de pesetas, quiero exponérsela a SS. SS. dividida, fuera de los formalismos puramente profesionales, en unas líneas muy elementales, pero de fácil comprensión para todos.

En gastos generales —entendiendo por gastos generales personal y gastos de funcionamiento— mi Ministerio absorbe un 36 por ciento, aproximadamente, de la cifra indicada; en el ámbito de las subvenciones con fin determinado, es decir, subvenciones específicas para fines concretos, un 40,92; en el ámbito de subvenciones libres, un 5,34. Se completa el presupuesto con el plan de inversiones públicas a base de que los capítulos VI y VII —en sus dos modalidades de este último— alcanzan unos 3.381 millones de pesetas, lo que significa un 17,47 por ciento.

¿Cuáles son las notas de este presupuesto? A mi modo de ver, la primera de ellas es responder a un supuesto nuevo: No existía hasta el momento el Ministerio de Cultura, y por eso el momento histórico en que surge necesita decantar unas cuantas notas, que yo considero fundamentales precisamente para darnos base después a poder contestar a las enmiendas presentadas.

¿Cuáles son estos factores en estos momentos afectados en el campo del tema de lo cultural? El primero de ellos es el reconocimiento de la diversidad cultural, es decir, la aceptación de un pluralismo cultural más entendido como fuente de armonía que como causa o motivo de antítesis.

Este presupuesto de que las dotaciones de pervivencia y de supervivencia de las culturas las hacen inicialmente iguales a todas ellas y las permite al mismo tiempo ser diferentes, es decir, esta constante de que el Mi-

nisterio de Cultura tiene que enfocar su orientación en la captación de la idea del pluralismo cultural, me permite ya apuntar, en relación con alguna enmienda presentada por un grupo minoritario, que no parece necesario insistir en las partidas del presupuesto en cuanto a la actividad a desarrollar en menciones específicas regionales o de nacionalidades, por la sencilla razón de que la actividad del Ministerio es comprensiva de toda la realidad histórica de España.

En segundo lugar, el Ministerio responde a una concepción nueva del derecho de la cultura. ¿Qué ha pasado con la concepción de lo cultural hasta el momento presente? Pues, en líneas muy elementales, diría que hay dos fechas claves, la del 48 y la de hace un par de años, entendiendo el enfoque o planteamiento de lo cultural. Hasta el 48 la cultura era entendida como un derecho a participar en el fenómeno cultural, al que se le atribuían normalmente dos características: la universalidad (se debía tener derecho a participar en todo) y la igualdad de oportunidades (todos debían poder participar). Esta es la tesis de las declaraciones de derecho de esas épocas. En el momento presente hay un cambio que pasa de la pura abstracción del reconocimiento del derecho a la cultura a una realidad más concreta que permite estimar que el Estado está obligado a proporcionar los medios para el ejercicio de la actividad cultural. Entonces se abren tres vertientes en el que este derecho a la cultura se exterioriza: Respecto al ser que es capaz de crear cultura, tesis del artista o derechos del artista, que se concentran, fundamentalmente, en el derecho a la creación, esto es, en la posibilidad de crear y en fomentar todas las posibilidades para que este derecho a la creación se mantenga y se desarrolle; para el público, el derecho a acceder a la cultura, y para el Estado, el derecho entendido en el sentido de deber de coadyuvar al fenómeno cultural en la triple vertiente de apoyar las estructuras que desarrollan lo cultural, realizan una ayuda cualitativa basada en lo que puede llamarse hoy el concepto de democracia concreta, es decir, democracia de reconocimiento no abstracto de descentralizar todo concepto de pluralismo ya aceptado y estimular el hecho y la realidad culturales.

¿Por qué hago esta exposición? Por la sencilla razón de que la necesidad de ofertar bienes culturales plantea el problema de quién tiene que ofertarlos y cómo tienen que ser ofertados en relación con el planteamiento de una de las enmiendas hechas especialmente por los representantes de los Partidos Comunistas y Socialistas. La pregunta es: En la situación actual española, el Estado, en comparación de otros supuestos nacionales extranjeros, por un conjunto de circunstancias históricas que aquí no es dable reconstruir, no comunica ni aporta a la cultura unas cifras proporcionales a la media que llamamos europea. Pero, si esto fuera poco, tampoco la realidad sociológica, en las dos vertientes, la de la vida local y la de la vida privada, es decir, campo de las funciones y campo de los municipios y las regiones, aporta a la realidad cultural unas altas cifras o, por lo menos, unas cifras análogas a las medias internacionales. Cualquier utilización de estadísticas sería en este caso desalentador, y por eso no me interesa más que dejar sentado, ante la obligación de proporcionar unos bienes culturales, cuál es el mejor mecanismo para que sean proporcionados aquí y ahora; es decir, realismo presupuestario en razón de que el tiempo marca la creación de las cosas y que en este momento la política del Ministerio tiene que responder a un intento de afrontar esa realidad y darle soluciones prácticas.

¿Cuáles son las tres grandes ideas que han movido al Ministerio a plantear un fenómeno que diría yo de subvenciones con fin determinado, complementado con un fenómeno de subvenciones indeterminadas? Las tres ideas importantes son: primera y anterior a todas; nosotros tenemos que realizar hoy, antes que nada, un fenómeno de inventario de la realidad cultural española, es decir, integrar el patrimonio cultural en la vida ciudadana y cotidiana, decantar cómo se compone este patrimonio, no sólo desde el punto de vista de bienes inmobiliarios, sino también de posibilidades de utilización de los servicios o locales para cumplimiento de fines culturales. El equivocarse en la necesidad inexcusable de este planteamiento quizá pueda hacer comprender el intento de afrontar la solución de los temas culturales por otros ámbitos.

Los inventarios fueron el primer paso dado

en todos los países que se encontraron con una realidad si no idéntica por lo menos semejante a la nuestra. Es cierto que lo hicieron hace muchos años. Concretamente, en Suiza en 1964; en Alemania, también en el mismo año 1964, con unas finalidades concretas que al principio eran puramente lo que podríamos llamar inventario simple, y que después fueron ya hilvanadas con la aplicación de la informática, que permitía unas formas homogéneas de aplicación de estos bienes. Pero lo importante es que este inventario respondía —insisto mucho— no sólo a inventariar monumentos, obras de arte, sino realidades o lugares donde se pudiera desarrollar actividad cultural; es decir, se trataba de poner en balance en un momento determinado todas las posibilidades culturales de un país. Sobre ese inventario se distinguían dos vertientes: la vertiente del patrimonio artístico y la vertiente de los otros medios de utilización culturales.

La vertiente del patrimonio artístico es la más sencilla, no plantea problemas en cuanto a las enmiendas presentadas, pues en el fondo están sometidas a unas reglas que casi diría son constantes en el mundo actual civilizado, que imponen la obligación de conservar, la obligación de habitar, es decir, dar vida a las piedras, la obligación de conceder unos derechos a la restauración y el tratamiento fiscal, si se cumplen unos fines de destino cultural en la utilización de estos bienes. Yo digo que los principios son constantes porque, desde que los apuntó más o menos Malraux, prácticamente en todos los países civilizados se trata de dotar a unos bienes inmuebles de un destino cultural y de proporcionar un beneficio a quien restaura en determinadas condiciones o a quien adscribe fines culturales a estos bienes.

El problema para mí estaba en el otro ámbito, en el ámbito de que España tenía que realizar y tiene que realizar un inventario de toda su existencia de posibilidades de actividades culturales locales infrautilizadas, es decir, de una infraestructura cultural prácticamente no aplicada a sus fines y desperdigada por toda la realidad nacional.

¿Por qué digo esto? Porque, en el fondo, desde el punto de vista práctico, cuando alguna de las enmiendas que se presentan in-

siste en la idea casi constante de que es conveniente superar el mecanismo de las subvenciones con el mecanismo de los equipamientos culturales, está olvidando que no se trata en nuestro país de inexistencia de posibilidades de realizar la actividad, sino de no utilización de unas posibilidades existentes y que no hay que confundir una política de restauración de monumentos con el tratamiento de las nuevas ideas de lo que puede llamarse el desarrollo o el fomento de la actividad cultural.

¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar para declarar superior a las inversiones concretas en bienes determinados, la programación respecto del desarrollo de esa actividad cultural? Pues se va a utilizar un mecanismo nuevo, que es la idea del convenio cultural. El convenio cultural responde, y es clave para entender el principio presupuestario del Ministerio, al reconocimiento, primero, del pluralismo cultural; segundo, del fenómeno de centralización; tercero, de la imposibilidad de la planificación de una inversión adecuada de las subvenciones anuales, que prácticamente respondían antes a un paternalismo o, por lo menos, a un dirigismo cultural. Sus justificaciones tradicionales, históricas y dogmáticas son ya muy conocidas. Sirven, además, los convenios culturales para completar el otro campo, absolutamente intocado aún en materia cultural, que es el campo de la investigación y de los indicadores culturales, esto es, para afrontar una estadística cultural que, partiendo de aquel inventario previo y a través del mecanismo de los convenios, empieza a situar a nuestro país en cifras que puedan ser indiciarias dentro del desarrollo por lo menos occidental.

¿Qué es un convenio cultural? Un convenio cultural es una carta pactada con una entidad normalmente local, provincial o regional, en virtud de la cual se establecen las bases de tratamiento de toda la política cultural para un tiempo que muchas veces excede de la pura anualidad.

Sus consecuencias prácticas son: primero, se inicia un proceso de coordinación entre la utilización de las subvenciones y el destino de las mismas; segundo, se aprovecha muchísimo más la infrarrealidad existente, porque se adapta al supuesto local y al regional; ter-

cero, se logra, además, el apoyo de las iniciativas locales, porque se trata de inversiones o de subvenciones realizadas en la cercanía del destinatario natural de las mismas; cuarto, se produce un acceso a la cultura de todas las capas sociales, en un entorno determinado; quinto, se ratifica la identidad cultural en las zonas, con lo cual hay el fomento posible de las lenguas vernáculas o lo que puede llamarse de las formas de vida tradicionales de determinado entorno con el que se pacta. Se anticipa por primera vez una política cultural a medio plazo que excede, como decía yo antes, de las anualidades. Por ejemplo, la última Carta Francesa firmada, que es la de Alsacia, ya tiene una duración de tres años, en virtud de la cual —y a eso voy, señores Diputados, para explicar qué relación tiene esto con la enmienda presentada por los señores miembros del Partido Comunista y del Partido Socialista— se consigue lo que será el desiderátum de un Ministerio de la Cultural: tener prácticamente comprometidas sus subvenciones cada año a mediados de año y gran parte de ellas comprometidas para más de un año. Porque eso significará que la carta o el pacto o el convenio o el concierto firmado con la región equis o zeta ha podido planificar una inversión de esas subvenciones a lo largo de todo el ámbito del Departamento, no exclusiva ni unilateralmente por Direcciones. Y de ahí la compensación de que una cifra importante de subvenciones esté también en la Subsecretaría, porque actúa de «pendant» o de garantía de que se puedan completar algunas inversiones cuando el tipo de actividad que hay que fomentar en esa región excede de la peculiaridad de unas Direcciones o de las posibilidades de una Dirección General.

Si pensamos en la enorme utilidad que tiene este compromiso de créditos; si pensamos, además, que las cartas están normalmente vinculadas a declaraciones de principios, se firman con notoriedad y son exhibidas; y si la adscripción de las subvenciones se hace de un modo mucho más estable, se comprenderá por qué para mí resulta mucho más evidente la ventaja de la política de convenios que la ventaja de la política de equipamientos culturales en la que insisten los Diputados de los Grupos a que he hecho referencia. Por-

que no se trata de invertir en cosas concretas por invertir en cosas concretas o por preverse del riesgo posible de cómo se utilicen unas subvenciones. Las subvenciones, en el Ministerio de Cultura, no tendrán sentido si no descansan precisamente en una selectividad de lo que hay que hacer por vía de convenios culturales firmados.

Al lado de esa enmienda genérica, a la que he dedicado una atención quizá excesiva, más bien por tener que explicar lo que significa de cambio de enfoque y, por tanto, justificar cuál es la orientación ministerial en este caso, existe una serie de enmiendas presentadas que responden a motivaciones diversas. Algunas no afrontan el tema de que, naturalmente, los Ministerios, frente al plan de inversiones públicas del cuatrienio 1976-1979, tienen una posición absolutamente pasiva, son normas de Hacienda declaradas intocables y son conocidas en este sentido por todos los señores Diputados. Nuestro plan de inversiones públicas absorbe, como decía antes, un 17 por ciento, son 3.381 millones, de los cuales mil y pico se adjudican al Patrimonio, es decir, a la restauración prácticamente de edificios, y trescientos y pico a bibliotecas.

Segundo: enmiendas que parten de la idea de confusión entre las consignaciones de capital; es decir, inversiones de capital y transferencias de capital. Por ejemplo, se reprocha a algunas de las Direcciones Generales, concretamente a las Direcciones Generales de Desarrollo Comunitario y de la Juventud, que no tienen consignación en estas partidas, que son las que aparentemente dan más tranquilidad a la inversión, porque se dedican a inversiones reales. No la tienen por una razón: porque el plan de inversiones es anterior a su creación.

Se reprocha al Instituto Nacional del Libro la constancia de una partida sin aclarar, de un importe de doscientos y pico millones, quizá porque no se ha procedido a un conocimiento exacto de la Memoria del Ministerio que aclaraba que el 95 por ciento de esta cantidad no se dirige al Instituto Nacional del Libro, no se destina a ese fin, sino a compensar el precio del papel editorial, respondiendo a la asunción que se hace en el presupuesto de una vieja exención o tasa fiscal.

También hay un problema que creo que es

de confusión entre los artículos 27 y 29, porque cuando se hacen algunas críticas o se plantean enmiendas a la existencia de 625 millones que respondan al traspaso de funciones al Ministerio de Cultura de las antiguas competencias de la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, se cree que estamos en el campo de las transferencias corrientes y se olvida que estamos en el campo de las dotaciones de servicios nuevos, que el artículo 29 de la Ley General Presupuestaria permite la determinación sin necesidad de especificar, como consecuencia de la necesidad de un tipo inmediato, siempre que no exceda de dos años la consignación.

Hay, después, un tipo de enmiendas planteadas por vía de sugerencia de acción concreta que, en mi opinión, están atendidas dentro de la política del Ministerio, y yo agradezco la sensibilidad que significa el plantearnoslas, como se debe dar tratamiento preferencial a la creación de un teatro de ópera, de un ballet nacional, de unos centros dramáticos, de un teatro de marionetas, de un cine infantil o una filmoteca, que responden precisamente a las previsiones ya realizadas por el Ministerio en este ámbito y que no son objeto de una réplica, sino más bien de una satisfactoria conformidad.

Aparte de ello, hay planteado, creo, un tipo de enmiendas a dos de las Direcciones Generales nuevas, que son las de Desarrollo Comunitario y la de Juventud. La de Desarrollo Publicitario presupone que digamos unas palabras sobre el otro planteamiento que el Ministerio tiene que adoptar en el campo de una materia no muy precisa cuya participación responde en el momento presente al reconocimiento de desajustes sociales, a una población urbana creciente, a un abandono de los núcleos rurales, a un ritmo quizá galopante de entornos industriales, a una política de suburbios o creación de zonas suburbanas y que, en el fondo, no tiene más enfoque en el momento presente, por lo menos desde el punto de vista del tratamiento cultural, que el de reforzar un concepto nuevo y necesario también en el planteamiento cultural. Es nuevo y tiene la imprecisión de todos los conceptos culturales, e incluso terminológicamente tiene una presunción de posibles escepticismos en nuestra patria, en donde no

hay más remedio que aplicar el mismo concepto utilizado en el extranjero: me refiero al concepto de la «animación» social o de la «animación» cultural. La idea de la animación social responde, sobre todo después de la última declaración de la UNESCO, a que hay que forzar, en las personas, la doble vertiente del afán de ser profesionales y el afán de construir profesiones culturales nuevas, o la utilización de comportamientos individuales de visión, lo que se llama el «asistente benévolo» en el extranjero; hay que forzar al intento del desarrollo global de las comunidades locales.

Iniciado con fe en las personas, a base de lo que puede llamarse concepto de pedagogía activa de acción, tiene unas consecuencias que podríamos ya apuntar, y que son las siguientes: establecimiento de unas relaciones sociales que logre un autodesarrollo en entornos determinados; aparición de grupos capaces de iniciativas y susceptibles de interesarse por problemas generales de un entorno también concreto; promoción de una acción educativa con «consensus» común; descubrimiento y fomento de líderes naturales; resolución conjunta de problemas comunitarios y creación —y es la nota última que en general dogmáticamente se le adjudica— de actitudes solidarias respecto a necesidades sentidas y participadas como afines, con capacidad incluso de creación de instituciones compensatorias de forma que puedan afrontar soluciones de primer grado o iniciales.

El problema del desarrollo comunitario y, por lo tanto, la creación de las figuras de la animación cultural, a nosotros nos preocupa; no es nada fácil, pues presupone adoptar desde el punto de vista práctico de política ministerial las siguientes orientaciones:

Primera, realizar un fenómeno de convocatoria para conocer en el entorno de lo comunitario —que como comprenden los señores Diputados abarca todo el mundo de la familia, todo el mundo de la mujer, todo el mundo de la tercera edad, todo el mundo de la infancia— la necesidad de un análisis previo de la realidad existente en los tres campos: en el campo de la Dirección General de Desarrollo Comunitario, en el campo de la Dirección General de la Juventud, en el campo de la Dirección General del Deporte. Hemos conside-

rado absolutamente necesarias unas asambleas iniciales para conocer esa realidad. Ya hemos celebrado la primera asamblea de la familia, se ha celebrado también la asamblea primera de la juventud y mañana se celebra la asamblea general del deporte.

Segunda, conocida esta realidad, es necesario un fenómeno de encuadramiento dentro de las obligaciones del Estado, de la necesidad de una colaboración técnica que, primero, ponga en pie un equipamiento material inmenso en este campo y cuya utilización, como yo decía, es muy escasa. Luego hay que iniciar una formación de personal, escuelas de animadores, etc., con realismo, no es necesario un conocimiento óptimo, y ésta es otra de las constantes del nuevo enfoque de la cultura. Las profesiones culturales no son profesiones con titulación inexorable ni profesiones en el viejo sentido de la expresión, esto es, no son profesiones, sino mediadoras y, por lo tanto, unos conocimientos excesivos no facilitan precisamente el desarrollo de la actividad deseada. Creación de unos centros sociales como instrumento típico para el planteamiento de la política comunitaria adscritos normalmente a una de nuestras instituciones: Instituto del Bienestar, que empezará en núcleos de 40.000 en el entorno urbano y de 20.000 en los rurales, que estarán dirigidos por una asamblea general que tendrá una comisión gestora, un consejo ejecutivo y tres ámbitos de acción típicamente diferenciados: el cívico: utilización de locales para las asociaciones de todo tipo; las áreas culturales: cinefóruns, bibliotecas, etc.; las áreas de servicios, con asesoramientos a nivel local de los intereses concretos.

Como ejemplo de lo que puede llamarse el material patrimonial que tenemos para la realización de esto, herencia de varios orígenes, me gustaría leer unos números en este instante. Centros de enseñanza hay 368; centros culturales adscritos a la Dirección Comunitaria, 394; centros de juventud, sociales, guarderías, 379; centros deportivos, 54, y de Delegaciones, 299. El número de personal dedicado a esta función pasa casi de las seis mil personas y el número de beneficiarios en el momento presente está alrededor del medio millón.

Problema complementario a éste, en la

misma línea de la necesidad de sentar unas bases de tratamiento, es el de la juventud. En la Dirección General de la juventud se ha seguido una política parecida. La cantidad de instituciones existentes necesitaba un acuerdo de todos los grupos interesados para lo que puede llamarse su racional explotación, es decir, su conjunta explotación. En esta línea ya se han tomado acuerdos en la primera asamblea.

Se ha establecido también, consecuentemente, la necesidad de favorecer el asociacionismo juvenil en la doble vertiente de asociacionismo político y de tiempo libre. Se ha establecido igualmente como conveniente la estructura de un Consejo de la Juventud análogo al Consejo Europeo, que permitiese su empalme con las naciones occidentales, y se han sentado unas bases de orientación del tema juvenil que en un minuto me gustaría exponerlas, porque son importantes.

La primera es la autorrealización como base esencial del fenómeno juvenil. Segunda, el reconocimiento de esquemas de autoridad en el mundo juvenil que no responden a los clásicos; normalmente confieren la autoridad a las élites juveniles y no a las autoridades formales. Planteamiento necesario de un tratamiento de desarrollo comunitario en todas sus actividades, de tal modo que la comunidad ahí prima actuando como referencia total, lo que hace que, por ejemplo, la analogía del comportamiento sea un hecho; y, finalmente, la dificultad de precisar los marcos colectivos de referencia que actúan de encuadre dentro de las estructuras generales y convencimiento —y en eso se coincide con todos los estudios contemporáneos— de que si no hay una inserción del fenómeno juvenil en la realidad del todo comunitario nacional, prácticamente la capacidad de cambio y de aceleración de absorción de acontecimientos del mundo juvenil producirá trastocamientos hasta ahora imprevisibles.

No quiero terminar sin matizar el contenido de otro tipo de enmiendas que hablan del concepto de superávit cuando se refieren a los presupuestos de organismos autónomos.

Las dos enmiendas que hacen referencia a la Dirección de la Juventud y a la de Deportes responden a una necesidad desgraciadamente derivada de la naturaleza de los he-

chos y de cómo se han llevado a cabo las cosas. En la Dirección de Juventudes faltaban por financiarse todos los salarios del personal laboral, 1.725 personas, y, por tanto, Hacienda dejó colgando esa cifra y de ahí la existencia de un superávit teórico. En el Deporte pasó lo mismo, faltaba por transferir todo el personal de la antigua Dirección de Deportes y por esa misma razón figura el exceso.

Comprendo que muy tosca y torpemente he expuesto lo que llamo las bases sustanciales de la política del Ministerio en relación con el planteamiento de las enmiendas. Perdonen ustedes que lo haya hecho tan apresurado, pero estoy un poco contra reloj y el Presidente tiene derecho a solicitar que me calle. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Como saben los señores Diputados, daremos unos minutos para que los portavoces de los Grupos puedan entregar una nota a la Mesa sobre las cuestiones que quieran tratar, o presentando por escrito las preguntas. Disponen, pues, SS. SS. de unos minutos para este fin.

Después de una breve interrupción, dijo

El señor PRESIDENTE: Terminada esta pausa, se han recibido una serie de preguntas formuladas por el Grupo Socialistas del Congreso, el Grupo Socialistas de Cataluña, el Grupo Comunista y el Grupo de la Minoría Catalana.

¿Quiénes van a intervenir por el Grupo Socialista? (Pausa.) Serán el señor Barón y el señor Pons. Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: En nombre del Grupo Socialista del Congreso, para tratar de contestar en cierto modo a la intervención del señor Ministro.

Yo creo que realmente en el día de hoy el señor Ministro se ha equivocado de Comisión, dicho sea con todos los respetos; porque estamos en la Comisión de Presupuestos y no en la de Cultura. Y desgraciadamente estamos muy limitados en nuestras observaciones y en nuestros planteamientos por ese carácter duro, frío y cerrado que tienen los Presupuestos.

Precisamente por eso, creemos que hubiera sido muy conveniente que hubiera existido un debate previo que permitiera fijar las líneas generales de la política cultural del país. Y, en este sentido, dos observaciones.

En primer lugar, nosotros nos alegramos realmente de que el señor Ministro haya leído y seguido las pautas, en líneas generales, del señor Malraux. El señor Malraux fue un amigo de los demócratas españoles durante muchos años, y eso nos parece muy bien. Sin embargo, creemos que la situación es hoy muy diferente. No se ha producido todavía este debate necesario, y realmente nos parece una contradicción muy profunda el plantear un programa de inversiones plurianuales cuando todavía no ha sido discutida por el Congreso, y es más, cuando todavía no ha sido acabada la Constitución.

Para nosotros, el desarrollo de la política cultural es uno de los aspectos, como el de la agricultura —ya lo hemos dicho esta mañana—, de las autonomías, los gobiernos autonómicos y las asambleas autonómicas, cualquiera que sea su nombre y su poder, en su territorio. Creemos que son ellos quienes tienen que desarrollarla y no debe tratarse de una política hecha una vez más desde el centro.

Un breve comentario también sobre los criterios generales. Está bien hacer una referencia a la Declaración de Derechos del Hombre de 1948, pero hay una observación también a hacer y es que nos encontramos en España hoy todavía con una realidad muy diferente. Aquí, más que una política de paternalismo cultural, había una política de cultura de Estado, es decir, una política que implicaba la eliminación clara de todo tipo de particularismo o pluralismo cultural en el sentido de reconocimiento del pueblo y, además, tenía otro complemento lleno de inconvenientes, la existencia de un maniqueísmo que impedía incluso el conocimiento real de todo el desarrollo cultural de nuestro país; por lo menos lo ha impedido durante cuarenta años.

Creemos que hay que partir de ahí realmente y en este sentido hay un criterio claro. Nosotros consideramos que no se debe hacer cultura de Estado. En este sentido, nos gustaría conocer el criterio del señor Ministro sobre la cuestión.

Entrando con más detalle en el contenido de la enmienda que nos ha quedado a los socialistas en esta sección (porque la enmienda a la totalidad fue rechazada por la Comisión en su momento), yo quería adentrarme un poco más en el detalle del examen del presupuesto del Ministerio de Cultura a pesar de que desgraciadamente los Diputados no conocemos la Memoria que envió al Ministerio de Hacienda y esto ha dificultado el examen detallado de la cuestión.

Además le diría también al señor ministro que la intervención del otro día del Subsecretario de su Departamento tampoco nos arrojó mucha más luz en este caso. Aquí no se trata tan sólo de que no hayamos estudiado a fondo el presupuesto o la Sección correspondiente por parte de los Diputados, es que no hemos tenido la información suficiente. Ahí sí que nosotros tenemos claramente dos líneas básicas de opción que van en el sentido de equipamiento. Una, empalmado me parece que es el Servicio 03, el que se refiere concretamente a la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Nosotros consideramos que en el momento actual la base de partida debe implicar la elaboración real de un catálogo que permita conocer cuál es nuestro patrimonio artístico especialmente de bienes muebles que son los más susceptibles de desaparición o de ocultación. En este terreno estimamos que son precisas acciones rápidas, no en cuanto a la catalogación, sino en cuanto a la restauración, para impedir dos cosas; una, la destrucción de bienes o monumentos, que van a desaparecer, y, otra, la privatización de parte del Patrimonio Artístico.

Para no alargar más mi intervención, yo me remitiría a algo que se ha expuesto ante la opinión pública y que es suficientemente clarificador, como son los artículos de Santiago Amón en «El País», tratando del tema del Patrimonio Nacional.

En el segundo capítulo hay una opción clara a favor del equipamiento, también por nuestra parte, que viene dada precisamente porque en una situación de transición entendemos que la política cultural debe responder también a esta situación política del país. No hay una política cultural debatida, no existen unos organismos autonómicos; creemos que

hay que dedicar más dinero a Bibliotecas. Quizá sea una de las cosas en que más hemos incidido los socialistas, en primer lugar, porque el Presupuesto de este año sigue siendo el del año pasado con una aplicación del aumento del coste de la vida. Aquí partimos de una situación realmente desastrosa frente a la cual tanto durante la República como en la guerra civil se hicieron cosas positivas. Según datos de 1976 hay en España 0,17 libros por habitante, cuando las normas para Bibliotecas públicas que da la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios en el año 1973 consideraban que la cifra media que debía existir era de 2,5 libros actuales por habitante como mínimo deseable para un servicio de Bibliotecas eficiente.

Es de señalar que dentro de estos 0,17 libros se incluyen libros anticuados, los que tienen valor histórico o libros duplicados. Además, entre Auxiliares y Facultativos Bibliotecarios hay en todo el país 339 funcionarios. Nos parece que en estos momentos una política de fomento de la Biblioteca, entendida no sólo como compra de libros, que ayudaría a los editores, sino también como una labor de equipamiento que implica funcionarios cualificados, y en este sentido se podría incluso reconvertir a parte de la antigua Sección Femenina en este terreno, en vez de incluirla en el Servicio 09. En el capítulo 2, que es el de compra de material, entendemos que sería posible y positivo y además que se podría ir a la creación de lo que puede ser una Biblioteca, un centro de animación cultural con secciones infantiles, con secciones que pueden incluso tener relación con las asociaciones de vecinos o determinadas organizaciones populares.

En este sentido, nosotros seguidos marcando una clarísima prioridad a favor de este tipo de política en estos momentos, en espera de que haya una política más elaborada, de no hipotecarnos en una política plurianual de subvenciones (que ha sido una política no discutida por el Congreso y que, además, tiene un resultado muy dudoso), lo que entendemos va a producir un beneficio objetivo al país que se va a traducir en un aumento cultural generalizado.

Esta es, yo diría, la línea básica de nuestra enmienda y quedan algunos aspectos por

detallar o concretar, sobre los que también nos agradaría conocer los criterios del señor Ministro. Por ejemplo, existen dos Direcciones Generales en el Ministerio que nosotros no hemos llegado a comprender cuál es su papel en estos momentos. Se trata del Servicio 04, «Difusión de la cultura», y del 09, «Desarrollo comunitario». Concretamente, en el Servicio 04, de «Difusión de la cultura», siguen existiendo cosas tan pintorescas como es el capítulo 6.º, concepto o artículo 6.º, 1, «Inversiones». Se habla a continuación de la Red Nacional de Teleclubs. El señor Ministro conocerá, yo creo, o se acordará de lo que era esta Red Nacional de Teleclubs. Esto es algo que desde luego no responde a un concepto moderno de la cultura. Puede tratarse de un concepto de intoxicación o de dirigismo de Estado, pero entendemos que esto no es hacer cultura. Hay 27 millones de pesetas y nosotros consideramos que los Ayuntamientos podrán hacer frente a eso porque sólo se trata de la compra de un televisor y de encalar una habitación en el pueblo.

Paradójicamente en el Servicio 06 nos encontramos con que hay partidas, como la de creación del Ballet Nacional, que sólo se elevan a 1.800.000 pesetas. Cuando, según hemos sabido los Diputados de la Comisión de Presupuestos, para hacer el estudio previo del Metro de Bilbao exige 300 millones de pesetas, mal se puede montar un Ballet Nacional con 1.800.000 pesetas.

Sin embargo, más adelante nos encontramos con que en el Servicio 07, capítulo 4.º, número 451, se habla de una subvención a Compañías experimentales, manifestaciones espontáneas (que aparece con «x») y suponemos no se trata de un concepto cultural nuevo), Asociaciones y Organizaciones para la investigación, conservación, realización e impulso del arte teatral, y se consignan 75 millones de pesetas.

Nos parece bien, pero nosotros señalamos claramente que existe una contradicción entre lo que se da para cosas que son claras y lo que se da para cosas desconocidas o poco especificadas. Esto ocurre también, por ejemplo, en la partida 45 de los Gastos del Ministerio en general que, concretamente, en el artículo 27, concepto 291, se habla de que para gastos de bienes y servicios que se oca-

sionen por el traspaso al Ministerio de Cultura de las funciones asignadas a la extinguida Secretaría de la Familia, Juventud y Deporte, hay 625 millones de pesetas previstas. Esto realmente yo creo que reconocerá el señor Ministro que no está suficientemente especificado. Nos es imposible comprender —no sé si la Memoria ayudaría a ello— cómo se da tan elevada cantidad a algo tan impreciso. Esto ocurre también en el Servicio 09, que nosotros tampoco hemos llegado a comprender cuál es su papel (nos tememos que sea tratar de reconvertir o reinsertar a la antigua Sección Femenina). Y se nos habla en esta Dirección General de Desarrollo Comunitario de compra de bienes corrientes y de servicios y se nos dice que se van a dar 325 millones de pesetas para esto. Concretamente se dice: «Para gastos derivados del Instituto Nacional de Bienestar y actividades que le sean propias, 95 millones de pesetas».

Para gastos derivados de la integración profesional y social de la mujer 25 millones, sin ninguna especificación. Nosotros, concretamente y vuelvo al tema de las Bibliotecas, entendemos que se podrían hacer guarderías, comprar libros, pero dentro de esta política de asamblea que parece que ha defendido el señor Ministro no alcanzamos a comprender cómo se está gestando esto. Puedo decir al señor Ministro que por parte del Partido Socialista existe una visión muy crítica relativa al desarrollo asambleario que se ha llevado en temas como el de la asamblea de la familia; y no sé si se habrá hecho todavía o está en proyecto la posible asamblea de la mujer.

Hay un problema, señor Ministro, muy concreto, pero no entendemos que la política se debe de hacer en asambleas multitudinarias. Entendemos que tiene que hacerse a través de las Comisiones correspondientes del Congreso.

Por último, hay una cuestión que nos preocupa y que tampoco se nos ha explicado en el Presupuesto; es el tema de las transferencias corrientes del capítulo cuarto que se plantea a partir de la AISS hacia el Ministerio de Cultura, no sabemos si falta la hoja en el Presupuesto, no hemos sido capaces de encontrarlo, pero hay 480 millones de pesetas que nos suponemos que se debe de tratar

quizá de edificios, pero ahora no sería quizá la inclusión correcta transferencias corrientes. De todos modos hay un problema que afecta al Ministerio de Cultura y que no está detallado en el Presupuesto y es el de todo un inmenso capital de edificaciones cuyo destino no ha sido discutido en el Congreso y que está llevando a cosas absolutamente paradójicas. Tenemos noticias de que en estos momentos de los antiguos albergues juveniles hay nueve locales que han sido utilizados para comisarías de policía y creo que no corresponde al papel que debe jugar el Instituto de la Juventud y las instituciones anexas.

En este sentido seguimos manteniéndonos en los mismos criterios. No hay claridad en el presupuesto de Cultura, no podemos llegar a analizarlo con detalle, y en la medida que lo conocemos no estamos de acuerdo, y en este momento hasta que haya una Constitución, hasta que haya entes autonómicos, y hasta que alcancemos una situación estable en estos temas claves que son el patrimonio artístico y el equipamiento cultural lo mejor que se puede hacer es dedicar el dinero a restaurar monumentos y a hacer Bibliotecas y que eso sería muy interesante para el Ministerio hasta que consigamos montar la estructura constitucional y las asambleas regionales y hacer otro tipo de política más lógica.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pons.

El señor PONS IRAZAZABAL: Mi intervención va a ser muy breve para explicar de viva voz la pregunta formulada por escrito.

No sé si el señor Ministro comparte un poco el criterio nuestro de que tal vez no es la situación óptima la de que un organismo como Radiotelevisión Española, que tiene a su cargo un aspecto importante como es la información, dependa de un Ministerio concreto. Tal vez esa situación es incómoda también para el señor Ministro y para el Ministerio. Máxime si ese organismo tiene un presupuesto para 1978 de 19.000 millones de pesetas, prácticamente igual al del propio Ministerio.

Ese ha sido un tema muy poco tratado en la explicación del señor Ministro, tal vez por

esto y porque además no disponemos de memoria, que creemos que preceptivamente la de este Ministerio y la de todos los demás debería ser acompañada a la documentación presupuestaria, nos quedamos con ganas de saber algunos aspectos, pero vamos a concretarlo a uno solo.

Y es que en virtud de contar sólo con el Presupuesto-resumen de Radiotelevisión Española no sabemos, en el capítulo tercero de gasto, el artículo 38 que viene bajo la rúbrica escueta de otros gastos, y que asciende a 5.325 millones, cuál es el desglose de esa partida.

Por otra parte, y éste sería un segundo aspecto de la pregunta, queríamos preguntar si el señor Ministro ha iniciado alguna acción encaminada a examinar el funcionamiento económico, financiero y contable de Radiotelevisión Española.

En caso afirmativo nos gustaría conocer el estado en que se encuentra esa investigación y, en su caso, el resultado al que se haya podido llegar.

En caso negativo también nos gustaría saber cómo siendo un tema que está en la calle, un tema que es un secreto a voces, sobre el que se debería haber iniciado o debería tenerse avanzada una investigación, se repite el Presupuesto del año pasado y ahora se incrementa en casi 5.000 millones de pesetas, en 4.988 millones, cifra que no es imaginaria porque en cifras absolutas existe en el Presupuesto del año pasado, que era de dieciséis mil y pico millones de pesetas, y en este año 2.842 millones de pesetas de diferencia.

Por lo que además en el Presupuesto de 1977 sabemos que había una partida de 2.056 millones de pesetas destinada a pagar deudas de ejercicios anteriores, y en este año, que nosotros sepamos, no existe, y suponemos que no se nos sorprenderá a mitad del ejercicio con la petición de un crédito extraordinario o de suplemento de crédito. Este es, en resumen, el planteamiento de nuestras cuestiones.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Comunista interviene el señor Bono.

El señor BONO MARTINEZ: Señor Ministro, señor Presidente y señores Diputados, el

Grupo Parlamentario Comunista ha presentado 35 enmiendas. Este número no se ha alcanzado por hacer política de número de enmiendas, sino más bien porque hemos visto que había problemas graves, como los que ha anunciado el señor Ministro.

El señor Ministro ha expuesto bien los principios básicos de la política del Ministerio respecto a lo que va a hacer el Ministerio, pero no lo ha detallado a nivel de plan concreto con subvenciones y aspectos concretos del propio Presupuesto.

Eso, evidentemente, da una cierta debilidad a su propia política y en ese sentido nosotros, los comunistas, nos hemos visto empujados, ante la situación de las formulaciones vagas e imprecisas de «Transferencias Corrientes», «Subvenciones», etc., a propugnar algo concreto, que sí que creemos que es importante, como es el problema de los déficit de equipamientos culturales básicos. Por eso los comunistas hemos presentado tantas enmiendas, nos hemos preocupado de intentar reelaborar todo eso en la medida en que hemos podido y hemos conocido.

En esa dirección yo diría que cuando se habla de transferencias hay falta de precisión, y si observamos, por ejemplo, cualquiera de las que nosotros hemos mencionado, la del capítulo IV, artículo 45, que habla de la supresión de 400 millones de pesetas, porque van a subvencionar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en materia y actividades relacionadas cuya regulación y vigilancia competen a este Departamento, esto es una formulación muy vaga, como también las hay a lo largo de todo el propio presupuesto del Ministerio de Cultura. En este sentido le pido al señor Ministro una aclaración de estas transferencias.

En relación a las subvenciones, es claro que si se anuncia una política cultural determinada y no se plasma en un plan concreto, las subvenciones también están dentro de esa nebulosa vaga e imprecisa que puede propiciar a una utilización arbitraria de dichos recursos.

Nosotros, por ejemplo, los comunistas, pensamos que habría que hacer un mapa de las culturas de todo el Estado español y, en función de esas culturas y de esa política, precisar qué tipo de subvenciones se da a cada

una de esas actividades. Eso dentro siempre de la posibilidad de que el Ministerio pueda utilizar los mecanismos, como ha mencionado el Ministro, del convenio cultural, que me parece que es un buen mecanismo en orden a atribuir estas subvenciones, pero siempre que esté claramente delimitado el lugar, cómo y por qué van las mismas.

Y eso, evidentemente, dentro de un plan preciso.

También quería añadir que en el desarrollo de las unidades locales y culturales, de las que ha hablado el señor Ministro y ha hecho una prolija exposición, yo diría que, precisamente, uno de los problemas básicos para el desarrollo de esas unidades locales es ese déficit de equipamientos culturales básicos que antes he mencionado.

Quiere esto decir que nuestra idea en este sentido era sugerir toda una serie de proposiciones que pudieran mejorar y desarrollar la propia política del Ministerio.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialistas de Cataluña tiene la palabra el señor Lluçh.

El señor I.LUCH MARTIN: Voy a ser muy breve, puesto que nuestra enmienda a esta Sección ha sido aceptada por la Ponencia.

En primer lugar, quiero subrayar el hecho positivo de que el señor Ministro haya citado a Malraux, no solamente porque apoyó a la España democrática, sino porque, además, defendió las culturas oprimidas de España durante muchos años; unas culturas oprimidas que pasaron durante muchos años por una etapa de persecución tanto en el plano lingüístico como en el cultural. Y Malraux no solamente firmó papeles, no solamente hizo gestiones, sino que, incluso, hizo gestos humanos como el de dotar de una pensión a la viuda del hombre más representativo de la cultura catalana que fue Luis Companys. Por lo tanto, nos alegramos de que haya sido citado.

Por otro lado, nos parece que la política del Ministerio de Cultura —a lo mejor es porque falta ese volumen— en cuanto a las distintas lenguas y culturas es muy vaga; incluso yo diría que en la terminología utilizada por el propio Ministro se nota esta vaguedad.

Por ejemplo, la utilización aún de la expresión «lenguas vernáculas», que significa lengua de los abuelos, lengua de la tribu, etcétera, dado que también el castellano tiene abuelos —por ejemplo, mi madre es castellano-parlante— me parece una terminología ambigua, como cuando dice «lenguas tradicionales», porque supongo, y evidentemente lo sé, que el castellano tiene también unas tradiciones muy importantes, que nosotros respetamos en gran manera, como las tiene —y el sobrino de un famoso poeta gallego no lo ignora— el gallego y las tiene el castellano y las tiene el catalán.

Por otra parte, el señor Ministro ha citado un caso que me ha alarmado muchísimo y es el caso de la Carta de Alsacia, que es típicamente un tipo de Carta muy preocupante para las lenguas y contenidos culturales puesto que ha sido contestada con suma dureza por quienes defienden en Alsacia posturas parecidas a las que socialistas de Cataluña defendemos.

Esto conecta, por otro lado, con los créditos que abarcan más de un período. Puesto que estamos en una etapa constituyente y no sabemos exactamente cómo se va a cerrar el tema de las autonomías, nos parece que esto debería entrar en suspenso, aunque, por otra parte, la medida de hablar de períodos plurianuales nos parece buena, pero un poco delicada en estos momentos.

También diría que cuando se ha hablado de convenios, se ha hablado de instituciones, de autoridades locales, provinciales, etc., me ha parecido advertir que se olvidaba de las autoridades autonómicas.

Por todas estas razones pediría al señor Ministro que aclarase cuál es la política cultural del Ministerio sobre lenguas y contenidos, podríamos decir, hasta ahora no reconocidos o hasta ahora perseguidos, y cómo se ha traducido esta política cultural en los Presupuestos, puesto que del análisis de los Presupuestos yo diría que es prácticamente imposible deducirla.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de la Minoría Catalana tiene la palabra el señor Trias.

Rogaría a los señores Diputados y a las demás personas que se encuentran en el sa-

lón que guarden atención y silencio durante las intervenciones en general.

El señor TRIAS FARGAS: Agradezco mucho al señor Presidente esa advertencia precisamente ahora que voy a hablar yo. (Risas.)

Quiero recordar simplemente que esta Carta de Alsacia que se ha mencionado por parte del Ejecutivo y también por parte de la oposición debe ser muy interesante. Confieso mi ignorancia, no la conozco. Me gustaría que el señor Ministro diera una breve opinión de lo que significa para el Gobierno esta posibilidad.

En segundo lugar, quisiera decir que no hemos presentado ninguna enmienda a la Sección que representa el Ministerio de Cultura, porque creemos que la televisión es demasiado importante para discutirla aquí a base de unas pesetas más o menos y hay que traer al Parlamento una ley que estructure esta función, este servicio, de una manera definitiva y drástica, apartándola de toda la influencia política y sobre todo de toda preponderancia del Poder ejecutivo.

De todas formas no puedo desechar la oportunidad que se me da de manifestar que mientras llega esta ley, mientras esto toma un cariz nuevo, fundamentalmente nuevo, nosotros estamos muy inquietos y quisiéramos saber cuál va a ser la actitud del Ministerio de Cultura en relación con la Radiotelevisión Española.

Desde las elecciones, los partidos estrictamente catalanes, en el sentido de que no disponemos de conexiones fuera de Cataluña, consideramos que hemos sido perjudicados en tiempo disponible y en calidad de tiempo disponible. Nosotros tenemos, todos lo sabemos, el recuerdo, el pésimo recuerdo, de lo que ha sido la Televisión Española en la época del General Franco y me parece que todos estamos de acuerdo en desear que esto no se repita. Pero también es cierto que en estos momentos estamos inquietos porque no vemos por dónde navega Radiotelevisión Española, sobre todo a nivel regional. Los programas que se realizan en Cataluña, que son los que mejor conozco, en primer lugar, son escasos y, en segundo lugar, malos; y también me preocupa porque no son, a mi juicio, objetivos. Es decir, y para citar un caso con-

creto, cuando se habla del señor Trías Fargas en la Televisión Española, se dice «del grupo bancario tal y tal», «preponderante banquero tal y cual». No oigo que esto se diga cuando se hace referencia a ningún socialista, y a fe mía que también hay gente rica entre los socialistas. De manera que yo agradecería que en este sentido o no se informara de eso o si se debe informar, que me parece útil porque las características sociopolíticas, como se dice hoy día, o socioeconómicas de los candidatos son importantes, que sea para todos igual.

En consecuencia, yo me pregunto si mientras llega la nueva ley el Ministerio de Cultura piensa mantener una política aséptica o por el contrario la televisión, por lo menos en Cataluña, va a seguir siendo el puerto de Arrebatacapas que es en este momento.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Cultura para responder a las preguntas que le han formulado, al cual le rogaría tratara de hacerlo en media hora como máximo.

El señor MINISTRO DE CULTURA (Caballeras Gallas): Dentro de lo que me sea posible, voy a procurar contestar a todos los interrogantes presentados por los distintos Diputados de los diferentes partidos, que apriorísticamente agradezco.

En primer lugar, al señor Barón; siguiendo su exposición, simplemente quiero ir glosando algunos de sus comentarios. Pienso que cuando se explica la estructura de un Ministerio de Cultura no hay más remedio que hacer referencia a cómo se plantea uno el tema de lo cultural. Si me he excedido dando preeminencia a la justificación, que para mí es importante porque significa la orientación sobre la drástica implacabilidad de los números, pido perdón, pero lo que no sé ni podré hacer nunca es intentar justificar las cosas sin intentar explicarlas.

En segundo lugar, que yo haya citado a Malraux no significa que haya seguido a Malraux. Esto es un problema importante, porque he citado a Malraux sólo como el primero de los Ministros franceses que se planteó, en un análisis nuevo, bajo una estructura de poder muy personalista y teniendo la ple-

na titularidad del poder cultural que le otorgaba el General De Gaulle, lo que puede llamarse el primer avance de un modo de hacer fuerte, osado, contundente, por evitar la expresión de otra índole. Malraux no hizo más que orientar de nuevo, con el dramatismo y la eficacia que le permitían las circunstancias de aquel entonces.

Después de Malraux, vinieron tres o cuatro Ministros franceses importantes, habiendo hecho el último de ellos un resumen, concretamente hace un año, en una exposición a la que fue forzado frente a la Cámara, de lo que puede llamarse la abolición de la empresa cultural. En ese sentido estoy más cerca de la documentación, de las orientaciones culturales hoy, vía la UNESCO, que de los primeros atisbos de la iniciación de la cultura de Malraux.

O me he expresado mal o no comprendo la preocupación por el tema de la plurianualidad, salvo que el propósito sea que no se hagan cosas. A mí eso sí que me preocupa, el que no se hagan cosas, porque es la manera de dejar paradas éstas, y yo creo que la materia cultural ya estuvo suficientemente parada. Cuando yo explicaba que los convenios tenían como ventaja en sí el poder comprender dos anualidades creía que iba a merecer los plácemes de los Diputados socialistas, por la sencilla razón de que al ser concretas determinaciones de los objetivos fijos que durante un plazo amplio tenían que tener las subvenciones se estaba llegando a una de sus fórmulas propuestas, que es saber concretamente a qué fin se destinaba el dinero.

Por otro lado, yo agradezco sinceramente al señor Lluçh —y lo digo ahora de pasada— la clarificación de que no vea en principio que el procedimiento es malo, porque realmente el procedimiento a mí me parece bueno, significa no hacer cosas anualmente y no someterse implacablemente a un concepto presupuestario.

En materia de la declaración 48, cuando ya la menciono lo hago para poner de relieve el contraste que hay entre que desde el año 1948 sólo se haya dado un paso en materia de cultura, el paso en que están todavía muchos partidos políticos, el de que la cultura es un fenómeno de participar, y en cambio hoy esto se ha superado, porque implacable-

mente se ha impuesto al Estado la obligación de proporcionar los medios culturales y el acceso a la cultura. Por eso cuando hacía referencia a lo nuevo yo superaba la imputación de hacer cultura de Estado, la que apriorísticamente rechazé.

En cuanto a los temas concretos planteados en materia de Archivos y Museos, me parece muy bien que el señor Barón coincida en la necesidad del catálogo, porque el catálogo no es más que una de las distintas parcelas del tratamiento general de los inventarios de los bienes culturales que yo expuse.

¿Cuál es el problema del catálogo en los Museos? No es más que uno, los bienes muebles se valen de ser catálogos por una razón, porque resultan fichados; es decir, se realiza respecto a ellos lo que los italianos llaman un negocio de fijación, y automáticamente están en el mundo de los vivos, especialmente en el mundo de las vivencias fiscales. Por eso, sin un tratamiento adecuado de los bienes muebles en razón al destino cultural que yo voy a intentar explicar brevemente, no hay manera de lograr una catalogación de los bienes muebles personales.

¿Cuál es la manera de que se cataloguen? Pues considerar (cosa que este Ministerio ha sugerido al Ministerio de Hacienda, y está acordado al respecto que propongamos una modificación de la Ley del Patrimonio), si los bienes muebles, primero, pueden ser utilizados para fines culturales, por ejemplo, si hay una obligación de exponerlos durante nueve meses en un Museo; segundo, si se adscriben a un Museo en modo permanente en su exhibición; tercero, si se destinan «postmortem» a ser bienes de naturaleza pública o, finalmente, si se pagan los impuestos sucesorios o tienen un conjunto de desgravaciones simultáneas por razón de cumplimiento de esos fines culturales.

Pero coincido totalmente con el señor Barón en la necesidad de un catálogo inmediato de esos bienes que entre dentro de lo que yo exponía como política general del inventario.

Lamento que no tenga más dinero, porque son muy pocos los seis millones y medio de que dispongo, según mis cálculos. Con eso se puede hacer poco. Pero si el señor Barón lee, como yo tengo la obligación y él la afición,

las partidas del Ministerio, verá que hay también una consignación para el inventario general de 1975, con lo que nos podemos empezar a mover en esta materia.

Tema para mí delicado es el de las Bibliotecas. El Ministerio creía que iba a ser objeto de ciertas críticas por la preferente atención que estimaba que dedicaba al mundo de las Bibliotecas. Lo había hecho, además, porque dentro de los estudios de los partidos, que el Ministerio examinó —especialmente del Partido Comunista—, había un magnífico informe de la situación de nuestro mundo bibliotecario, cuyos datos coinciden con los citados por el señor Barón, en cuanto a proporción de los números de 0,17 y 2,5 por habitante.

Este tema de las Bibliotecas, sin embargo, no está mal tratado en los Presupuestos. Primero, porque —y aquí vuelve a producirse una contradicción— se trata de uno de los pocos supuestos de inversión real de 285 millones de pesetas, y segundo, porque nuestra idea es que la transformación de la Editora Nacional, que no tiene razón de subsistir porque en el fondo respondía a otras motivaciones, puede ser uno de los mecanismos compensatorios en materia de creación de contenido mínimo de unas Bibliotecas determinadas. Si eso lo completamos con una red de movilidad del fenómeno de Bibliotecas, y un planteamiento que conoce muy bien el señor Barón, como yo, que tiene algunos antecedentes en países cercanos y están dando buenos resultados de catalogación, etc., como he comprobado, en la Fundación Gulbenkian; si lo completamos así, repito, creo que no vamos mal.

En cuanto al tema concreto del Ballet Nacional, al que se destina un millón de pesetas, estoy de acuerdo en que con eso no se puede hacer un ballet, pero el principio que se sigue, hay que decirlo en esta sesión, es el del clavo; es decir, lo que es importante es que hay una consignación destinada a esto, que en la historia de los Presupuestos es una conquista. Naturalmente sabemos que dentro de la subvención de la Dirección General de Música, a la que pertenece la Danza, se tiene que plantear el tratamiento del ballet.

En lo que se refiere a nuestra política de

teatro, ésta descansa en aceptar el principio de creación de centros dramáticos, posiblemente a través de pactos con las distintas municipalidades para que nos ofrezcan los espacios, porque el problema en el momento presente son los espacios. Tenemos una ley implacable en la que resulta que la contratación de los espacios es la que encarece, o por lo menos uno de sus grandes componentes, el tema del teatro.

Acerca de la política asamblearia, quería hacer un matiz. Soy un enemigo radical de la política asamblearia y también de la de convenciones —que es el final epigonal de la política asamblearia—, y lo soy porque en el fondo no se producen nunca buenos resultados, puesto que hay algo así como la inhibición de los mejores. La política asamblearia no fue utilizada ni en la Dirección General de Desarrollo Comunitario ni en la Dirección General de la Juventud. Lo que sí se quiso fue hacer un primer tanteo de análisis de las ideas asociativas en esos contornos y se convocó a la gente para saberlo, pero solamente para derivar de esas presencias lo que puede llamarse unas líneas de orientación. Tenga la tranquilidad el señor Barón de que si esa política a él no le gusta, a mí tampoco.

Respecto al tema de la AISS hay una inteligente advertencia, como todas, sobre el Presupuesto; pero no está en mi presupuesto, sino que está en el juego del 31 con el 32 y se me podía haber pasado. La verdad es que lo sé por casualidad, ya que en el fondo la AISS se estuvo durante bastante tiempo dudando si ponerla en el Ministerio de Trabajo o en el de Cultura. Por fin se dividió parte de su contenido entre diversos Ministerios y a nosotros se nos puso una cifra que creo que no responde al déficit, como sospechaba el señor Barón, sino que responde al dinero que falta durante todo este año o el año que viene —no lo sé exactamente— para pagar el diario «Pueblo», que era el único que no entraba dentro de la cadena de los medios de comunicación social; es decir, para pagar al personal del diario «Pueblo».

Las palabras finales del señor Barón son las que me han dejado más preocupado. No pido que el señor Barón colabore a que haya un Ministerio de Cultura, incluso comprendo

perfectamente que no colabore a que yo sea Ministro de Cultura; eso es natural y obvio. (Risas.) Pero lo que sí pido es que no termine una intervención tan profunda e inteligente diciendo y simplificando que destinaría este año, por lo incierto que está desde el punto de vista constitucional y por otros temas, solamente a restaurar monumentos y a comprar libros. Eso yo sé perfectamente que si estuviera aquí el señor Barón no lo haría.

El señor Pons me hace una pregunta que contesto encantado. Desde el mismo momento en que tomé posesión del Ministerio, me parecía que dos o tres mundo ya no correspondían al Ministerio de Cultura y uno, en especial, era el mundo de la radio y la televisión. Pero no por ninguna motivación inhibitoria, sino por un convencimiento que es que esos instrumentos en otros países están en otra situación respecto a su entorno administrativo, que yo no analizo que sean mejores o peores; pero, desde luego, no están insertos en una estructura jerarquizada de tipo estatal.

Es un tema, por tanto, en el que me tengo que remitir a la memoria, que no tengo aquí, de Televisión, y lo que sí quiero es decir que mi opinión, cuando se dice que hay 5.300 millones consignados en el Presupuesto, es porque el juego no se ha compensado con lo que puede llamarse el gran condicionamiento de la televisión.

La televisión cometió un error serio que consiste en que no encuentra una fuente financiera racional, sino que tiene que depender, en un símil que se ha utilizado por la prensa, del cuello de botella de la publicidad. En el fondo, todo el fenómeno publicitario ha condicionado la historia económica de televisión en el sentido de que ha sido la única fuente financiera real de la misma.

Yo no creo que quede ningún mecanismo en televisión en el futuro que no sea volver a la tasa, como existe en todos los países occidentales, salvo tres que voy a citar: Luxemburgo, Mónaco y España. Es decir, que, realmente, no se paga nada por la utilización del servicio de televisión. Esto fue insólito incluso cuando se produjo este acontecimiento. Pienso que sería ideal para el futuro que se empezase a gravar la televisión en color y la

utilizada públicamente. Con eso se empezaría a compensar, de forma que se pudiese estudiar seriamente el tema de televisión.

Todo esto lo digo un poco aventuradamente, porque en esta materia mi competencia hoy ya no existe, porque creo que, afortunadamente, una de las grandes consecuencias del «Pacto de la Moncloa» fue constituir el Consejo Rector de Radiotelevisión Española, al que compete —y lo recuerdo de memoria, pero casi con precisión, señor Trias—, primero, asegurar la objetividad informativa en el futuro; segundo, sentar las bases del tratamiento de lo regional, y tercero, proponer al Gobierno el estatuto jurídico de la misma. Todo eso a base de un «consensus» entre un grupo de parlamentarios y un grupo de personas de la Administración. Estimo que es un buen procedimiento y que nos dejará por lo menos orientado en el futuro este tema.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Comunista, creo que no había más que una solución y es que es ir contestando a las treinta y cinco, cosa que hago encantado. La primera es la 108, que plantea el tema de los 625 millones, al que ya hice referencia, que se confunden, quizá con lógica, porque se cree que están en la número 27, que presume transferencias corrientes y que tendría poco sentido. Se trata de nuevos servicios creados donde genéricamente se incluyen todos los gastos que producen, porque no hay posibilidad de mayor determinación, y que se someten a la regla implacable de que eso no puede subsistir dos años. Sólo viendo el número de edificios existentes a los que se tienen que destinar esos 625 millones basta para resolver el tema. Se trata, simplemente, de una situación presupuestaria transitoria. Yo tengo aquí el anexo entero de los edificios e instalaciones a los que hay que destinar, para conservación, ese dinero y se lo entrego gustosísimo al señor Pons.

La siguiente, que es la 107, es la relativa al Instituto Nacional del Libro Español, que ya contesté explicando —creo que no es necesario renovarlo— que se trataba de la asunción en Presupuestos de una antigua sección de Hacienda que se transformó, en su 95 por ciento, en dinero destinado a compen-

sar, para protección del libro español, el valor del papel editorial.

Y el tema importante —porque es en el que con mucha inteligencia el señor Pons insistió— es que de todas las transferencias corrientes sólo hay una en la que concluyentemente se dice que el Ministerio puede destinar a empresas y organismos autónomos, en un sentido amplio y genérico, es decir, que desarrollen actividades culturales, una cifra aproximada de cuatrocientos millones de pesetas.

Hice hincapié en la primera exposición —lo que pasa es que es difícil— de que ésta es la partida más ágil desde el punto de vista de la estructura del Ministerio, porque es la que me va a permitir realizar de verdad una política cultural complementaria de las Direcciones. Si yo no hubiese apuntado la conveniencia de seguir el procedimiento de los convenios se podría presumir de que había una posibilidad de ejercicio de esta partida. Pero yo, que creo —como los señores Diputados— que estaré sometido, dentro de seis meses, al procedimiento de clarificación de las cuentas y de claridad contable que resulta del «Pacto de la Moncloa», y que me parece que el Ministerio de Hacienda tiene ese plazo para dictar, no tendré ningún inconveniente en demostrar cómo esos cuatrocientos millones son los que me sirven para completar la política de las cartas culturales.

En cuanto a subvenciones, yo estimo también que lo que el señor Bono deseaba de mapa de las culturas entra dentro de nuestra obsesión del inventario; o sea, nosotros estimamos que el inventario no debe ser el patrimonial, sino el inventario en la triple vertiente de no sólo de inmuebles, sino también de muebles; segundo, de servicios, es decir, de utilización de mecanismos complementarios culturales, y, tercero, de animadores en las personas con intereses culturales. Para eso pensamos sugerir la constitución de un Consejo Provincial de Cultura en todos los entornos provinciales absolutamente, recogiendo las personalidades más notorias y sin presencia prácticamente de la Administración. Ese mapa cultural es el que después nos va a servir de base, a través de los grandes municipios, de las provincias y de las regiones, en el tratamiento de los convenios.

Con eso paso (después contestaré al señor Lluch) a contestar a la pregunta del señor Trías, relativa a la Carta Cultural de Alsacia. La Carta Cultural de Alsacia es un documento importante, primero porque es un documento referido a un supuesto muy específico, a un supuesto regional, con unas peculiaridades que todos ustedes conocen mejor que yo. Segundo, porque se refiere a una región muy decantada y que comprende —si no me falla la memoria— dos prefecturas, que son la del Alto y la del Bajo Rin. En esta Carta el tratamiento de la materia de la lengua —empiezo ahora a medir mucho mis palabras, por temor a la preocupación de los nominalismos que siente el señor Lluch— es verdaderamente obsesiva.

La Carta, señor Trías, tiene el siguiente esquema. Se inicia con una declaración de principios, que apunta la necesidad de colaborar la Administración y la región, la necesidad de preservar el patrimonio, la necesidad de animar culturalmente la vida y de mejorar los accesos a todos los monumentos, la de reforzar la realidad cultural, la de ayudar a la creación y, en general, todos los accesos a la cultura.

Su sistemática, y esto es lo que es verdaderamente importante, es increíblemente precisa. Dice que respecto al patrimonio habrá las siguientes operaciones de equipamiento. El 50 por ciento de la participación del Estado en todos los trabajos, salvo los que sean consecuencia de daños de guerra, afrontados por los propietarios de monumentos históricos clasificados y el 50 por ciento de subvención del Estado a los propietarios de inmuebles en espacios protegidos. A los establecimientos públicos regionales les obliga a su vez a la emisión de unos créditos permanentes para conservaciones y obras o monumentos en ruina clasificados o inscritos.

A los monumentos históricos, la Secretaría de Estado de la Cultura francesa les da, en Alsacia —señores, esto sí que es tener Presupuesto—, cinco millones doscientos mil francos para la restauración de monumentos clasificados; cuatro millones quinientos mil para sitios; para sectores salvaguardados —como ellos dicen— setecientos mil, para consolidación de ruinas un millón, y para inmuebles y patrimonio rural cincuenta mil.

En segundo lugar, el Ministerio colabora además en el Instituto de Artes y Tradiciones Populares de Alsacia, con una subvención de lanzamiento de treinta mil francos. En este ámbito regional se estudiará la constitución de «centros» culturales y en estos momentos los franceses cambian su enfoque sobre las casas de cultura, que les ha dado malos resultados, porque las casas de cultura eran excesivamente importantes y sólo funcionaban de verdad doce en toda Francia.

Gracias a la figura del animador aquí han conseguido unos resultados óptimos y están pensando en graduar el fenómeno de los medios culturales que utilizaban y ya están hablando también en este campo de dichos centros culturales. La colaboración y equipamiento de los «centros» culturales se traduce en la obligación del Estado de financiar toda la cadena de los mismos en un 20 por ciento y la Comuna y el Departamento en un 60.

La mejora y construcción de pequeñas salas polivalentes es el último de los grados franceses, con una obligación de un millón de francos de subvención, con el propósito o deseo de crear una agencia cultural técnica destinada especialmente a la formación y mantenimiento de la profesión de animadores y operadores pilotos en la región de Alsacia, también con un presupuesto muy extenso.

La ayuda financiera y técnica a los organismos alsacianos ya existentes, que son la Asociación Regional de Animación Musical de Alsacia, la Universidad, Casa de Expresión, Centro de Documentación y a los grandes medios de difusión cultural de la región también es importante hoy. Así, al Teatro Nacional de Estrasburgo, 6.494.000 francos; Opera del Rin, 5.013.000; Orquesta de Estrasburgo, 1.809.000. Después están la música audiovisual, fotografía, creaciones artísticas, inventario, lectura pública, etc. Aquí viene lo que me preocupa de la intervención del señor Diputado, que es que toda la Carta está condicionada al desarrollo de música en Alsacia, al testimonio de Alsacia en la Historia, con la finalidad de permitir una visión global y sintética de Alsacia, su historia, su evolución industrial, sus Museos, sus trazos en la Historia, sus casas de campo, sus

Museos folklóricos, el modo de desarrollar su vida en las minas, los medios también audiovisuales dirigidos al fomento alsaciano. Es decir, que desde el punto de vista de protección, a mi modo de ver el tratamiento del interés cultural de una región en cierto sentido me parece bastante bien orientado.

Perdón por la extensión sobre este asunto, pero no había manera de resumirlo.

En cuanto al temor del señor Lluch, hablé de que mi preocupación terminológica condicionaba mis expresiones. Cuando he dicho vernáculos no quería con eso motivar las lenguas de nadie. Fue simplemente descriptivo. He nacido y vivido compartiendo una lengua y creo que el fenómeno del mañana sobre el tema de las lenguas y su contenido y tratamiento excede de lo que puede llamarse la opinión del Ministro de Cultura. Pienso que es un tema típico de tratamiento primero a través de la preautonomía, y, segundo, un tema típico constitucional.

Creo que, a lo largo de la Historia, los dos o tres ejemplos que tenemos son malos consejeros, porque respondieron a lo que puede llamarse una política de bandazos en la utilización de la lengua e insistieron excesivamente en el tema de las exclusiones recíprocas. Desde Felipe, por un lado, hasta la pérdida de algunos acontecimientos importantes por la presencia en Galicia de unos monarcas muy conocidos, en ambos casos se excedió el tratamiento de este tema.

Pienso que en el equilibrio del sistema —no sólo en el tema de las lenguas, sino en el de las estructuras regionales, y esto ratifica lo que mi partido decía hace pocas horas— estará una de las pruebas de sabiduría, y confío en que el Congreso llegue a ella.

No creo haberme dejado demasiadas cosas sin contestar, y ruego que me disculpen por no haber sido muy sistemático. *(El señor Pons pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Señor Pons, ¿hay alguna cuestión que no haya sido respondida? Si la hay, ¿quiere decir cuál es, por favor?

El señor PONS IRAZAZABAL: Quería decir, en nombre del Grupo Socialista, que las respuestas del señor Ministro, o, mejor di-

cho, la falta de respuestas, resulta insatisfactoria absolutamente.

El señor PRESIDENTE: Señor Pons, no se trata de analizar el contenido de las respuestas, sino de si hay algún tema que no haya sido contestado. Si lo hay, ¿quiere por favor indicarlo?

El señor PONS IRAZAZABAL: Si me permite el señor Presidente, es lo que iba a hacer precisamente.

Comprendo, como le he dicho al señor Ministro, que para él tal vez sea incómoda la postura de tener bajo su dependencia un organismo de la envergadura de Radiotelevisión Española. Pero quiero adelantar, como también posible futuro miembro integrante del Consejo Rector de Radiotelevisión Española, que la responsabilidad del Presupuesto no recaerá sobre el Consejo Rector y que las explicaciones sobre ese Presupuesto quien debe darlas es el Ministro que en este momento tiene jerárquicamente, como muy explícitamente ha recordado el señor Ministro, bajo su dependencia el organismo Radiotelevisión Española.

Yo había planteado dos preguntas. La primera sobre gastos, no sobre ingresos, como ha tratado el señor Ministro. Se trata de una partida concreta de 5.325 millones de «otros gastos». No me refiero a los problemas de financiación de la televisión ni a los ingresos.

Mi segunda pregunta se refiere a las cuentas, digámoslo en términos genéricos y amplios, de la Radiotelevisión Española y sobre si existe alguna investigación en curso; si existe, ¿cuál es el resultado? Si no existe, ¿cómo habiendo un clima y una opinión muy extendidas no sólo a nivel superficial, sino más profundo, se repite el Presupuesto con un incremento sustancial?

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro tema ha quedado sin responder?

El señor BARON CRESPO: En la habilísima e inteligente contestación del señor Ministro hay dos lapsus que quisiera ver completados y corregidos ahora. Me refiero a cuáles son las razones y el destino del Servi-

cio 04 y del Servicio 09, relativos, respectivamente, a «Dirección de Difusión de la Cultura» y «Dirección General de Desarrollo Comunitario».

Le quería decir, además, al señor Ministro que estaríamos dispuestos, después de estas explicaciones que ha hecho de la Carta de Alsacia, a considerar la presentación de una enmienda «in voce» para aumentar los gastos de viaje del Ministro, para que nos cuente otras experiencias europeas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trias.

El señor TRIAS FARGAS: Quisiera decir que realmente mi pregunta, la relativa a la televisión, no ha sido contestada. Creo que mientras no se apruebe el estatuto que se pactó en la Moncloa y se cree una Comisión de delimitación de responsabilidades, sigue siendo el Ministerio el encargado de estos temas.

Por lo tanto, creo que el señor Ministro, al eludir la respuesta sobre este tema, me parece que lo que ha hecho es salvarse por el gong, por la campana, que ha tocado veinticuatro horas antes de que me contestara a la pregunta. (*El señor Lluch Martín pide la palabra.*)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún punto concreto, señor Lluch?

El señor LLUCH MARTIN: Un punto concreto.

Creo que he tenido una intervención corta, pero, al final, he hecho una pregunta más corta: ¿Cómo se traduce la política cultural (la respuesta es que no hay política cultural, existiendo diversos contenidos culturales) en los Presentes Presupuestos? ¿Cómo el hecho de que en España haya diversas lenguas y contenidos culturales se traducirá en la aplicación de los Presupuestos?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Cultura.

El señor MINISTRO DE CULTURA (Caballeras Gallas): Voy a ver si puedo contestar por orden inverso, para que no se me olviden las preguntas.

La primera es, naturalmente, la política cultural, que tiene que conocer las realidades constitucionales existentes en nuestro país, ya derivadas del hecho preautonómico como del hecho constitucional en sí, de la existencia de la Constitución. En ese momento, el tema para el Ministerio —creo yo intuir que es a lo que va el señor Lluch— es el siguiente: si hay dentro de la materia que se reserva al ámbito de lo regional una competencia de lo cultural absorbida por las regiones, el planteamiento será de convenios y contratos con esas regiones. Si no hay esa absorción de competencias, por analogía a los «landers», el tratamiento será de un supuesto más de la realidad nacional. Creo que esto es lo que quería el señor Lluch que contestase.

Segundo. Yo no me he evadido —y esto tiene mucha importancia para mí— de contestar el tema de televisión, por ninguna razón de precaución excesiva, ni siquiera de análisis de la propia situación del Ministerio en relación con el organismo autónomo de televisión. Lo que he dicho es que desde el principio de mi toma de posesión apunté que la solución era ésta y que va tardando esta solución. En lo que de mí depende, la regla de objetividad se mantendrá hasta que haya estatuto y el problema de clarificación de las cuentas se estudiará, pero con una aclaración. En el Ministerio no consta en absoluto ninguna solicitud, ninguna demostración, ningún dato, escrito ni oral, relativo al comportamiento de determinadas comisiones que tienen una gran capacidad de recepción en la prensa. Si hubiese seriamente una motivación de cuál es esa situación, el Ministerio, por sus mecanismos, actuaría, pero Televisión Española tiene Interventores de Hacienda específicos, Abogados del Estado específicos y un control presupuestario autónomo.

No puedo contestar al señor Pons —y perdóneme la equivocación—, porque cuando cité 5.300 millones a mí no me cuadraba porque estaba pensando en ingresos, que eran 4.000 millones lo que se había recaudado, y ello porque no tengo el Presupuesto de televisión, y no lo tengo porque no creía que hubiera una enmienda específica dirigida a este tema en las presentadas. Si lo hubiera sabido, es posible que hubiera traído ese Presupuesto. Por lo tanto, me remito al Presu-

puesto y a la memoria que ante Hacienda ha tenido que presentar televisión.

Si se me admite una digresión sobre esta materia, yo diría que lo que falló es la estructura administrativa, porque al no ser idónea para el planteamiento de los temas la necesidad del mecanismo de rapidez que significaba la televisión, que no se paraba nunca, no había instrumentos técnicos suficientes y entonces había que utilizar unos mecanismos forzados en materia de televisión. Eso se clarificó muchísimo cuando se transformó en organismo autónomo. Preocupado precisamente por eso, uno de mis últimos actos —no sé si lo recuerdan— fue transformarlo en organismo autónomo de los sometidos a normas ordinarias comerciales y no someterlo a un organismo tradicional sometido a la Ley de 1958.

A título personal diré al señor Trías que yo considero muy sosegadas sus observaciones, que las haré llegar a quien deba, de que las cualidades personales de un político no se exhiban como modo de realizar fenómenos de contraste y, si se exhiben, que se exhiban las de todos los que estén en el mismo caso.

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, ha terminado la intervención del señor Ministro de Cultura. La Comisión va a continuar sus trabajos, pero, en atención a que estamos ya en media tarde, suspendemos durante cinco minutos, no sin antes dar las gracias al señor Ministro de Cultura por su presencia.

Suspendemos por cinco minutos y la sesión continuará inmediatamente.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor Barón para una cuestión de orden.

El señor BARON CRESPO: Muy brevemente, señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista del Congreso y para que conste en el acta de la Comisión estas manifestaciones en relación con la sesión informativa que hemos celebrado.

Evidentemente, la de esta tarde ha sido más brillante que la de esta mañana, pero nosotros entendemos que, realmente, no se ha cumplido aquí la misión informativa respecto a la Comisión de Presupuestos.

Paradójicamente nos encontramos con que el Ministerio de Agricultura en el «Informaciones» de hoy, página 12, da muchísimas más explicaciones a la Prensa que las que ha dado a esta Comisión con respecto al tema de las Cámaras Agrarias.

En el tema de Televisión, en el tema de los servicios 04 y 09, nos hemos quedado en ayunas. Entendemos que, si tiene sentido plantear estas sesiones informativas en la Comisión de Presupuestos, es para que se nos conteste con precisión sobre los capítulos, los artículos, los conceptos presupuestarios, y admitimos que el señor Ministro venga acompañado de todo el «staff» de asesores y personal ministerial. Pero, desde luego, lo que nosotros no creemos es que esto en estos momentos, con la gravedad que tienen los debates del Presupuesto, pueda ser un juego de cintas dialéctico o cosas de este tipo. En este sentido proponemos, aparte de esta manifestación de desaprobación, que transmita al señor Ministro de Educación el señor Presidente nuestra preocupación y solicite que en la sesión de mañana no se produzca la misma situación que en el día de hoy.

El señor PRESIDENTE: Yo lo comunicaré así al señor Ministro de Educación, y en cuanto a la manifestación de desaprobación, realmente eso forma parte del enjuiciamiento que sobre el contenido del informe hace cada Diputado, y es razonable, aunque realmente no era éste el lugar adecuado para decirlo, porque eso se habrá de discutir, si hubiere lugar a discutirlo, en la Sección correspondiente. En cualquier caso, formularé el ruego del señor Barón al señor Ministro de Educación para la sesión de mañana.

Vamos a comenzar la discusión del proyecto. Al artículo 1.º —según dice el Reglamento, hay que comenzar por el texto articulado—, según se ve en la clasificación de enmiendas, hay una presentada, aunque fue debatida por la Ponencia, en relación con la Sección del Ministerio de Defensa. De todos modos, como la enmienda fue presentada al

Artículo 1.º

artículo 1.º, éste es el lugar adecuado para su defensa, en su caso. La enmienda es la número 1 y su firmante es don Heribert Barrera y Costa. ¿Está presente el señor Barrera y quiere hacer la defensa de su enmienda?

El señor BARRERA Y COSTA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrera.

El señor BARRERA Y COSTA: Señor Presidente, señores Diputados, voy a tratar de ser breve y me referiré primeramente al carácter de la enmienda y luego a sus motivaciones.

Por lo que se refiere al carácter de la enmienda, es evidentemente de carácter simbólico, es una práctica parlamentaria corriente en muchos países aprovechar la discusión del Presupuesto para realizar una crítica al principio de la distribución de los gastos del Estado, sin proponerse con ello obstaculizar las tareas administrativas y de gobierno. Esto se logra proponiendo una reducción simbólica de los créditos de las partidas en las cuales se considere que deberían realizarse economías. Este es el sentido de mi enmienda: llamar la atención del Gobierno sobre la excesiva cuantía de los gastos de Defensa, que constituyen un 13,2 por ciento del total del Presupuesto, y sobre la necesidad de reducirlos en futuros ejercicios. Pero como, al mismo tiempo, la reducción concreta que propongo es de 1.000 pesetas, carece de toda significación. Este resultado puede lograrse sin poner traba alguna a la normal marcha administrativa del Ministerio de Defensa y sin entrar en complicados análisis, para los cuales yo no sería competente en cómo y dónde podrían realizarse economías.

Mi enmienda es, pues, una crítica, pero, desde luego, una crítica constructiva.

Las motivaciones son económicas y políticas. Las motivaciones económicas las he indicado ya en parte; no voy a entrar en cifras porque no tenemos tiempo para ello ni sería útil, pero es una necesidad casi unánimemente sentida, al menos en mi circunscripción electoral de Barcelona, que hay que reducir los gastos improductivos del Estado y, en pri-

mer lugar, tanto por su importancia cuantitativa, como por su naturaleza, los de Defensa.

¿Qué significación tiene para España un elevado presupuesto de Defensa? ¿Contra quién debemos defendernos? Es evidente que ni nuestros vecinos del Norte ni del Oeste tienen ninguna intención agresiva contra nosotros. ¿Debemos defendernos contra algún país africano? La hipótesis me parece absurda, y es más absurdo todavía suponer que los agresores debemos ser nosotros. Aun suponiendo que lo deseáramos —que no es así—, el contexto internacional no lo permitiría.

No vale tampoco el argumento de la necesidad del prestigio militar para respaldar nuestra política exterior. Nuestro prestigio militar no nos ha servido ni tan sólo para que un Estado tan débil como Mauritania, a quien hace poco dimos un extenso territorio, respetase nuestros derechos de pesca tradicionales.

Para que se justifiquen nuestros gastos militares queda, finalmente, sólo un supremo argumento: la necesidad de defendernos de una posible agresión de los países del Este. Por mi parte, esta hipótesis me parece tan absurda como las anteriores. No creo en las intenciones agresivas de la Unión Soviética ni me parece que si las tuviese y llegasen los ejércitos rusos a los Pirineos nuestros medios de defensa lograsen detenerlos. En la época de las bombas atómicas, la suerte de las armas se habría decidido mucho antes.

En estas condiciones, hacer soportar a un país en plena crisis, a un país arruinado y lleno de deudas, a un país con un enorme déficit energético, con carencias enormes de infraestructura escolar, sanitaria y de comunicaciones, con una industria que en la mayor parte de los casos debería reconvertirse o modernizarse, con regiones que se despueblan por falta de las necesarias inversiones agrícolas e industriales, hacerle soportar —digo— el cuantioso peso de nuestros actuales gastos de defensa, me parece muy inadecuado. Si queremos seriamente salir algún día de la crisis, más que pactos coyunturales entre Gobierno y oposición lo que necesitamos es abordar el problema en sus propias raíces, y los gastos militares constituyen, sin duda, no todo el problema, pero sí una parte del mismo.

Quede bien claro que mi intervención no significa ninguna crítica a las Fuerzas Arma-

das ni intenta tampoco poner en duda su capacidad y dedicación, así como tampoco pone sobre el tapete la cuestión de su existencia y de los legítimos derechos adquiridos por quienes las componen. No propongo suprimir el Ejército ni la Marina: sólo planteo el problema de la conveniencia de reducirlos a la medida de nuestras reales necesidades y posibilidades. Ello, naturalmente, de manera progresiva y sin menoscabo alguno de su prestigio, sin perjudicar la carrera de las personas que las constituyen.

Planteo, en particular, la necesidad de que no se hable más por ahora de modernizar el armamento y de dotar a las Fuerzas Armadas de mayores medios. La tarea de mantener siempre al día a un Ejército como el nuestro representa un pozo sin fondo para nuestros recursos. El plazo de obsolescencia de los armamentos modernos, como el de los instrumentos de investigación científica, es muy corto. Está, pues, muy por encima de nuestras fuerzas intentar remontar incesantemente esta roca de Sísifo de la modernización de los medios militares ofensivos y defensivos.

Veamos ahora las modificaciones políticas de mi enmienda, que son, esencialmente, dos: la primera significa una pequeña y modestísima aportación a la urgente tarea de desmitificar las Fuerzas Armadas de nuestro país. Estamos ya en la democracia. Yo no soy sospechoso de complacencias con el actual Gobierno. Creo que podemos afirmar que si estamos en la democracia debemos tomar actitudes y conductas congruentes con este hecho. Me parece altamente perjudicial para nuestra convivencia y, además, casi insultante para nuestros jefes militares, continuar tratándolos de la manera reverencial como se ha hecho durante el régimen de Franco. Continuar hablando de poderes fácticos y, cuando conviene al Gobierno o a algún partido de la oposición, seguir agitando el fantasma del golpe de Estado militar.

Por mi parte, estoy convencido de que los Jefes y Oficiales de nuestro Ejército y de nuestra Armada, lejos de estar satisfechos con tal tratamiento, lo sienten como una dolorosa muestra de desconfianza, y casi diría de menosprecio. No veo por qué tenemos que poner en duda hoy su leal voluntad de servir al nuevo régimen democrático y de acatar la

voluntad popular, cuando ha sido legítimamente expresada.

En estas condiciones nuestro deber es tratar los problemas de la defensa con la misma naturalidad y sinceridad con que tratamos cualquier otro problema: el de la pesca o las obras públicas, por ejemplo, y, por tanto, si realmente creemos tener algo que decir en este terreno, debemos decirlo sin miedo a ofender, porque no hay intención de ofensa, y sin miedo a desencadenar fuerzas misteriosas y reacciones brutales.

Es ridículo suponer que intentar la reducción de los gastos de defensa puede favorecer un golpe de Estado. Los pretendidos precedentes históricos no prueban nada. El golpe de Estado se favorece, en cambio, perpetuando la pobreza y las desigualdades en nuestro desgraciado país y dando así lugar a violencias y desórdenes, porque, como muy bien dicen ustedes en castellano, «donde no hay harina, hay mohína».

La segunda motivación política de mi enmienda es que la misma representa ya una toma de posición contra cualquier intento de integrar a España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es evidente que si nuestros gastos de defensa son ahora excesivos, mucho más pasarían a serlo si entrásemos a formar parte de esta alianza militar. Soy contrario a la misma por convicción pacifista y por razón de política internacional, pero creo que los que no comparten mi opinión por tales motivos deben oponerse también a la entrada de España en la alianza por razones puramente económicas.

Es indispensable que evitemos entrar en un engranaje que nos haría sacrificar intereses vitales de nuestro pueblo y en particular la educación de nuestros jóvenes y una vida decorosa para nuestros jubilados, en aras de la participación en una empresa acaso legítima, pero que ni es la nuestra ni necesita de nosotros.

Si mi enmienda fuese adoptada creo que tendría para el Gobierno una doble significación: el Congreso no sólo se pronunciaría por una reducción futura de los gastos militares, sino que «a fortiori» se opondría al aumento inevitable de los mismos que resultaría de la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Y con esto, señores Diputados, he terminado por fin. Aun sabiéndome solo o casi he creído un deber de conciencia formular esta enmienda y confío que, sea o no adoptada, mis razones serán comprendidas y tenidas en cuenta en su día por quien corresponda.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Diputado quiere intervenir en turno a favor? (*Pausa.*) ¿Algún turno en contra? (*El señor López-Bravo pide la palabra.*)

El señor López-Bravo tiene la palabra.

El señor LOPEZ-BRAVO Y DE CASTRO: Señor Presidente, señores Diputados, pese al carácter expresamente simbólico de la enmienda que firma en primer lugar el señor Barrera y Costa, siento la imperiosa necesidad de manifestar mi más absoluta discrepancia con el espíritu que la informa y con los argumentos que ha utilizado para apoyarla. Voy a tratar de evitar argumentos polémicos.

Estoy convencido de que nuestras Fuerzas Armadas, de que nuestro Ministerio de Defensa, no cuenta con las consignaciones presupuestarias mínimas indispensables para el cumplimiento de sus fines. He leído con perplejidad y profunda contrariedad lo que se dice en la página 29 de la Memoria que el Ministerio de Hacienda ha redactado en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley General Presupuestaria. Cito: «Los gastos de inversiones militares corresponden a los fijados en la Ley de Modernización de las Fuerzas Armadas con una reducción global de 5.000 millones de pesetas destinados a reforzar la actuación de otros sectores». Fin de la cita. Creo que se trata de un intento irreal que no puede materializarse.

Por tener el honor de ser Oficial de Complemento de la Armada estoy más familiarizado con sus problemas y puedo decir que nuestra Marina no podría en modo alguno hacer frente a sus importantes y crecientes obligaciones. La parte que le corresponde de esos 5.000 millones de pesetas que se han eliminado implicaría, aparte de un daño incalculable e inadmisibles para la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, la paralización de hecho del programa naval en curso, con el dramático perjuicio para los trabajadores de la Empresa Nacional Bazán. ¿Por qué esta ficción

imposible? Estoy seguro de que habrá de corregirse, casi de espaldas al Congreso, o contando con él.

Es decir, mediante un anticipo de tesorería o crédito extraordinario. Por otra parte, está el grave problema de unos haberes para la marinería, a todas luces insuficientes, y de una dotación para la ración alimenticia que no se ajusta a la realidad.

Y pienso que, al igual que se ha propuesto acertadamente por la Ponencia para la Agricultura, en su informe sobre el artículo 7.º de la ley que nos ocupa, sería mucho más realista, más transparente autorizar en dicho artículo al Ministro de Hacienda, para corregir esta mutilación presupuestaria de cantidades que precisa —a mi juicio indiscutiblemente— el Ministerio de Defensa, y que, insisto, tendrán que corregirse en el ejercicio cuyo Presupuesto debatimos.

Por todo ello, huelga decir que votaré en contra de la enmienda número 1. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rovira.

El señor ROVIRA TARAZONA: En todas mis intervenciones procuro ser muy breve. En ésta, más, aunque de forma clara y contundente queremos decir que para el Grupo Parlamentario de UCD es imprescindible contar con unas Fuerzas Armadas y con un Ejército que esté dotado con los recursos económicos necesarios. El prestigio del Ejército lo consideramos uno de los pilares fundamentales del Estado. Se ha puesto de manifiesto hace unos días, con motivo del debate sobre una enmienda a la totalidad, la insuficiencia de recursos en relación con la Marina. Igualmente podríamos destacar la que existe en relación a otras Armas del Ejército. Por estas razones nos oponemos de forma enérgica a la enmienda que se ha presentado en el día de hoy.

El señor PRESIDENTE: ¿Ninguna otra intervención? (*Pausa.*) Señores Diputados, procederemos primero a la votación de la enmienda y, luego, en su caso, a la votación del artículo.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 19 votos en contra, ninguno a favor y 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los señores Diputados desea explicar su voto? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Solana.

El señor SOLANA MADARIAGA (don Francisco Javier): Para justificar la abstención del Grupo Socialista del Congreso en esta primera enmienda del proyecto de ley de Presupuestos del Estado.

Encontramos los socialistas que se está aprovechando un planteamiento de una enmienda para criticar, o analizar, o emitir opinión por anticipado sobre toda una consideración de las Fuerzas Armadas y de la defensa de una forma subrepticia. Queremos afirmar que no estamos dispuestos, y de ahí nuestra abstención, a plantearnos con motivo del Presupuesto toda la definición del papel que los guardianes de la defensa del país tienen en nuestro modelo constitucional que ahora se inicia, que no se empiece en estos momentos a hacer demagogia con las Fuerzas Armadas ni por un color ni por otro. Queremos plantearnos que para nosotros el tema de las Fuerzas Armadas es un tema enormemente serio. Un tanque es un tanque, no una frase. Por ello no hemos planteado ninguna enmienda al presupuesto de Defensa hasta tanto el Ministro del ramo no venga a la Cámara a explicar y a llegar al acuerdo que corresponde con los legisladores sobre cuál es la política de defensa de que este país pretende dotarse.

Como colofón de ello, entonces se sabrá claramente cuáles son las necesidades de recursos que el país necesita para dotar a los Estados Mayores de los medios precisos para defender ese país que han definido previamente el Parlamento con el Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa —puedo adelantarlo porque soy miembro de la Comisión de Defensa, en nombre del Partido Socialista— vendrá en enero a la Comisión de Defensa en una sesión específica a definir exactamente cuáles son las metas y planteamientos de su Departamento. Creemos que no se pue-

den plantear aquí ese tipo de enmiendas. Y quiero hacer un pequeño inciso a un planteamiento que en la primera sesión de esta Comisión hizo el Partido Comunista y hoy nuestro compañero de AP, señor López-Bravo: se volvió a debatir al plantear un tema de la Marina.

Creemos que tampoco es posible entrar en estos momentos en un tema enormemente delicado, donde podemos entrar en competencia con una política que el Ministerio de Defensa está llevando de unificación de los tres Ejércitos. Es prematuro el emitir juicios delicadísimos sobre si la dotación a la Marina es suficiente o no para las maniobras en estos momentos. Yo quisiera pedir a los compañeros de la Comisión que tuvieran enorme cuidado en los planteamientos que sobre este tema se hacen y esperar a que la Comisión de Defensa defina cuál es la política de defensa de que este país quiera dotarse.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trias Fargas.

El señor TRIAS FARGAS: Simplemente para aclarar el hecho de que yo haya votado en contra de una enmienda presentada por un compañero de la misma Minoría mía. Realmente, quiero dejar sentado que con el señor Barrera coincidimos en general sobre muchísimos temas y, posiblemente, sobre el transcurso último de su enmienda encontraríamos terreno de coincidencia. De todas formas, quiero decir que me parece que atacar un presupuesto militar sobre la base de un gasto excesivo, en términos generales, no me parece posible. En este momento los gastos son en España inferiores en este ramo, la presión fiscal es inferior a la de muchos otros países y, por lo tanto, cabe la posibilidad de aumentar los gastos militares. Lo que pasa, lo que puede ocurrir, es que, comparando gastos militares con otro tipo de gastos, optemos por unos con preferencia a otros; pero ésta no es la cuestión que en este momento tenemos planteada, porque no se nos ofrecen unos gastos alternativos. Se nos dice que los gastos, en general, de Defensa son excesivos, pero no se nos dice qué se va a hacer con el dinero que ahorraremos si los reducimos. En cuanto a la actitud, simplemente de cautela o de

principio, por lo menos yo, debo decir que no estoy de acuerdo.

Nosotros queremos un Ejército técnico, un Ejército equipado, un Ejército serio y un Ejército apolítico, y la manera de que el Ejército sea apolítico y estén constantemente al servicio del pueblo y de la democracia es darle los instrumentos profesionales que hagan falta. Es cierto, como han dicho los socialistas, que tal vez no sea éste el momento de pronunciarse, porque falta información; pero si nos falta información, entonces hay que aprobar el proyecto del Gobierno, que hemos de suponer que cuenta con el apoyo de los técnicos, de los profesionales, de los jefes militares y, en este sentido, yo no he votado por la enmienda de mi compañero el señor Barrera, con el que me gusta coincidir y así lo hago con máxima frecuencia.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bono.

El señor BONO MARTINEZ: Quiero decir que, en nombre de mi Grupo Parlamentario, estoy de acuerdo con las razones que ha expuesto el miembro del Grupo Parlamentario Socialista; pero en ese sentido quiero también hacer una advertencia en relación a lo que él ha aludido de nuestra propuesta de enmienda a la totalidad del Ministerio de Marina. Como sabemos que hay que discutir el problema de Defensa en este país, nosotros no hemos presentado otra enmienda en relación a ningún Ministerio de Defensa. De todas formas, hay que advertir que estamos tratando el problema del Presupuesto y esto entra dentro del problema del mismo.

La única observación que hemos hecho ha sido al problema de la Marina en relación a la posibilidad de que, si no se dota de una cuantía determinada (y por eso no nos metemos en la política interna hasta que no la conozcamos) de alrededor de 1.500 millones de pesetas, evidentemente esta Marina queda reducida al 70 por ciento y estará fondeada en los puertos y no podrá salir durante el año 1978. Este es el único sentido que tenía nuestra enmienda y no tratar el problema de Defensa, porque estoy de acuerdo con lo manifestado por el representante del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del artículo 1.º del proyecto, que no ha sido modificado por la Ponencia.

Efectuada la votación del artículo 1.º, fue aprobado por 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El señor DE LAPUERTA Y QUINTERO: La cantidad total no está aprobada; está a expensas de lo que resulte al final. Como en el artículo 1.º constan las cantidades del Presupuesto, supongo que la final será la suma de lo que se haya aprobado en la Sección.

El señor PRESIDENTE: El artículo 1.º está aprobado. Como no ha prevalecido ninguna enmienda a la totalidad de las Secciones, no se puede modificar su cuantía. Las enmiendas que se han presentado son todas de modificación de las dotaciones. Ciertamente podría haber una posibilidad de que se propusiera disminución sin aumento en otra partida. Pero en este caso no ocurre así. No hay ninguna enmienda que proponga disminución, sino aumento.

En cualquier caso, al final, la cantidad resulta de lo que se apruebe según las facultades de la Comisión.

Al artículo 2.º no hay presentada ninguna enmienda. Se acepta el texto del proyecto.

Artículo 2.º

Efectuada la votación del artículo 2.º, fue aprobado por 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 3.º

El señor PRESIDENTE: Al artículo 3.º existía una enmienda, retirada en su momento por el representante del Grupo Parlamentario Comunista en la Ponencia. La Ponencia propone la adición de un artículo 4.º del que Sus Señorías tienen el texto.

Vamos a poner a votación el artículo 3.º con la adición que propone la votación.

Efectuada la votación del artículo 3.º, fue aprobado por 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo 4.º

El señor PRESIDENTE: El artículo 4.º no tiene ninguna enmienda presentada. Se acep-

ta el texto del proyecto. Si los señores Diputados dan su asentimiento, nos evitaríamos el procedimiento de la votación. ¿Se aprueba por unanimidad? (*Asentimiento.*) Queda aprobado el artículo 4.º

Artículo 5.º Al artículo 5.º hay una enmienda, del señor Gómez Angulo. ¿Está presente para defender su enmienda? (*Pausa.*) Se entiende retirada. La Ponencia acordó rechazar la parte que se refiere a este artículo.

¿Se aprueba el artículo 5.º? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 6.º Al artículo 6.º ha presentado una enmienda el señor Pin Arboledas. ¿Está presente el señor Diputado para defender su enmienda? (*Pausa.*) Se entiende retirada. En consecuencia, la Ponencia acuerda rechazarla también y propone la aprobación del artículo 6.º (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 7.º A este artículo la Ponencia ha aceptado la enmienda número 195, del señor Gamir Casares, y la 203, del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático. Por lo tanto, se propone un texto que ya tienen SS. SS. en sus manos. ¿Existe la misma conformidad en relación con este artículo? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 8.º En este artículo existen unas cuantas enmiendas, de las cuales la 184 fue rechazada por la Ponencia, aunque algunos se mostraron favorables a su inserción. La Ponencia, prescindiendo de las demás enmiendas, propuso un nuevo texto, que resulta del espíritu de las demás enmiendas y que está presente en el artículo 8.º ¿Están conformes los señores Diputados respecto de este texto? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

El señor DE VICENTE MARTIN: Pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor De Vicente estima que debemos proceder a la votación con la mano alzada en este caso, por si va a explicar un voto distinto? (*Pausa.*)

Efectuada la votación del artículo 8.º, fue aprobado por 32 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El señor PRESIDENTE: El señor De Vicente ha solicitado la palabra para explicación de

voto y también observo que el señor Sánchez Ayuso. Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, señores Diputados, el Grupo Socialista del Congreso ha votado favorablemente, como es notorio, el texto del artículo 8.º, y hay parte del mismo que nace de la enmienda 237, que este Grupo Socialista presentó al texto de la Ley de Presupuestos en materia relacionada con las retribuciones de los funcionarios públicos y que no fue aceptada por la Mesa de la Comisión.

Tal como está el texto, salió —como el señor Presidente conoce perfectamente— de la Ponencia, si bien, como la Mesa sabe, quedaba por defender una enmienda de un Diputado de UCD, el señor Soriano Benítez de Lugo, cuya ausencia lamentamos, y personalmente, como funcionario público, al igual que él, lamento que no esté el señor Soriano Benítez de Lugo (destacado funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil y profundo conocedor —me consta a título personal— de las injusticias que padecen importantes sectores cuantitativos de la función pública española en materia retributiva). Quizá ha padecido una súbita enfermedad o, tal vez, múltiples ocupaciones como alto cargo en el Ministerio de Obras Públicas le han impedido estar aquí o, quizá, «ha recapacitado» —valga la expresión entre comillas— sobre la distorsión, al menos ideológica, que suponen los términos de su enmienda respecto a la falta de apoyo que él mismo recibió por parte de los restantes miembros de la Ponencia pertenecientes a la misma coalición de UCD.

Se trataba de una enmienda a la del señor Soriano, que, como digo, no fue defendida por sus compañeros de Ponencia y que, en todo caso, iba dirigida a lograr que, dentro de los distintos niveles de proporcionalidad con que se establecen las retribuciones básicas en la Administración Civil del Estado, de acuerdo con los términos de la Ley de Presupuestos, se redujeran las diferencias que, dentro de cada nivel de proporcionalidad, existen entre los distintos colectivos de funcionarios incluidos en ellos.

Perdonen SS. SS. una ligera explicación, que no tiene ánimo ofensivo en lo pedagógi-

co, sino clarificador en lo político, de lo que esta enmienda pretendía, y también perdonen SS. SS. que un Diputado socialista se encuentre defendiendo, digámoslo así, o lamentando la ausencia de un Diputado de la UCD, habida cuenta de que el Grupo Socialista del Congreso propuso una enmienda que fue rechazada, la 237, y que distribuía los incrementos de la masa retributiva por igual entre todos los funcionarios.

Es evidente que, ante la no admisión por la Mesa, por su repercusión a efectos pasivos de esta enmienda, el Grupo Socialista del Congreso veía como progresiva, aunque menor que los términos iniciales de la suya, la enmienda del señor Soriano Benítez de Lugo. La situación en que esta enmienda se encuentra obliga, en todo caso, a explicar el voto. Dentro de cada nivel de proporcionalidad con que los funcionarios públicos son retribuidos —es un sistema nuevo introducido por un Decreto-ley anterior al 15 de junio— existen colectivos con distintos coeficientes retributivos para personas que tienen la misma titulación académica exigida, a nivel educativo, para entrar en la Universidad. Quiere decirse que dentro, por ejemplo, del nivel 10 se encuentran titulados superiores, pero también quiere decirse que tan titulado superior es un catedrático de Instituto como lo pueda ser un alto funcionario del Ministerio de Hacienda o de Trabajo, que puede, evidentemente, cobrar retribuciones superiores a las de los catedráticos de Instituto.

En todo caso, lo que importa señalar es que existiendo distintas retribuciones, de hecho, dentro de cada nivel retributivo, que sólo se refiere a las retribuciones básicas, puesto que son las complementarias las que establecen las injustas diferencias que existen en la Administración Pública, la enmienda del señor Soriano, a falta de la nuestra, era una enmienda que ofrecía aspectos progresivos que merece que el señor Soriano hubiera tenido la oportunidad de haberla defendido correctamente y de que tal vez los términos inconcretos en que la misma estaba redactada, esto es, la referencia a que tuvieran un tratamiento favorable los Cuerpos o plazas con retribución más baja, hubiera requerido una conclusión que este Grupo Parlamentario, sin duda alguna, hubiera presentado, mediante una enmien-

da «in voce», a tenor de los términos propuestos en el artículo 96 del vigente Reglamento.

Quiere decirse que las diferencias de retribución entre los funcionarios no sólo se dan entre distintos niveles educativos, sino que, como es conocido, se dan dentro de un mismo nivel educativo.

No basta, para remediar esto, que se haya llegado a un consenso en el seno de la Ponencia y proponer a esta Comisión el envío al Gobierno de una moción para la elaboración de una nueva ley de la función pública antes del 30 de abril, porque las desigualdades injustas que llevan cuarenta años parece que no admiten demora ni siquiera al mes de abril, puesto que en todo caso de aprobarse esa ley y de ser justa (porque muchos nos tememos que en el propio partido del Gobierno puedan no contar con espíritus progresistas, cual es el caso del señor Soriano), en todo caso no entraría en vigor hasta el primero de enero de 1978.

Evidentemente, ante esta situación, y votados ya los términos del artículo, a los socialistas no nos queda otra explicación que la de señalar que confiamos en que la Comisión de investigación de las retribuciones de los funcionarios públicos, derivada de los acuerdos de la Moncloa, y que son términos sobre los cuales en cuanto a su creación esta Comisión tendrá evidentemente que pronunciarse y posteriormente en el Pleno del Congreso, podrá sacar a la luz lo que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, junto con otros Grupos, como el Mixto o el Comunista, habían establecido como espíritu de su enmienda lineal de aumento de las retribuciones, y lo que estaba claramente implícito también en la enmienda del señor Soriano.

Por eso nosotros hemos votado a favor, porque parte de nuestras posiciones están recogidas en ese texto, pero reconocemos y queremos que quede constancia de que desde el partido del Gobierno, más concretamente desde la UCD, no se ha facilitado —concretamente pienso en la presencia de este Diputado, no sé si ausente por razones personales, pero me consta su interés expuesto estos días en esta Cámara por defender estos temas— hacer frente a una injusta situación que hubiera requerido de estas Cortes que no hu-

bieran esperado al 1 de enero de 1978, sino que hoy al menos hubieran puesto parcialmente término a una evidente injusticia.

El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez Ayuso tiene la palabra.

El señor SANCHEZ AYUSO: Como representante en esta Comisión del Grupo Mixto, en el que está integrado el Partido Socialista Popular, al cual pertenezco, lo único que quería subrayar es que nuestras enmiendas en relación con los créditos de personal, concretamente en relación con el artículo 8.º, iban animadas por un espíritu de justicia, y algunas de ellas efectivamente han sido admitidas en su espíritu, no en su letra.

Quería también decir que dentro de las enmiendas presentadas había una que también habían presentado el Grupo Socialista y el Comunista, según las cuales el máximo de retribución permitido por el «Pacto de la Moncloa» podría repartirse de una forma absolutamente lineal.

Esto no ha podido obtenerse, entre otras cosas porque esta enmienda, junto a las de los restantes Grupos Parlamentarios de este mismo criterio, ha sido rechazada por implicar aumento de gasto debido a la repercusión en los derechos pasivos. Pero en cualquier caso, a nuestro juicio, es básico que se eliminen, aunque sea a través de un proceso gradual, las diferencias entre retribuciones de funcionarios que se hallan en el mismo índice de proporcionalidad, aparte de lo que en la Ponencia se ha establecido, consistente en reducir el abanico salarial entre los distintos índices de proporcionalidad.

En este sentido, creemos que la enmienda que había presentado el Diputado de la Unión de Centro Democrático, señor Soriano, inexplicablemente ausente a la hora de defenderla, era progresiva, era una enmienda que iba precisamente en el sentido de disminuir las diferencias entre las retribuciones dentro de los funcionarios que se hallan en el mismo índice.

Y en este sentido nosotros lo apcayábamos, e incluso pensábamos, junto con algún otro Grupo, que se podría establecer en su caso una concreción, consistente en que el incremento total de retribución de cada índice de proporcionalidad, concretamente el índice 10,

se aplicara, en primer lugar, a igualar las retribuciones básicas de los funcionarios del mismo nivel, y el resto, si existe, se distribuyera por partes iguales entre todos los funcionarios afectados. Esto no ha sido posible debido a que se ha rechazado por razones de ausencia esta enmienda del señor Soriano.

Por otra parte, es muy claro que la función pública necesita una regulación a fondo. La Ponencia, por unanimidad, ha pedido al pleno de la Comisión la creación de una sección con carácter de Comisión de encuesta que estudie las retribuciones del personal del sector público, así como también ha pedido elevar una moción al Gobierno para que en un plazo fijo envíe al Congreso un proyecto de ley que regule la totalidad de los aspectos de la función pública.

En realidad, de lo que se trata es de llegar a una nueva concepción de la función pública y de conseguir una ordenación racional de la Administración, evitando lo que ya ha sido tan habitual en el pasado, la patrimonialización de la función pública, la situación de privilegio de algunos Cuerpos en relación con otros que llega incluso al absurdo, corriente en nuestra Administración, de retribuir de forma totalmente dispar a funcionarios que ejercen la misma función, pero que pertenecen a Cuerpos distintos. No es posible que esta situación se mantenga mucho tiempo. Es imprescindible cambiar esto y muchas otras cosas dentro de la Administración y, a este respecto, nuestras enmiendas, algunas de ellas recogidas en el informe de la Ponencia del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, se encaminan en este sentido, lógicamente en un ámbito reducido, pues a lo que hay que ir es a que se elabore una ley progresiva de la Función Pública.

Quería decir, como ya he señalado, que lamento la ausencia del señor Soriano y no entiendo cómo ha tenido lugar. Creo que su Grupo Parlamentario, UCD, al no haber asumido su enmienda, ha perdido la ocasión de impulsar una aportación realmente progresiva al tema de las retribuciones de los funcionarios.

El señor PRESIDENTE: El señor Bono había pedido la palabra para explicación de voto.

El señor BONO MARTINEZ: Renuncio a ella, porque iba a abundar en lo que han dicho mis dos compañeros.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meilán para explicación de voto por el Grupo Parlamentario UCD.

El señor MEILAN GIL: Por lo que se entiende, para explicación de voto. En realidad, decir muy brevemente un par de cosas. Una, que aunque yo no represento efectivamente al señor Soriano, reconozco públicamente las manifestaciones acerca del carácter progresivo de su enmienda, y recoger también los lamentos que la ausencia de un Diputado de UCD tiene en esta sala. Son hechos que conviene destacar y cuya valoración cada uno haga como le parezca.

En cuanto al fondo del tema, diría que este artículo 8.º, cuya explicación de voto se está haciendo, creo que tiene un sentido muy claro; el voto ha sido afirmativo y por unanimidad, como por unanimidad se hizo la elaboración, la cual ciertamente fue bastante minuciosa y supuso un cambio rotundo, bastante importante, respecto de la propuesta inicial. Creo que es mérito de todos los que participaron y no es patrimonio exclusivo de ninguno. Unanimidad que, por tanto, es altamente elogiable.

El único sentido de la explicación es reafirmarse en la satisfacción de esta redacción, satisfacción naturalmente coyuntural, porque, como ha quedado muy claro y ha sido también unánimemente suscrito por todos, es conveniente, urgente, necesario llevar a cabo cuanto antes, y se ha marcado incluso un plazo en la moción propuesta, la elaboración de una nueva Ley de la Función Pública que recoja todos los aspectos, incluido, por supuesto, el retributivo, en donde hay muchas cosas que mejorar. En este sentido el Grupo Parlamentario UCD se ha adherido ya plenamente a la colaboración y participa en la idea de la necesidad de una nueva Ley de la Función Pública, completa, que satisfaga los sentimientos de justicia y de claridad que demanda evidentemente la sociedad española.

Decir también que esas situaciones de desigualdad que se dan entre los funcionarios que están en el mismo nivel fue igualmente

compartida por todos los miembros de la Ponencia; lo que sucede es que en el seno de la Ponencia no se encontró una fórmula técnica precisa, no fue aportada por ninguno de los ponentes para, en este momento de la elaboración de la Ley de Presupuestos, encontrar una solución clara, concreta, satisfactoria a una realidad que todo el mundo consideramos no clara, no satisfactoria, no justa; es decir, que la unanimidad refleja unos criterios coincidentes y las otras explicaciones no son explicaciones tanto de voto como manifestaciones personales de sentimientos por ausencia que, al parecer, es realmente muy querida desde los bancos de otras posiciones del Congreso.

El señor PRESIDENTE: El artículo 9.º tiene una redacción propuesta por la Ponencia. ¿Hay algún señor Diputado que entiende que no hay consenso suficiente? ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 10 hay una propuesta unánime, al haber sido retiradas las dos enmiendas. ¿Se entiende el mismo consenso? (*Asentimiento.*) Queda aprobado el artículo 10 por unanimidad.

El artículo 11 se encuentra en la misma situación. ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 12 hay dos enmiendas: la número 15, del Grupo Parlamentario Comunista, y la 241, del Grupo Socialista del Congreso. La Ponencia acuerda rechazarlas y queda el texto del proyecto. En relación a este artículo 12, ¿algún señor Diputado desea intervenir?

El señor ROVIRA TARAZONA: En relación a las enmiendas, no, porque han sido rechazadas; pero sí quiero hacer una advertencia y es que la Ponencia, en el momento de redactar el artículo 8.º de forma que variaba sustancialmente el texto del proyecto, prescindiendo del concepto del grado, incurrió en una omisión en este artículo 12, que se refiere a las pensiones de los pasivos.

En este caso, como consecuencia de las nuevas fórmulas creadas, que es sustituir la incorporación del grado a las retribuciones pasivas que sirven para la determinación de las pensiones o haberes pasivos, se ha podido ob-

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

servar que, en algunos casos, la mejora de las pensiones alcanza niveles muy bajos, y por esta razón es por lo que había que establecer un correctivo, y es que, en ningún caso, las pensiones pudieran alcanzar un nivel inferior al 20 por ciento, ni experimentar un incremento inferior al 20 por ciento.

Por eso me voy a permitir leer el texto que omitió la Ponencia en aquel momento, para que la Comisión pueda dar su parecer sobre el mismo. Como segundo párrafo del artículo 12 se diría: «En ningún caso el porcentaje de incremento de los haberes pasivos de los funcionarios, a que se refiere el artículo 8.º de la presente ley, será inferior al 20 por ciento tanto para la actualización como para los que se causen a partir del 1 de enero de 1978». Voy a entregar este texto a la Presidencia, ¿o ya lo tiene?

El señor PRESIDENTE: Lo tenemos. Entiende la Presidencia que se trata de una aclaración del informe de la Ponencia por omisión previa, y en tal sentido lo recibimos. Por tanto, se somete a votación el texto del artículo 12, con esta adición del informe nuevo de la Ponencia. ¿Hay consenso respecto de él? (Asentimiento.) Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 13

Al artículo 13 la Ponencia propone una nueva redacción del texto, a la vista de una enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, que fue rechazada. ¿Existe el mismo consenso en relación al artículo 13? (Asentimiento.) Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 14

Al artículo 14 el Grupo Socialista mantiene la enmienda 242, mientras que la Ponencia propone mantener su texto. ¿El Grupo Socialista va a defender su enmienda? Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: La enmienda 242, del Grupo Socialista, al artículo 14, en la página 98 del libro de enmiendas queda referida a aquellos supuestos en que los Departamentos ministeriales y los organismos autónomos realicen directamente alguna de las inversiones incluidas en este Presupuesto que aprobamos de los respectivos organismos y para su ejecución necesiten contratar personal.

Se autoriza, por el artículo 14, esta contra-

tación, pero nosotros, que en estos términos evidentemente estamos de acuerdo siempre que se haga con carácter excepcional, decimos que para ello, cuando con cargo a créditos de inversión se contrate personal, se deberá transferir las cantidades destinadas a tal efecto, dentro del crédito de inversión, al Capítulo I del correspondiente Presupuesto, donde se abrirá una nueva partida que consignará la cifra del personal contratado, esto es, las personas y su naturaleza, de fondos provenientes de créditos destinados a inversión.

Nuestra enmienda pretende, repito, que cuando existan estas inversiones, y por realizarlas directamente la Administración, ésta contrate personal —nos referimos a personal sujeto a la legislación laboral y personal eventual—, se elimine del crédito inicial la parte imputable a estos gastos de personal, y se haga constar de manera específica en la correspondiente partida de personal.

Parece que la justificación de la enmienda requiere explicar en alguna medida quiénes son estas personas a las que la Administración acude para, mediante vínculo laboral, realizar obras con cargo a créditos de inversiones.

Bien es cierto que, dentro de ellas, hay personas con distinta situación, pero en todo caso quiero señalar que hay Departamentos ministeriales importantes en la Administración pública —desde la perspectiva del uso de créditos de inversiones— dentro de los cuales se emplea personal eventual. Desde la perspectiva que contempla el precepto que analizamos y debatimos, hay Departamentos, cual es el caso del Ministerio de Obras Públicas, en el que existe, valga como información para la Comisión, del orden de 4.000 personas que habitualmente, es decir, no excepcionalmente, son utilizadas, sin embargo, como trabajadores eventuales a los que se remunera con cargo a créditos de inversiones.

Perdonen SS. SS. el aparente juego de palabras debajo del cual existe una realidad sociológica. Es la de que se contrata con carácter eventual a quienes, mediante renovación sucesiva de contratos, de hecho llevan —como me consta y nos consta a muchos funcionarios públicos que seguimos de cerca el te-

ma— hasta veinte años en la Administración como eventuales.

Estas personas de hecho se distinguen de los trabajadores por cuenta ajena que trabajan al servicio de la Administración pública en estos Departamentos solamente por el Capítulo del presupuesto, con cargo al cual cobran. Mientras en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores fijos (no me estoy refiriendo a funcionarios, sino a trabajadores fijos sometidos a la legislación laboral y que trabajan para la Administración pública del Estado o sus organismos autónomos) cobran con cargo a créditos de personal, éstos, los oficialmente eventuales y de hecho en no pocos casos habitualmente fijos, cobran con cargo a créditos para inversiones.

Nos encontramos ante un supuesto que no es excepcional ni en la Administración pública ni en las empresas privadas. De tal suerte que las Magistraturas de este país, no obstante lo poco progresivo de la legislación en el mismo existente, ya se han ocupado, como es conocido públicamente, de la figura de la sucesiva renovación de contrato de trabajadores eventuales, y es fácil encontrar múltiples sentencias que la califican como abuso de derecho. Y si eso se realiza en las empresas privadas, lo cual no es de recibo, cuando quien lo hace es el Estado parece que aún lo es menos. Porque evidentemente el Estado no sólo tiene la obligación de realizar una función pública, sino de realizarla ejemplarmente para el resto de los ciudadanos.

Quiero señalar, para evitar temores de que alguien piense que me estoy refiriendo exclusivamente al personal manual —al que me estoy refiriendo, por supuesto, en importante cuantía—, que con cargo a estos créditos para inversiones se emplea también a personas de titulación superior, como ingenieros, aparejadores y otras titulaciones de grado medio, que dan lugar a la aplicación de cargos de créditos para inversiones con destino, podríamos decir, espúreo en la medida en que sirven para remunerar personal.

Los Diputados socialistas sabemos perfectamente y no ignoramos que el coste de una inversión no es sólo el coste de los materiales y las materias primas que se emplean. Sabemos que también es coste de la inversión el importe de la mano de obra empleada en

su realización. No lo ignoramos, pero sabemos perfectamente que, bajo este aspecto contable y económico, se esconde, sin embargo, una realidad que para nosotros, como Grupo Socialista, es laboral y políticamente inadmisible.

Quiere decirse con ello que nuestra proposición de que se transfiera a su lugar correcto la parte del crédito imputada a personal no desvirtúa el coste de la inversión, pues en todo caso el Estado o el organismo autónomo pertinente puede conocer el coste de la inversión. De tal suerte que hay quienes afirman que nuestra tesis desvirtúa los costes y evita comparaciones homogéneas porque resultaría aparentemente, dicen algunos, más barato que la Administración realizara una obra porque en la inversión figurarían solamente los materiales, las materias primas, etcétera, pero no los gastos de personal, y, en todo caso, habría personas propensas a que todo lo realizara la Administración y sería una falacia afirmar que es más barato.

Pero nosotros no estamos aquí discutiendo cómo se forman los costes de las distintas obras, ni cómo se generan los distintos elementos económicos y contables imputables a una inversión.

Estamos diciendo que sin perjuicio de que la Administración pública estatal o los organismos autónomos tengan en todo caso que pasar conocimiento del coste de la inversión y puedan efectuarse cuantas comparaciones estimen oportunas, esto no requiere necesariamente que se encubran las retribuciones de toda esta serie de personas, muchos miles en la Administración pública, repito, en un crédito de inversiones.

Quiero señalar, por otra parte, para información de SS. SS., que nos consta que en el anteproyecto de presupuestos remitido por el Ministerio de Obras Públicas se hacía constancia, por separado, de uno y otro concepto, de tal suerte que la partida imputable a personal en los créditos de inversiones, por parte del Ministerio de Obras Públicas actual, se incluía dentro del Capítulo de personal, lo cual, repito, no distorsionaba el cómputo del coste de la inversión. Posteriormente, por razones que evidentemente no conocemos, puesto que no estamos en el Gobierno del cual forma parte el titular del Ministerio de Obras

Públicas, fue eliminada esta separación, se volvió a lo que ha sido tradicional en este tema. Esta no es una norma nueva, es una norma vieja y precisamente porque es vieja permite que haya veteranos, por así decirlo, del trabajo eventual que, sin embargo, de hecho, son fijos al servicio de un empresario que es público.

¿Cuál es la finalidad que lleva al Gobierno de la UCD a realizar esto y no la alternativa que propone el Grupo Socialista? Dicho sea de paso, tal vez sea éste el momento en que tengamos que coincidir el PSOE y la UCD esta tarde, aunque nosotros mantendremos nuestras afirmaciones hasta el final.

Quiero recordar, por coincidencia, que el señor Graullera, Secretario de Estado para la Administración pública, en una reunión en la que este Diputado ha estado presente y en repetidas ocasiones, ha expresado opiniones contrarias a la hoy mantenida por el Gobierno y, evidentemente, coincidentes con las que el Grupo Socialista en este momento postula y que el Ministerio de Obras Públicas, importante empleador de este tipo de trabajadores, mantuvo en la redacción inicial de su anteproyecto.

¿Se ha pretendido, tal vez, me pregunto, no asustar al país ofreciendo unas cifras altísimas de retribuciones de personal? No sé si es esto lo que hay detrás del tema, pero en todo caso quiero que quede claro, por parte del Grupo Socialista, que nos ratificamos en los términos de nuestra enmienda, porque no afecta para nada ni a la inversión ni al coste de la misma y anunciamos nuestro voto contrario al texto del artículo.

Nosotros estamos porque se realicen inversiones, y es necesario que se conozcan sus costos, pero no entendemos que esto requiera que se continúe utilizando como eventuales a personas que de hecho, repito, son trabajadores fijos al servicio de la Administración.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor y turnos en contra? (Pausa.) El señor Rovira tiene la palabra.

El señor ROVIRA TARAZONA: La primera aclaración que nos corresponde hacer es

que este artículo 14 no hace referencia alguna a problemas laborales, tal como ha puesto de manifiesto nuestro compañero que ha hecho uso de la palabra últimamente. No hace más que referencia a una posibilidad que se tiene en cuanto a la contabilización de unas inversiones realizadas directamente por la Administración; son casos excepcionales, es bien sabido, cuando la Administración realiza directamente estas inversiones.

Pues bien, de estos casos excepcionales, a su vez, sólo excepcionalmente, y lo dice de forma clara el precepto, se podría contabilizar el gasto de personal en los créditos de inversiones. Para que no exista ningún problema de orden laboral se dice también de forma clara en el mismo precepto que los contratos han de formalizarse inexcusablemente por escrito y, además, se ha de hacer constar su carácter laboral de acuerdo con la legislación vigente, así como la obra en servicio concreto para cuya ejecución se contrata, el tiempo de duración, etc. Es decir, el problema laboral no está implícito dentro del problema contable que se está ventilando en este artículo 14.

¿Cuál es la razón que mueve al Gobierno a recoger en estos supuestos excepcionales que los pagos por personal pueden contabilizarse en créditos de inversiones? Es que justamente hay ocasiones en que la Administración puede contratar con terceros, con entidades privadas para la realización de inversiones, o bien hacerlo directamente.

En aquellos casos en que la contabilidad se hace por separado, excluyendo los pagos de personal, resulta que las inversiones hechas directamente por el Estado tienen una cuantía inferior a cuando se realizan a través de terceros.

Esto produce por consiguiente una mutación de los verdaderos costos de las inversiones públicas; no es bueno y podría llevar a la conclusión inexacta de que la Administración del Estado hace mejor las cosas y más baratas que cuando se sirve de contratistas particulares. De ahí la conveniencia de que la contabilidad se lleve de la manera que aquí se dice, que, repito, únicamente puede utilizarse este procedimiento en forma excepcional.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro señor Diputado desea usar de la palabra para un turno en contra? (*Pausa.*)

El señor DE VICENTE MARTIN: Para una precisión de concepto, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por favor, no polémica, sólo precisión de concepto.

El señor DE VICENTE MARTIN: Una precisión de concepto es una precisión de concepto, y así lo hago, para alegrarme de que el señor Rovira, tras afirmar que el tema no tiene nada que ver con lo laboral, me haya dado la razón, leyendo la parte del artículo relativa a ello y precisar que sí se refería a lo laboral. Aunque es un tema que no es laboral, tiene evidentes coincidencias en este aspecto, de tal suerte, que han determinado nuestra intervención.

El señor PRESIDENTE: Dudaría que eso fuera una precisión de concepto, pero, en fin, lo dicho dicho está.

Tiene la palabra el señor Rovira.

El señor ROVIRA TARAZONA: Si vale una precisión de concepto, como precisión de concepto.

He entendido que la enmienda se refiere a la supresión del primer apartado, no del segundo, y por eso he dicho que el aspecto laboral estaba perfectamente recogido y lo que se estaba enmendando no tenía referencia más que a un aspecto contable.

He querido precisar este concepto.

El señor PRESIDENTE: El tema está suficientemente debatido. Vamos a proceder a la votación de la enmienda.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 19 votos en contra, 15 a favor y ninguna abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Procede votar ahora el texto del artículo 14 propuesto por la Ponencia, que es el texto del proyecto.

Sometido a votación el artículo 14, fue aprobado por 19 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 14. Al artículo 15 no hay ninguna enmienda presentada. ¿Entiendo que hay consenso para su aprobación? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 16 no hay ninguna enmienda presentada. ¿Entiendo que hay consenso para su aprobación? (*Asentimiento.*) Queda aprobado el artículo 16 por unanimidad.

Al artículo 17 hay una enmienda recogida en su espíritu y una propuesta unánime en el informe de la Ponencia, que ustedes conocen. ¿Entiendo también que hay consenso sobre este artículo? (*Asentimiento.*) Queda aprobado por unanimidad en la forma propuesta en el informe de la Ponencia.

Al artículo 18 hay una enmienda, la número 251, del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, remitida para su examen a la Sección 18. La Ponencia mantiene el texto.

En relación con esta enmienda, ¿algún portavoz del Partido Nacionalista Vasco tiene algo que afirmar en este momento, o se reserva? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el señor Sodupe.

El señor SODUPE CORCUERA: Nos reservamos para un momento posterior.

El señor PRESIDENTE: Se entiende, pues, retirada en este momento y afectará a la Sección 18.

¿Se aprueba el artículo por unanimidad? (*Asentimiento.*)

Queda aprobado por unanimidad el artículo 18.

A los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 no hay enmiendas. (*El señor Barón Crespo pide la palabra.*)

Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Hay una enmienda del Grupo Socialista del Congreso, la número 244, que propone la creación de un nuevo artículo como 22 bis. Esta enmienda no fue tomada en consideración por la Ponencia. Ahora, podemos aceptar que se trata después del artículo 24. Digo esto por el número de orden, que nosotros habíamos colocado un tanto arbitrariamente.

El señor PRESIDENTE: Sin perjuicio de que se apruebe o no, se le asignará el número de

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículos 19, 20, 21, y 23.

orden que corresponda y la votaremos al final del texto articulado.

Así, pues, ¿puedo entender que se aprueban los artículos 19, 20, 21, 22 y 23? (*Asentimiento.*)

Quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 24 Al artículo 24 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya. La Ponencia la recoge en su espíritu llevándola al artículo 25 que ella propone. Por lo tanto, el artículo 24 se mantiene igual.

¿Debo entender que hay también acuerdo unánime respecto al artículo 24? (*Asentimiento.*)

Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 25, nuevo Hay una propuesta de artículo 25, nuevo, según el texto del informe de la Ponencia, el cual se deriva de la aceptación del espíritu de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya. Voy a leerlo, para que no haya confusión:

«Artículo 25. En la medida en que se acuerden transferencias de funciones y servicios del Estado a regímenes preautonómicos, restablecidos o creados, a través de Comisiones Mixtas, se autoriza al Consejo de Ministros para transferir los créditos correspondientes a las haciendas preautonómicas».

El señor MARTIN TOVAL: Pido la palabra, señor Presidente, a efectos de aclarar la redacción del texto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín.

El señor MARTIN TOVAL: Respetando el texto como está aceptado por la Ponencia y por la representación del Grupo Parlamentario en la Ponencia, quisiera que la expresión «a través de Comisiones Mixtas» estuviese al principio, con lo que quedaría más claro. Es decir, se diría: «En la medida en que se acuerden, a través de Comisiones Mixtas, transferencias de funciones y servicios del Estado...», etc., porque, si no, no se entiende qué hacen las Comisiones Mixtas, si crean los regímenes preautonómicos o hacen transferencias.

El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo todos los ponentes y los señores Diputados

con esta fórmula más clara? (*El señor Sodupe Corcuera pide la palabra.*)

Tiene la palabra el señor Sodupe.

El señor SODUPE CORCUERA: Quisiera dejar constancia de que este nuevo artículo 24 es fruto de una enmienda que presentamos nosotros, concretamente la número 250 bis, que proponía la creación de un nuevo artículo y que ha quedado recogida en el texto de esa redacción que el señor Presidente acaba de leer.

El señor PRESIDENTE: Así se hace constar en el informe de la Ponencia, al final, donde dice «Nuevos artículos». A continuación, se dice que se ha recogido su espíritu en el artículo 25 nuevo. Eso dice en el informe de la Ponencia, así que es como S. S. indica.

¿Puedo entender que hay consenso sobre la corrección gramatical propuesta por el señor Martín y que se aprueba este artículo? (*Asentimiento.*)

Queda aprobado el artículo 25, nuevo.

El artículo 25 pasa a ser el 26. No se ha presentado ninguna enmienda al mismo. ¿Hay consenso sobre este artículo? (*Asentimiento.*)

Artículo 26

Queda aprobado por unanimidad.

Pasamos a la Disposición adicional primera, a la que no hay ninguna enmienda. (*El señor Barón Crespo pide la palabra.*)

Disposición adicional primera

Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Si el señor Presidente entra en las disposiciones adicionales, pediríamos votación, porque nosotros ya nos manifestamos en su momento, en las enmiendas que proponíamos, sobre la reforma de la Ley General Presupuestaria y estas enmiendas —ni la de organismos autónomos ni la de la Seguridad Social— no las aprobamos por unanimidad ni por consenso.

El señor PRESIDENTE: Se hace votación siempre que haya que hacerla.

A la Disposición adicional primera no hay ninguna enmienda. ¿Debo entender que hay consenso sobre la misma? (*Pausa.*) No hay consenso; se va a votar la Disposición adicional primera.

El señor TRIAS FARGAS: ¿Podría leerse el texto final?

El señor PRESIDENTE: Perdonen los señores Diputados. Se va a repartir el texto del articulado, tal y como lo propone la Ponencia, que nos lo acaban de traer, pero el señor Secretario va a dar lectura a la Disposición adicional primera.

El señor SECRETARIO (Núñez Pérez): Dice así: «Disposición adicional primera: se aprueba el Presupuesto-resumen de los Organismos Autónomos del Estado de carácter comercial, industrial y financiero en el que se relacionan para cada ente las dotaciones con la evaluación de las necesidades para el desarrollo de sus actividades en el ejercicio, por un importe total de ochocientos sesenta y seis mil setenta millones cuarenta mil pesetas, así como los recursos estimados para cada uno de estos entes, cuyo importe total asciende a la suma de ochocientos sesenta y seis mil setenta millones cuarenta mil pesetas».

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la Disposición adicional primera.

Efectuada la votación, fue aprobada la Disposición adicional primera por 19 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones.

El señor ROVIRA TARAZONA: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Rovira quiere explicar el voto?

El señor ROVIRA TARAZONA: No, señor Presidente. Es para hacer una advertencia que no he podido manifestar antes de la votación. Como parece que hemos aprobado la suma total de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, no creo que se haya tenido en cuenta la alteración que se ha producido en un organismo autónomo como consecuencia de una enmienda aceptada y no sé si la suma se ha tenido en cuenta, porque si no ha sido así entonces la suma no es la cantidad que hemos aprobado; no es ése el resultante, sino que hay que añadirle lo que a su vez ha sido objeto de la modificación en su correspondiente enmienda.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente; éste es el mismo caso técnico que en el artículo 1.º Si hay enmiendas en las Secciones o Presupuestos de los Organismos, se modifica la cuantía y si son enmiendas que se pueden discutir y votar por razones reglamentarias quedará afectada la cuantía en su caso. *(El señor Barón Crespo pide la palabra.)*

El señor Barón tiene la palabra para explicación de voto.

El señor BARON CRESPO: Muy brevemente, señor Presidente. Señoras y señores Diputados, nos hemos abstenido por una razón que hemos expuesto en varias ocasiones y que en este caso es palmaria; y es que con respecto a los organismos recordarán los señores Diputados que hemos dispuesto de un volumen en el último día, pero en general entendemos que la información que se nos da es absolutamente insuficiente y que es precisa una reforma de la Ley General Presupuestaria en este sentido.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barón.

Pasamos a la Disposición adicional segunda, que no tiene ninguna enmienda. ¿Se acepta el texto del proyecto de acuerdo con un anuncio de rectificación en el «Boletín Oficial de las Cortes»? *(Pausa.)*

¿Están de acuerdo los señores Diputados? *(Pausa.)*

Entonces, se procede a la votación.

Efectuada la votación, fue aprobada la Disposición adicional segunda por 18 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, tienen la palabra los señores De Vicente y Sánchez Ayuso.

El señor DE VICENTE MARTIN: El voto contrario al texto por parte del Grupo Parlamentario Socialista deriva, como ya tuvimos ocasión de señalar en el debate a la totalidad (bueno es recordarlo brevemente por ello), de la falta absoluta de información para poder analizar los flujos de la Seguridad Social en base a los datos que nos han sido remitidos por el Gobierno.

Disposición
adicional
segunda

Bien es cierto que el Gobierno, al remitir los documentos (esto es, el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social, el informe financiero y el informe económico), lo hace en cumplimiento de una ley —la Ley General Presupuestaria—, que nosotros entendemos somete al control presupuestario de la Seguridad Social —de cuya cuantía, prácticamente, equivalente a los Presupuestos del Estado, no hace falta recordarles mayores detalles— a un régimen distinto del que se someten los Presupuestos Generales del Estado, distinción que comporta una situación de desequilibrio negativo para quienes desde el Parlamento tenemos la obligación de controlar todos los gastos públicos.

Es decir, el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social ofrece una mínima información, con un desglose rigurosamente insuficiente, que en todo caso no permite analizar con seriedad lo que la Seguridad Social comporta en este país y, consecuentemente, dificulta la presentación de enmiendas concretas.

Nosotros entendemos, señoras y señores Diputados, que de seguir la Ley Presupuestaria en los términos vigentes, nos encontraremos con una imposibilidad práctica de controlar esa importante cifra de millones de pesetas que supone la Seguridad Social, y entendemos que deben ser remitidos a esta Cámara los Presupuestos de todas las entidades gestoras, servicios comunes de inversión, servicios sociales y mutuas patronales que integran el sistema de la Seguridad Social. Esto, unido a la falta de envío por parte del Gobierno de la memoria de coste del servicio, que introduce un nuevo elemento de falta de información sobre los flujos financieros de la Seguridad Social y sobre lo que al país cuesta la misma, es lo que determina el voto negativo que ha exteriorizado el Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Vicente.

Sigo recordando a los señores Diputados que por favor tengan la cortesía de atender a las intervenciones que se están produciendo.

El señor Sánchez Ayuso tiene la palabra.

El señor SANCHEZ AYUSO: Una intervención muy breve, porque, en realidad, el com-

pañero señor De Vicente ha expuesto antes las razones del voto negativo del Grupo Socialistas del Congreso, y yo, en representación del Grupo Mixto, quería indicar que son las mismas que han hecho que nosotros vote-mos en contra de esta Disposición adicional segunda.

En su momento presentamos una enmienda a la totalidad —que tuvimos ocasión de defender y perdimos—, basándonos en la falta de detalle que impedía una apreciación de ese Presupuesto-resumen.

También insistimos en que es necesario que, para poder ejercer la función de control parlamentario, se presenten en el futuro unos Presupuestos de la Seguridad Social mucho más detallados y sobre los que se pueda ejercer la labor de control que es normal en todo Parlamento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Con esto queda debatido el articulado, salvo que el señor Barón desee intervenir en relación con una enmienda que dice desapareció en la vorágine de la Ponencia. ¿Qué número es?

El señor BARON CRESPO: Es la enmienda número 244, página 99.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Barón. Figura como no admitida a trámite en el anexo del acuerdo de la Mesa.

El señor BARON CRESPO: Nos gustaría, señor Presidente, que se nos diera una explicación de por qué esta enmienda no está admitida, si no implica aumento de gasto.

El señor PRESIDENTE: Es acuerdo unánime de la Mesa. No fue admitida porque entiende la Mesa que suponía aumento de gasto. Es el artículo 107, 2, y así lo ha entendido la Mesa.

El señor BARON CRESPO: Nosotros entendemos que no implica aumento de gasto, porque no hay consolidación de derechos, sino unos créditos que se agotan.

El señor PRESIDENTE: Así fue entendido por la Mesa, y no es éste el momento proce-

sal de entrar a discutirlo. Le ruego, señor Barón, que comprenda que la decisión de la Mesa es acertada.

El señor BARON CRESPO: Dado que no hay recurso de reposición en este acto, que conste, al menos, nuestra protesta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barón.

Y pasamos al análisis de las Secciones. Las Secciones se podrían ir viendo porque no podemos perder mucho tiempo, pero de momento hay dos que la Mesa entiende —sin perjuicio de que los señores Diputados hagan uso del derecho que les confiere el Reglamento— han sido analizadas y debatidas ya; son la Sección de Agricultura y la Sección de Cultura.

En la Sección de Agricultura se va a proceder ahora a la defensa de las enmiendas, en su caso, si procede, y posteriormente a su votación.

El señor BARON CRESPO: Evidentemente, entra dentro de las facultades de la Presidencia ordenar el debate. Nosotros nos pronunciamos clarísimamente en contra de que, porque hayan venido dos Ministros a informar, se deba seguir ese orden. De todas formas hay preguntas que no se han contestado. No estamos de acuerdo con ese orden que impone la Presidencia en este momento.

El señor PRESIDENTE: La Presidencia no impone un orden. Ha sido sugerencia de algunos señores Diputados el que se hiciera así. Por tanto, no hay ningún problema en establecer otro orden distinto. Ruego a los señores representantes de los Grupos que se acerquen a la Mesa y muestren individualmente su parecer sobre este punto porque es al Presidente, de acuerdo con la Mesa, a quien corresponde decidir sobre este tema. (Pausa.)

Esta Presidencia rectifica su criterio y, por tanto, se va a proceder a la discusión y votación por el orden de las Secciones.

A la Sección 1.^a, que se refiere a la Casa de S. M. el Rey, no hay ninguna enmienda. ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobada por unanimidad.

A la Sección 2.^a, que se refiere al Consejo

del Reino, no hay ninguna enmienda. ¿Hay consenso?

El señor BARON CRESPO: No hay consenso.

El señor PRESIDENTE: Los señores Diputados que voten a favor de la Sección 2.^a, levanten la mano, por favor. (Pausa.)

Los señores Diputados que voten en contra, levanten la mano, por favor. (Pausa.)

Los señores Diputados que se abstienen, levanten la mano, por favor. (Pausa.)

Como ha habido 16 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención, hay empate. Según el artículo 79 del Reglamento, hay que repetir la votación.

El artículo 79 del Reglamento dice que cuando ocurriera empate en alguna votación ordinaria se repetirá. Si resultare nuevo empate, se volverá a votar en la sesión próxima, etc.

Efectuada nuevamente la votación, quedó aprobada la Sección 2.^a por 18 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

El señor PRESIDENTE: A la Sección 3.^a hay una propuesta unánime en virtud de unas enmiendas. ¿Existe consenso en cuanto a la Sección 3.^a? (Asentimiento.) Queda aprobada por unanimidad.

A la Sección 4.^a no hay ninguna enmienda. ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobada.

A la Sección 5.^a, que se refiere a Clases Pasivas, había unas enmiendas que han sido retiradas.

El señor BARON CRESPO: Pedimos que se someta a votación de la Comisión la presentación y aprobación de una moción al Gobierno para que estudie la revisión del Estatuto de Clases Pasivas en lo relativo a la cesantía de los señores Ministros reduciéndola a un plazo de dos años.

El señor PRESIDENTE: Lo que se pide ahora es si existe consenso respecto de la Sección 5.^a Después hablaremos de la moción. ¿Se aprueba la Sección 5.^a? (Asentimiento.) Queda aprobada. En el informe de la Presi-

Secciones
del presu-
puesto

dencia verán el texto de la moción los señores Diputados.

El señor DE LAPUERTA Y QUINTERO: Creo que las mociones deberían votarse todas al final, porque ya hemos pasado varias mociones, por ejemplo, una en la que se solicita un nuevo estatuto de la Función Pública. Sería, pues, una excepción votar ahora esta moción y no haber votado las demás.

El señor PRESIDENTE: Así se hará, porque es más razonable votar todas al final.

Sección 6.^a, que se refiere al Tribunal de Cuentas. No hay ninguna enmienda. ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobada.

Sección 7.^a Han sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Comunista. ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobada.

La Sección 11 (porque la 8, 9 y 10 no existen, aunque así figura en el informe de la Ponencia, y no vamos a aprobar lo que no existe) no tiene ninguna enmienda. ¿Se acepta el texto del proyecto del Gobierno y entiendo que hay consenso?

El señor BARON CRESPO: No, no lo hay.

El señor PRESIDENTE: Entonces, los señores Diputados que estén a favor de la aprobación de la Sección 11, que levanten la mano, por favor. (*Pausa.*)

Los señores Diputados que quieran votar en contra, que levanten la mano, por favor. (*Pausa.*)

Los señores Diputados que se abstengan, que levanten la mano, por favor. (*Pausa.*)

Queda aprobada por 21 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Sección 12. No tiene ninguna enmienda.

El señor BARON CRESPO: Quería hacer una pregunta simplemente como cuestión de orden. ¿Constan en la Mesa las sustituciones?

El señor PRESIDENTE: Constan por escrito.

El señor BARON CRESPO: ¿A efectos de esta sesión?

El señor PRESIDENTE: Sí, constan. ¿Se aprueba la Sección 12? (*Asentimiento.*) Queda aprobada.

Sección 13. Ministerio de Justicia. Hay dos enmiendas: una aceptada y otra retirada. ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobada.

Sección 14. No tiene ninguna enmienda, porque la del señor Barrera se ha discutido en el artículo 1.^o ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobada.

Sección 15. Ministerio de Hacienda. No tiene ninguna enmienda. ¿Se aprueba? (*Asentimiento.*) Queda aprobada.

Sección 16. Como a esta Sección hay enmiendas y los señores Diputados estarán un poco cansados, continuaremos mañana con esta Sección después de la intervención del señor Ministro de Educación que está citado a las diez de la mañana. Les ruego puntualidad porque empezaremos a dicha hora.

Se levanta la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID